



eusebio a. morales



Revista
Lotería

Nº 276

FEBRERO, 1979

Con motivo de cumplirse este mes de febrero 50 años de la muerte del Dr. Eusebio A. Morales, la Revista Lotería presenta una selección de sus escritos, ordenados de manera que el lector conozca algunas apreciaciones sobre la Guerra de los Mil Días, la Independencia del Istmo y las Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, como también su pensamiento económico y político.

No se trata, pues, de una antología rigurosa, sino de una selección instructiva para familiarizar a nuestros lectores con algunas ideas del Dr. Morales sobre aspectos tan importantes de nuestra historia.

En una próxima edición, incluiremos trabajos sobre el ilustre hombre público, para así dar una visión más amplia y profunda de su pensamiento y de su acción.

Mi Misión Al Ecuador

Acabo de leer con el más intenso interés y poseído de la más viva emoción, el primer volumen de la obra *Memorias de las Campañas del Istmo*, escrito por el doctor Belisario Porras, entre los años 1900 y 1902, y esa lectura ha despertado en mí recuerdos de sucesos y de personas que parecían ya tan remotos en el tiempo que no me imaginaba podrían recobrar jamás la vida y el color que las circunstancias de entonces les prestaron. Y sin embargo, ¡han pasado apenas veinte años! Pero si es posible condensar en un país y en un período de pocos años, los acontecimientos de varios siglos, Panamá nos presenta el caso tal vez único de un país que ha tenido en un quinto de siglo la vida más intensa y más precipitada de que haya ejemplo en la historia.

En esta balumba casi increíble de acontecimientos inesperados y de súbitas transformaciones, nuestra memoria colectiva se ha embotado y los hombres que podían hacerla renacer se han visto envueltos en el turbión de los nuevos sucesos. La obra del doctor Porras viene como un estímulo a remover las dormidas impresiones, a evocar las realidades de una época oculta todavía a los ojos del mayor número, y por eso incomprensible; a darle elementos de información directa y autorizada a la historia del país.

Como es notorio, yo tomé parte en el movimiento liberal revolucionario que conmovió a Colombia, desde Octubre de 1899 hasta Noviembre de 1902; fui uno de los miembros de la expedición armada que bajo las órdenes del doctor Porras, desembarcó en el Istmo el 31 de Marzo de 1900, y puedo por esas circunstancias confirmar con mi testimonio la veracidad y la fidelidad completas de la narración contenida en el libro que acabo de leer. C'est icy un livre de bonne foy, lecteur, como dice Montaigne en el prólogo de sus célebres Ensayos.

En el curso del libro el doctor Porras hace varias referencias a una misión importante que me llevó al Ecuador en Mayo de 1900, pero no era posible para él, cuando escribió, obtener de mí los detalles más interesantes de mi viaje y de mis gestiones, y creo que es oportuno complementar la relación histórica de los sucesos con esta breve colaboración.

Entre el doctor Porras y yo existe la amistad más cordial e íntima desde el día en que nos conocimos, el año de 1888. Era yo un jovencillo, recién salido del colegio, muy amante del estudio, y siempre deseoso de presenciar exámenes y fiestas escolares, cuando dos amigos, los hermanos Valverde que me servían de guías y directores en Colón, fueron invitados por el doctor Simón Araújo a presenciar los exámenes y allí conocí al doctor Porras, quien, si mal no recuerdo, era Profesor de la institución. Mi primera impresión al verle fue la de que era un extranjero, un alemán o suizo, de piel blanca. cabello rubio y gafas profesionales; pero luego conversamos, cambiamos ideas generales sobre enseñanza y nació entre los dos una viva simpatía que luego con el curso de los años se fue convirtiendo en amistad íntima, atraídos recíprocamente por la identidad de ideas y aspiraciones, y por un irreprimible espíritu de rebeldía contra toda opresión, que ha sido nuestro vínculo más estrecho. Escribimos juntos en los *Anales Judiciales* y en *La República*, periódicos de distinto carácter pero ambos de combate, y cuando el doctor Porras se ausentó de Panamá en 1896 yo era uno de sus más íntimos confidentes.

Cuando estalló la revolución liberal armada en 1899, y los jefes del partido en Panamá se hallaban impotentes para lanzarse a la guerra, pensamos todos en que el doctor Porras debía venir del exterior si se conseguían algunas armas, para contribuir con el concurso del Istmo a hacer más pronto el triunfo del partido liberal. Y al discutirse sobre quién debía ir a Nicaragua a tratar con el doctor Porras la grave cuestión de su venida con una expedición armada, fui designado yo por las circunstancias personales que he mencionado. A propósito de las discusiones que precedieron a mi viaje,

recuerdo una con el doctor Pablo Arosemena, quien no se oponía al plan de la invasión al Istmo, pero lo consideraba muy aventurado y peligroso. "Vea, —me decía una vez en el zaguán de la casa de don Pedro A. Díaz, con la vivacidad que le era habitual—en el interior de Panamá, no encontrarán ustedes quien tome un rifle; apenas desembarquen, todo el mundo se irá a los montes en fuga y después que hayan pasado ustedes con los pocos soldados que traigan, todos los pueblos se les volverán enemigos al ver que les han comido las gallinas, los pavos y los marranos. Usted verá, usted verá, pero díglele al doctor Porras que algo hay que hacer".

Salí de Panamá el 10 de Enero de 1900 y llegué a Managua unos cinco o seis días después.

No me cansaré de repetir lo que muchos amigos saben desde hace años sobre mis impresiones al llegar a Managua. Yo pensaba encontrarme allí con un hombre en circunstancias modestísimas, como pasa casi siempre con los extranjeros que van sin recursos a buscar fortuna en tierras desconocidas; y mi sorpresa fue inmensa al ver que el doctor Porras se hallaba en una situación realmente envidiable. Tenía en Managua a sus dos hijitos Belisario y Demetrio, internos en un buen colegio; desempeñaba el importante puesto de Abogado Consultor del Gobierno con el aditamento de gozar de la más absoluta confianza del Presidente General Zelaya; era abogado de una Compañía de Navegación establecida en Bluefields, y tenía además una importante clientela privada; era Profesor de Derecho Internacional en la Universidad o en la Escuela de Derecho y no tenía más ocupaciones productivas porque a pesar de su increíble laboriosidad, las horas del día y muchas de la noche no eran suficientes para atender a aquel cúmulo de trabajo. Por último, en un concurso abierto por el Gobierno para escribir la Geografía de Nicaragua, el doctor Porras había tomado parte y su obra había sido premiada como la mejor y más completa. Pocos meses antes de llegar yo, el doctor Porras había sido nombrado Cónsul General de Nicaragua en Londres y estaba listo para salir a dirigir personalmente la edición de su libro, cuando estalló la revolución colombiana. ¡Y era un hombre en aquella situación a quien iba yo a pedirle que abandonara a sus hijos, que despreciara una fortuna segura, que perdiera una posición social y política privilegiada, para correr los azares de una invasión armada, los peligros más grandes y hasta la muerte! Debo confesar que aquello me pareció, como le parecería a cualquiera persona juiciosa, una enormidad que llegaba a los linderos del absurdo. Generalmente el revolucionario tiene algo de aventurero y de desesperado y yo iba a convidar a un amigo querido a tomar parte en una aventura extraordinaria y pe-

ligrosa precisamente en la hora en que este amigo recuperaba su tranquilidad de espíritu después de torturas íntimas inmensas, se hallaba en plena prosperidad, gozando de distinguidísima posición social, querido de todas las capas del pueblo nicaragüense, estimado, agasajado, sin enemigos y sin penas.

Narro estas circunstancias porque ellas forman una base cierta para conocer el temple de un carácter y son datos positivos para estimar la calidad de un patriotismo.

El doctor Porras no vaciló un solo instante. El deber nos llama, me dijo; cumplámoslo sacrificándolo todo, hasta nuestras vidas. Sé que vamos a lanzarnos en una aventura sin precedentes, llena de azares, de sufrimientos y de peligros, pero no podemos evadir el cumplimiento de ese deber, y lo cumpliremos con fe, con valor y con entusiasmo. Estas fueron poco más o menos sus palabras, dichas con la vehemencia del convencido y repetidas después siempre que hablábamos sobre nuestros planes.

No es preciso que yo haga comentarios sobre esa actitud del doctor Porras, pues ella se comenta por sí misma; pero la historia de los sucesos que él narra en su libro demuestra que en aquella empresa no le tocó como cosecha final sino el sacrificio de todo, fortuna, posición política, amistades, influencias; no salvó sino la vida y el prestigio que siempre adquiere y conserva quien arriesga todo por servirle a una doctrina o por realizar una aspiración nacional.

* * *

Lo que antecede, explica por qué me hallaba yo en la expedición desembarcada en San Bartolo, cerca de Charco Azul, en Marzo de 1900, y hasta cierto punto explica por qué fui designado, después de maduras deliberaciones, para ir al Ecuador en busca de nuevos elementos de guerra con que proseguir la empezada campaña.

Mis compañeros salieron de Chitré en dirección de Santa María, en la tarde del 10 de Mayo y yo me quedé solo, hospedado en la casa del Presbítero Melitón Martín, esperando embarcarme en las primeras horas de la madrugada del 11. Iba a conducirme a Taboga un marino muy práctico en nuestros mares, Marcelino Cedeño, en el bote abierto llamado **San Francisco**, sin otra tripulación que un niño hijo de Cedeño que le acompañaba. El bote llevaba un cayuco pequeño en que podían apenas sentarse incómodamente dos personas.

Mi plan, discutido y convenido previamente con Cedeño, era llegar tan cerca de Taboga como nos fuera posible en la madrugada

del 13, trasbordarme al cayuco para desembarcar donde pudiera y ocultarme durante el día en algún punto de la isla hasta ponerme en contacto con algunos amigos personales de absoluta confianza que yo tenía en el pueblo.

El único incidente de la navegación digno de ser relatado fue la aparición en la mañana del 12, entre San Carlos, Chame y los Otoques, de un buque velero que parecía cargado de tropas por la gran aglomeración de hombres en su cubierta. Le pregunté a Cedeño si en su concepto corríamos algún peligro y me contestó sencillamente: "no, doctor, ellos también andan a la vela y deben ir con miedo". En Taboga averigüé después que aquella gente era parte de la que el Gobierno había tenido escalonada entre Santa María, Aguadulce y Antón, embarcada precipitadamente a la aproximación de nuestras fuerzas.

Como habíamos previsto Cedeño y yo, en la madrugada del 13, después de dos días completos de una navegación incómoda, llegamos al canal de Urabá, con la intención de pasar por él y aproximarnos lo más posible a un buen desembarcadero. La marea bajaba ya y había en el Canal una corriente tan poderosa hacia afuera, que después de una media hora de lucha para avanzar, Cedeño reconoció que ello era imposible y resolvimos dejar el **San Francisco** anclado al cuidado del niño que nos acompañaba, para seguir Cedeño y yo en el cayuco bajo una lluvia incesante, hasta un lugar en que yo pudiera ocultarme antes de amanecer.

Después de una hora de brega angustiada por estar ya amaneciendo, llegamos a Playa Honda; yo salté con precipitación y corrí hacia la casa del viejo amigo don José Navarrete, en momentos en que las gentes del pueblo comenzaban ya a levantarse y había movimiento en el matadero público, y cuáles no serían mi pesadumbre y mi agonía al ver que el señor Navarrete, por no saber quién llamaba con tanta tenacidad a sus puertas, se negaba a abrirlas manifestando que era muy temprano y que quien llamaba debía volver más tarde. Fue su hija Ramona quien reconoció al fin mi voz y le indujo a recibirme. Aquel viejo amigo y sus hijos Gregorio y Alberto me dieron todas las noticias que sabían, me informaron sobre la salida próxima de los vapores y se encargaron de ir a Flamenca a iniciar los arreglos de mi viaje directo a Guayaquil, pues yo no podía tocar en el puerto colombiano de Buenaventura.

Durante cuatro días estuve oculto en una especie de sótano que miraba al mar, formado por el barranco sobre el cual estaba asentada la casa, y tres tabiques endeble de madera que cubrían imperfectamente el frente y los costados. Ni aun toda la familia Navarrete supo que yo me encontraba en aquel lugar, arreglado

según me pareció, para cambiarse de vestido las bañistas que usaban la playa cercana.

Al fin, con la esperanza de embarcarme en el vapor chileno **Imperial**, salí en la noche del 16 de Mayo para Flamenco en un bote conducido por los Navarretes. Llegamos frente al vapor y uno de mis acompañantes entró a éste a terminar los arreglos para la admisión de un pavo (todo el mundo en Panamá sabe lo que esto significa). Después de una larga espera regresó el comisionado diciendo que había agentes de policía abordo, que el cocinero del vapor decía que sí me admitía pero que el único modo era que yo entrara al amanecer confundido con los grupos de trabajadores empleados en la carga y descarga del buque. Tuve que permanecer toda la noche en vela, acurrucado en un rincón del bote y temeroso de ser reconocido. En la madrugada, como estaba convenido, entré al vapor con un grupo de trabajadores, fui conducido a la presencia del hombre que disponía de mi suerte, un cocinero chileno con la cara llena de hondas cicatrices, quien me miró de arriba abajo, y convencido por mi traje de la poca importancia del pavo, me dijo con aire definitivo: "bueno, treinta pesos". Después que le hube pagado me llevó a un lugar de la cubierta en donde quedé medio oculto entre fardos, barriles de comestibles y pacas de alfalfa; pero como una hora después vino a buscarme y con grandes precauciones me llevó a un cuarto de metal contiguo a la cocina, frente al corral del ganado, y allí me encerró con llave. Mis torturas en aquel lugar fueron horrendas. A medida que entraba a funcionar la cocina y que el sol ascendía, la temperatura de aquel cuarto iba subiendo también hasta lo intolerable. Y en aquel infierno permanecí el 17, el 18 y el 19 de Mayo, hasta que el buque zarpó, después de dos días de atraso.

El último día tuvo para mí grandes sobresaltos, pues la vigilancia de la policía era más severa y el tráfico con la ciudad de Panamá era más activo. Hubo un momento en que me creí descubierto y detenido. El cocinero, además de su trabajo, tenía un negocio corriente de contrabando con los países del Sur, y compraba artículos de seda a varios comerciantes de la ciudad. Como a las nueve de la mañana del día 19, abrió repentinamente la puerta y se me presentó medio ebrio, con un cuchillo en la mano, acompañado de un individuo que al verme se quedó pasmado de asombro. Cerraron su trato sobre sedas y cuando iban a retirarse no pude reprimirme y le hablé al vendedor, que era un miembro de la familia Merel, llamándole la atención hacia las consecuencias que para mí podía tener una indiscreción suya, y él me contestó que no tuviera temor alguno, pues él era liberal, y efectivamente, fue él

quien después de mi partida pudo dar en Panamá la noticia cierta de mi paso por la bahía.

Ya en alta mar, como a treinta millas de Flamenco, llamé al cocinero, le dije que no quería ser más pavo, y entre el asombro y el temor me llevó él mismo al Contador, con quien me expliqué satisfactoriamente. Era yo el pasajero de primera clase más curioso de aquel buque. Mis únicas ropas consistían en las que pude acomodar en una pequeña maleta de cuero; mi sombrero era uno de paja del país, de anchas alas, hecho en Penonomé; mis recursos ciento treinta y cinco dólares en monedas de a cinco dólares, obtenidas por compra en Chitré y unos diez pesos en plata colombiana que me quedaban después de haberle dado veinticinco pesos a Cedeño y treinta al cocinero. Pagado el pasaje, sesenta y cinco dólares, me quedaban para llegar a Guayaquil setenta dólares.

Apenas llegué a mi destino le comuniqué mi arribo al General Alfaro, en Quito, y al doctor Fernando Sánchez, en Managua, y les expliqué por telégrafo y por cable la situación de la revolución en el Istmo y la necesidad absoluta de más armas y pertrechos.

El General Alfaro no perdió un momento. Dispuso darme mil rifles Manlicher, doscientos mil tiros y dos cañones Krupp con sus dotaciones, y desde el 31 de Mayo hubieran podido salir aquellos elementos si no hubiéramos tropezado con el tremendo obstáculo de la falta de vehículo.

Yo había conocido personalmente al General Alfaro en León de Nicaragua, el año de 1894. El General vivía en la casa del doctor Fernando Sánchez, y desde allí dirigía los preparativos de la revolución ecuatoriana que un año después le llevó triunfante hasta Quito. Era aquel grande hombre un tipo acabado de benevolencia y de generosidad, incapaz de comprender la doblez humana y hasta inocente en su trato con todo el mundo. Su amor por las ideas liberales era pasión indomable y a un mismo tiempo fe ciega, inquebrantable optimismo. Pocas veces he hallado en mi vida un hombre más convencido que el General Alfaro en materia de partido y más seguro, con seguridad que parecía visión profética, del triunfo de su partido en el Ecuador, en Colombia, en el mundo entero. Pues el General Alfaro no era simplemente un liberal ecuatoriano; era un liberal universal, que lo mismo clamaba contra la tiranía de su país como contra la del Czar de todas las Rusias. Sus doctrinas no tenían fronteras y eso explica por qué, sin vacilaciones ni dudas de ningún género, abría sus brazos y su corazón a todos los peregrinos del derecho y les daba cuanto tenía, a más de infundirles su fe y su entusiasmo. Era un anciano joven con

una inteligencia clara y una exuberante imaginación, arrastrado por la cual, muy frecuentemente presentaba ante sus oyentes el cuadro de lo que sería, de lo que habría de ser según sus sueños, la Nación formidable reconstruida que en un futuro no distante se debía extender desde las riberas del Orinoco hasta los confines del Ecuador: la Gran Colombia.

Como ya he dicho, el General Alfaro me acogió con extrema cordialidad. Inmediatamente por medio del telégrafo me puso en contacto con Flavio Alfaro, su sobrino, y con los señores Lapierre, Director de El Telégrafo, Coral, Director de El Tiempo, y Emilio Estrada, Gerente de un Banco y después Presidente de la República, para que arregláramos el modo de prestarme una ayuda eficaz y rápida. Sabedor de que yo había llegado sin recursos, hizo que el señor Estrada me entregara mil sucos, con los cuales compré ropa presentable, dos docenas de sables para los oficiales de nuestro ejército, pagué mis gastos de dos meses justos que permanecí en Guayaquil y el costoso pasaje desde aquel puerto hasta Corinto.

La obtención de las armas no encontró obstáculo. Todo estaba listo para serme entregado tan pronto como consiguiéramos vehículo. En Guayaquil la imposibilidad era absoluta. El tráfico exterior y aun parte del interno estaba en manos de compañías extranjeras muy cuidadosas de sus obligaciones internacionales y los buques menores nacionales eran inadecuados para empresas guerreras. Tanto el General Alfaro como yo le hicimos al General Zelaya y al doctor Sánchez diversas indicaciones para enviar el Momotombo hasta Guayaquil o Santa Elena o para enviar el Osorno, otro buque fondeado en Corinto, pero ellos contestaban ser imposible la combinación. Entonces me puse en comunicación con los jefes liberales que se habían apoderado de Tumaco para pedirles que me facilitaran el vaporcito Gaitán, del cual eran ellos dueños, pero el General Alfaro se oponía a mi partida en tal buque y me observaba con razón que el objeto de mi viaje era obtener armas y que en el Gaitán, pequeño buque mercante construido para navegar en ríos y en mares tranquilos, no cabían ni cincuenta de las cuatrocientas cajas de rifles y pertrechos que yo debía llevarme.

El problema parecía insoluble desde Guayaquil. Después de inútiles gestiones hasta para conseguir un buque de vela que me desembarcara en las islas de las Perlas con todo el cargamento, se le ocurrió al General Alfaro una solución aceptable. La Momotombo no podía ir hasta Guayaquil, pero sí podía venir hasta el Istmo en cuatro o cinco días; las armas y pertrechos que nosotros necesitábamos no eran Manlicher sino Remington, pues ya teníamos armamento de esa clase; y en consecuencia, lo cuerdo era hacer un

canje de armamentos, remitir a Nicaragua los rifles Manlicher para que el General Zelaya rellenara sus parques y recibir yo allá una cantidad igual de rifles Remington que transportaría a Panamá en la Momotombo. El plan fue al fin convenido pero antes de relatar cómo fue realizado, debo hacer una digresión interesante.

Cuando llegué a Guayaquil el 24 de Mayo me encontré repentinamente en el Hotel Victoria con un antiguo amigo. Era éste el doctor Manuel Padrón, recién llegado allí con el carácter de Cónsul General de Colombia, conservador de tuerca y tornillo, que seguramente había aceptado aquel puesto para hacerle a la revolución colombiana todo el daño que pudiera. Yo estaba en Guayaquil precisamente para hacerle a su Gobierno el mayor daño posible, y lo primero que nos pasaba era tropezarnos en el hotel y ser vecinos de cuarto. Mi situación era incómoda pero al mismo tiempo me repugnaba cambiar de hotel o siquiera de cuarto, pues ello equivalía a manifestar una ofensiva desconfianza de aquel amigo.

Fuimos compañeros casi inseparables, nos observábamos recíprocamente, atendíamos discretamente a nuestros asuntos; él presumía lo que yo estaba haciendo; yo sabía que él trabajaba por obtener el fracaso de mis planes, y sin embargo, nunca hubo entre los dos la más leve desavenencia. Su caballerosidad y su delicadeza eran tan extremas que si ocasionalmente llegaba a mi cuarto en momentos en que yo atendía a mi correspondencia o a la preparación de cables en clave, ni siquiera pasaba adelante. Sólo en una ocasión me habló de guerra. Fue unos diez o quince días antes de mi salida para Corinto, en el mes de Junio. "Eusebio, me dijo, yo no quiero mezclarme en que tú cumplas lo que consideras tu deber; pero al mismo tiempo tengo el deber de amistad de decirte que las noticias positivas que acabo de recibir, me demuestran la pérdida completa de la revolución en Palo Negro. Después de ese desastre no es posible que la revolución recobre las fuerzas necesarias para vencer y todo lo que ustedes hagan me parece inútil y antipatriótico". Mi respuesta fue poner en duda sus noticias, pues los liberales estábamos ya acostumbrados a las mentiras del Gobierno y no le creíamos a éste nada que dijera.

No son para contadas las maravillas de equilibrio y de prestidigitación de que tuve que hacer uso para combinar mis movimientos y mis operaciones sin que el doctor Padrón se apercibiera y al mismo tiempo sin emplear burdos subterfugios. Me sirvieron en ésto con suma inteligencia los dos hermanos Vallarino, Ramón y Antonio, quienes se entendieron en todos los preparativos de mi viaje.

Las armas que el General Alfaro me concedía debían ser embarcadas directamente a Corinto en un vapor alemán de carga de la línea Cosmos y yo debía salir en un vapor anterior, de carga también y de la misma línea, para llegar a aquel puerto antes que el armamento.

Mi pasaje fue tomado, con un nombre supuesto, por Antonio Vallarino, y en un momento en que el doctor Padrón salió de su cuarto a alguna diligencia, saqué mi escaso equipaje y volé a embarcarme. Años después me encontré con aquel excelente amigo en esta ciudad y él me confesó que cuando vio mi cuarto desocupado experimentó a un tiempo asombro y pesadumbre, pues comprendió que yo había partido, tal vez para siempre. Le dejé escritas unas cortas líneas de despedida, cosa natural, teniendo en cuenta nuestra antigua amistad.

El viaje directo de Guayaquil a Corinto se hace entre ocho y diez días, y así llegué a Managua el 2 o 3 de Julio.

El General Zelaya, el doctor Fernando Sánchez, todos los miembros del Gobierno me recibieron con verdadero entusiasmo. Habían tenido detalles del combate de la Negra Vieja y de la heroicidad de nuestras fuerzas, y tenían ya ciega confianza en el triunfo de la Revolución en el Istmo; el doctor Porras había crecido para ellos a proporciones legendarias y se notaba en todos cierto orgullo secreto al ver que aquellos éxitos repetidos se debían a la ayuda eficaz dada por Nicaragua en hombres y en armas.

En Managua encontré, desesperados ya por la demora y por las incertidumbres a muchos panameños que habían ido llegando para aprovechar la primera oportunidad de volver con armas al Istmo. El Jefe más visible de ellos era el Coronel Nicolás Tejada V., y era natural que yo pusiera en sus manos la organización del personal de oficiales que iban a acompañarnos. Así lo hice apenas llegué.

No hubo pérdida de tiempo en los preparativos del viaje de la Momotombo. Los rifles Remington, un cañón Krupp y los pertrechos prometidos por el General Zelaya, fueron embarcados en los tres días siguientes a mi llegada, y el día 6 de Julio los arreglos estaban terminados. El Coronel Zubiría venía con la expedición para atender al regreso del buque a Nicaragua, y como sucediera que en Managua trabara yo relaciones con el General Salvador Toledo, distinguido militar guatemalteco del arma de artillería, le entusiasmé hasta el punto de decidirle a acompañarnos.

El viaje de Corinto al Istmo no tuvo incidentes de ningún género. Sólo es digno de anotarse el hecho de que el Capitán del

buque, el mismo **Barba Azul** de la primera expedición, al ver en la tarde del 12 de Julio la costa de Punta Mala, hacia el Golfo de Parita se le metió en la cabeza que allí estaban San Carlos y la Costa de Chame, y en convencerle de su error perdimos la tarde. No pudimos por eso llegar a nuestro destino sino en la mañana siguiente.

Aquí termina mi relato que completa la narración del doctor Porras.

EPILOGO

Después del desastre del puente de Calidonia, el doctor Porras se fue para Centro América, nuestras gentes se dispersaron por la línea del Ferrocarril o se ausentaron del país, y Mendoza y yo tuvimos que quedarnos en Panamá por la imposibilidad de irnos a otra parte.

Sobre Mendoza y yo venía a reconcentrarse, en consecuencia, el odio de los adversarios intolerantes, la rabia de los que habían perdido ganados u otros bienes, y la sospecha de los que seguían temiéndole al espíritu revolucionario despierto y activo en todo el país.

Así sucedió que por motivos baladíes ambos fuimos reducidos a prisión, yo el primero, en Agosto de 1900. El General Albán no hizo caso de nuestros reclamos escritos sobre el cumplimiento de las cláusulas protectoras del Convenio celebrado el 26 de Julio, y trató con el mayor desdén nuestras gestiones y las de algunas personas imparciales interesadas en nuestra libertad.

Estábamos pues, resignados a que aquello continuara indefinidamente, cuando un día, fuimos llevados juntos a la presencia del General. Nos hizo pasar con gran solemnidad al Salón Amarillo y luego apareció él vestido como acostumbraba, medio militar y medio paisano, con un kepi ornado de laurel de oro, y calzado con chinelas de seda bordadas.

Nos saludó cordialmente y después nos dijo: "Les he hecho venir para manifestarles que habiendo tenido conocimiento de que en poder del señor Rodolfo Chiari estaban los libros y papeles de la revolución en que ustedes tomaron parte, lo he obligado a entregármelos y los he leído con detenimiento. Al leer esos libros me he quedado asombrado del modo como el doctor Porras y ustedes condujeron su campaña y manejaron y usaron los fondos

de que disponían. Ustedes han hecho una revolución con **guante blanco** y con una honradez que me complace en proclamar con orgullo porque todos somos hermanos en el país, todos somos colombianos. Yo me consideraría como un hombre injusto y muy poco noble si después de haber adquirido esta convicción les dejara a Uds. presos un solo día más. Y al Dr. Porras, díganle que por los documentos que he leído, he podido apreciar su carácter; que se venga a su país, pues aquí encontrará de mi parte respeto, estimación y absolutas garantías, a más de posibilidades inesperadas, porque yo tampoco soy sostenedor de los gobiernos corrompidos que hemos tenido y soportado. Yo también he sido opositorista y podría hasta ser revolucionario a mi modo contra el desorden y el desgreño que hemos estado viendo en Colombia. Me alegro de haber encontrado hombres como el doctor Porras y ustedes. Quedan en libertad sin fianza y sin condiciones de ningún género.

Aquellas palabras dichas en tono sentencioso que el General Albán usaba y sin interrupción de nuestra parte, nos causaron una extraordinaria sorpresa. Mendoza y yo ignorábamos que los libros de la Revolución habían sido exigidos al señor Chiari, y cuando íbamos para el Palacio creíamos que el objeto de nuestra llamada era notificarnos la expulsión del país o hacernos alguna exigencia inaceptable. Al oír aquella manifestación tan espontánea como honrosa para el doctor Porras, para nosotros y para los que habían tenido algún papel directivo en la campaña, nuestra satisfacción fue profunda, pues de los propios labios de nuestro más hábil y severo adversario oíamos la aprobación de nuestra conducta en términos explícitos y encomiásticos.

Nuestra conversación fue larga y por lo que nos dijo sobre su pasado, sobre sus luchas y sobre sus proyectos pudimos convencernos de que aquel hombre estaba resuelto a aprovechar el prestigio nacional que había conquistado para alcanzar una posición más alta y una influencia más directa en los destinos de Colombia.

Llamaban loco al General Albán por sus excentricidades, sus pasajeras violencias y sus transiciones súbitas e inexplicables de la nobleza y generosidad más extraordinarias a las pequeñeces y ruindades más extravagantes; pero en el fondo era un hombre de corazón, rígido en su moralidad, enemigo de la injusticia, íntegro como administrador y como ciudadano. El tributo de respeto que en la ocasión mencionada en las líneas anteriores le rindió al doctor Porras y a sus compañeros fue un arranque generoso, una explosión de su espíritu de justicia, necesaria entonces, cuando una jauría desenfadada desgarraba el nombre de todos los revolucionarios atribuyéndoles crímenes y desafueros horribles.

Es justo y es necesario que un rasgo semejante del adversario más noble e inteligente que tuvimos los liberales en las campañas del Istmo, quede consignado en este libro.

Panamá, Mayo 20 de 1922.

EUSEBIO A. MORALES

Prisión y Proceso de Victoriano Lorenzo

A mi regreso al Departamento de Bolívar, donde permanecí un mes, he encontrado varias publicaciones hechas por el señor Dr. Lucas Caballero y por algunos otros en la capital de la República referentes al juzgamiento y ejecución del General Victoriano Lorenzo. En esas publicaciones se invoca mi testimonio: debo rendirlo bajo la solemne promesa de ceñirme al relato fiel de los hechos que conozco por haber intervenido en ellos o por haberlos presenciado.

Hasta ahora había guardado silencio por la razón principal de no tener en mi poder los documentos que en parte ha publicado el Dr. Caballero, pero también influyó en mi ánimo la interpretación que probablemente le daría el público a todo escrito mío en otras circunstancias que no las presentes. Figurárase la generalidad que yo comparecía a defenderme, a defender al Gral. Benjamín Herrera y al Dr. Lucas Caballero del cargo que se nos hizo de ser los responsables del fusilamiento del Gral. Victoriano Lorenzo, y yo por ninguna consideración quería aparecer dando respuesta, directa ni indirecta, a cargo tan desprovisto de fundamento como lleno de malevolencia y de perfidia. Yo sabía que la verdad se haría pública por boca de jefes del Gobierno como los Generales V.M. Salazar, Luis Ma. Terán, Alfonso Jaramillo, el Coronel Gutiérrez y algunos otros que fueron testigos de lo ocurrido en San Carlos y con hombres de bien, incapaces de mentir. He evitado de ese modo estériles polémicas con personas que para mí no existen.

Hoy comparezco como testigo en el juicio público que la Nación ha abierto sobre hechos que empañan su honor de pueblo civilizado y cristiano. Mi papel es otro y tengo el deber de hablar.

El día 29 de noviembre en momentos en que el Gral. Herrera se preparaba para seguir a la provincia de Chiriquí a dar cumplimiento al tratado del "Wisconsin", llegó a Pocrí un oficial procedente de San Carlos con la noticia de que el día anterior había habido rebelión de las fuerzas de la 7a. División contra el jefe de las tres divisiones allí amontonadas que lo era el General don Julio Plaza. El Oficial no daba detalles, pues había salido poco después

de iniciado el desorden. Todo hacía conjeturar que los Generales Plaza y Buendía se hallaban en situación muy crítica y el Gral. Herrera comprendió que antes de ir a Chiriquí era necesario informarse de lo que realmente había ocurrido en San Carlos. Como la tripulación del "Bogotá" nave en que íbamos a hacer el viaje, se componía íntegramente de americanos de la peor especie, indisciplinados y viciosos, el buque estuvo parado en el estero de Aguadulce por más de un día. No fue sino el 10 de diciembre cuando llegamos al puerto de San Carlos. Todo estaba ya tranquilo. El General Plaza había conseguido restablecer el orden y tenía preso al Coronel Cañareta, promotor del escándalo; había puesto el armamento y los pertrechos bajo la guarda de un batallón caucano y tomado toda clase de precauciones para evitar la repetición de lo sucedido.

La investigación hecha por el Gral. Herrera fue breve. No resultó de ella ninguna responsabilidad directa contra el Gral. Victoriano Lorenzo, Jefe de la División que se decía sublevada. Resultó contra él únicamente el cargo de no haber hecho uso de su autoridad para impedir los actos ejecutados por subalternos suyos que se alzaban tomando su nombre y proclamándolo como Director de la Guerra.

El Gral. Herrera nos comisionó al Dr. Caballero y a mí para que conferenciáramos con el Gral. Lorenzo y le explicáramos el alcance del tratado; le hiciéramos conocer el deber en que estábamos todos los miembros del Ejército, de cumplir con lealtad; y le exigéramos el envío de órdenes terminantes a los miembros de su división que se habían ido con unas pocas armas para que las devolvieran. El Gral. Lorenzo nos dio explicaciones que corroboraban el resultado sin tardanza de la investigación hecha. Los actos de sublevación fueron efecto del abuso de bebidas alcohólicas con motivo de los festejos del 28 de noviembre (aniversario de la independencia del Istmo). El Gral. Lorenzo no encabezó la sublevación, pero por su estado de embriaguez tampoco se opuso a ella. Nos manifestó sincero pesar por lo ocurrido, nos expresó su voluntad de cooperar al cumplimiento de los tratados como miembro del Ejército, e inmediatamente convino en dictar y enviar las órdenes solicitadas. Así lo hizo escogiendo para llevarlas personalmente y hacerlas cumplir, al jefe del Estado Mayor de su División que no era el Coronel Cañarete, como erradamente afirma el Gral. Luis Ma. Terán en su imparcial exposición publicada en El Relator, sino el Gral. Faustino L. Mina.

En esa conferencia el Gral. Lorenzo nos expresó también su deseo de no quedarse en el Istmo, y mucho menos en la Provincia

de Coclé, en donde tenía enemigos encarnizados que no excusarían ocasión de perseguirlo y de asesinarlo.

El Dr. Caballero y yo le dimos cuenta de las manifestaciones de Lorenzo al Gral. Herrera, quien aprobó lo convenido sobre el envío de órdenes para restituir las armas y recuerdo que entonces nos dijo: "Uds. deben comprender que mi deseo es impedir que haya pretexto de ningún género para perseguir a Lorenzo, lo que quiero precisamente es salvarlo de esas persecuciones, pues de otro modo yo tendría una grave responsabilidad ante el partido liberal".

Poco después de eso, y cuando entre los jefes y oficiales llegó a saberse que el Gral. Plaza quedaba en San Carlos con cien hombres armados para guardar el orden; que el Gral. Lorenzo quedaba detenido hasta que se restituyeran al parque las armas tomadas, se acercó a mí el Gral. Plaza y me dijo que él quedaba allí en una situación delicada, que sabiéndose entre las tropas desarmadas la detención de Lorenzo, sin saberse que era sólo transitoriamente, podían presentarse de un momento a otro algunos de los partidarios de aquél en actitud hostil y ponerlo a él (Plaza) en la necesidad de defenderse; que esos peligros podían evitarse si nos llevábamos a Lorenzo en el Bogotá.

Hablé con el Gral. Herrera sobre el asunto; él comprendió que el Gral. Plaza tenía razón y enseguida se dirigió donde envió, horas después, la orden de embarcar a Lorenzo. Este se encontraba en la casa en que vivía, con un guardia que en realidad no era sino una apariencia de custodia. Bien hubiera podido irse sin obstáculo el Gral. Lorenzo, y si no lo hizo fue porque de buena fe nos había prometido cumplir el tratado, y así, en calidad de detenido, más por su palabra que por la fuerza, lo encontró el Capitán Antonio A. Valdés a las nueve de la noche cuando fue por orden del Dr. Caballero a comunicarle que se preparara para salir en el Bogotá. El Gral. Lorenzo fue conducido al puerto, armado de su espada, por el Capitán Valdés, desarmado y solo; en el embarcadero permanecieron varias horas hasta que llegó la lancha de gasolina que los condujo a todos a bordo; durante ese tiempo, en noche oscura y a caballo como lo estaba cuando fue al embarcadero de San Carlos, distante milla y media de la población, el Gral. Lorenzo pudo escaparse, y tampoco lo hizo.

Cuando llegamos al Bogotá supimos por el Gral. Herrera que había convenido con el Gral. Vásquez Cobo en tener al Gral. Lorenzo a bordo hasta que fueran entregadas las armas sustraídas en San Carlos y que dicho General Vásquez Cobo se había comprometido, empeñando su palabra de honor, a expedirle pasaporte a

aquel Jefe para seguir al Cauca o al exterior, según él mismo resolviera.

En la isla de Taboga, donde permanecimos el día 2 de diciembre, recibió el Gral. Vásquez Cobo la aprobación de aquel convenio por parte del Gral. Perdomo. Días después hablando el Gral. Vásquez Cobo y yo a bordo del Bogotá sobre este delicado incidente, me manifestó con la mayor ingenuidad que él había ido a tierra a hacer toda clase de esfuerzos por conseguir la aprobación, con el General Perdomo, y que si no la hubiera conseguido no habría regresado a bordo. No vi la carta en que consta esa aprobación, pero el General Herrera me relató su contenido pocos momentos después de haberla leído él.

A mediados de diciembre regresábamos de la Provincia de Chiriquí en el Bogotá el Gral. Vásquez Cobo y yo, por el contacto diario del viaje que fue largo y penoso estrechamos nuestras relaciones y departábamos con frecuencia de la manera más cordial y tuve ocasión por eso de oír de sus propios labios la resolución que tenía de llevarse al Cauca al General Lorenzo, para apartarlo del Istmo mientras las pasiones se calmaban. Con el mismo Gral. Lorenzo hablé sobre su proyectado viaje y me manifestó estar resuelto a irse a Cali como el General Vásquez Cobo deseaba.

Esa es la historia fiel de lo sucedido con el Gral. Victoriano Lorenzo. Jamás se le ocurrió entonces a ningún jefe del Gobierno decir ni sostener que él no se había acogido a los tratados o que se había rebelado contra ellos. Lo que pasó en San Carlos fue acto de sublevación, reprimido y castigado antes de que las autoridades y fuerzas del gobierno tuvieran mando en el lugar; fue un accidente doméstico en nuestro Ejército que nosotros bien podíamos haber ocultado, si no hubiera sido por el deseo de dar pruebas de una lealtad que no se ha comprendido por razones obvias.

Lo ocurrido después es notorio. Por circunstancias que nadie ha podido averiguar, el Gral. Lorenzo, libre a bordo del Bogotá bajo la palabra de honor de los Gerentes Nicolás Perdomo y Alfredo Vásquez Cobo, por algún torpe consejo o alguna trama siniestra, prefirió escaparse del buque y ocultarse en la ciudad. Aquello se consideró como una fuga, la policía lo aprehendió con suma facilidad hasta el punto de haberse sospechado que alguno de los Jefes del Grupo fue quien le dio al fugitivo los medios de escaparse para luego llenarse de gloria capturándolo; y enseguida le dieron curso a las sumarias recién iniciadas para explicar su prisión como resultado de una investigación por delitos comunes. A las gestiones que varias personas hicimos para que se le pusiera en libertad se nos

contestó siempre que de conformidad con el tratado del "Wisconsin", el General Victoriano Lorenzo estaba sujeto a juzgamiento por delitos comunes. Nada podíamos contestar a ese argumento fundado en el texto del tratado.

El juicio debía, pues, seguir el curso legal ante el Juez Superior. Nadie podía tomar en serio los rumores que de cuando en cuando circulaban sobre el juzgamiento militar del Gral. Lorenzo. Yo fui de los que negaron la posibilidad de ese atentado, aun la víspera de ejecutarlo porque me parecía monstruoso. No podía concebir que hubiera gentes tan insensatas que exhibieran al Gobierno del país como desleal y felón aquí mismo en donde se celebró la paz, aquí en donde el ojo del hombre civilizado nos estudia para saber si aún somos bárbaros que acabamos de dejar a un lado el carcaj con flechas de los aborígenes.

El mismo Gral. Lorenzo tampoco tenía temores de ser juzgado militarmente porque había recibido una comunicación del Señor Vicepresidente de la República en la cual le decía que su asunto era de la competencia de los jueces ordinarios. Ese documento dice así:

(Falta en el artículo el documento a que se refiere el Dr. Morales).

En la tarde del 13 de mayo varios amigos se acercaron a mí para decirme que tenían certidumbre de que los miembros del Consejo de Guerra estaban ya designados y que se anunciaba que el fusilamiento tendría lugar el 15. Fue por eso por lo que en la mañana del 14 dirigí al Gral. Alfredo Vásquez Cobo, Ministro de Guerra, uno de los signatarios del tratado de paz del "Wisconsin", y persona colocada respecto del General Lorenzo en las condiciones que he explicado, el cablegrama: "General Vásquez Cobo. Bogotá. Anunciándose juzgamiento militar Victoriano Lorenzo. Recuérdole cláusula tratado de paz contraria tal acto. Confío interpondrá Ud. su influencia para impedirlo. Eusebio A. Morales".

Horas después aparecieron fijados en las esquinas los carteles en que se anunciaba al público consternado la hora de principiar el juzgamiento. La sentencia de muerte había sido dictada de antemano y el 15 a las cinco de la tarde el Gral. Lorenzo fue ejecutado. El día 27 del mismo mes recibí la Respuesta del Gral. Vásquez Cobo. "Bogotá 22 Buenaventura 27 Eusebio A. Morales — Panamá ignoraba juzgamiento. Recuérdole Lorenzo protestó contra tratados en San Carlos, luego fugóse Bogotá. Vásquez Cobo".

Ese cablegrama contiene dos partes, una que parece ser la condenación del acto y así la interpreto yo para honra del Gral. Vásquez Cobo y otra que parece anticipar una excusa o una justificación del procedimiento. Corresponde al Gral. Alfredo Vásquez Cobo explicar cuál es la interpretación que el país debe darle a su respuesta, le cedo la palabra.

Panamá, agosto de 1903.

*Manifiesto de separación de Panamá
y Mensaje dirigido por la Junta de
Gobierno Provisional a la
Convención Constituyente de 1904*

Cartas que atestiguan la paternidad de estos documentos.

Panamá, noviembre 10 de 1910.

Señor Don

Federico Boyd.

P.

Mi estimado amigo:

Ruego a usted encarecidamente que se sirva decirme a continuación si es cierto o no que yo soy el autor del manifiesto de separación de Panamá y del Mensaje dirigido por la Junta de Gobierno Provisional a la Convención Constituyente que se reunió en Enero de 1904.

Me propongo publicar en un volumen los escritos míos que tengan alguna importancia y deseo como es natural, incluir entre ellos esos dos trabajos que no aparecen con mi firma.

Soy de Ud. amigo y s.s.

(fdo.) Eusebio A. Morales.

Panamá, 11 de noviembre de 1910.

Señor Dr. Eusebio A. Morales

P.

Estimado amigo:

Con todo agrado contesto su carta que está a la vuelta, manifestándole: que el día antes de nuestra separación de Colombia fui a su casa particular y con la debida reserva le participé que teníamos preparado el plan y todo listo para efectuar el movimiento político al día siguiente y le pedí nos redactara el Manifiesto, lo que hizo Ud., en los términos que yo le indiqué con la mejor voluntad y patriotismo.

El Mensaje que dirigió la Junta de Gobierno Provisional a la Constituyente que se reunió en enero de 1904 fue obra suya estando Ud. de Secretario de Gobierno.

Queda de Ud muy atento servidor y amigo,

(fdo.) Federico Boyd.

Panamá, noviembre 10 de 1910.

Señor Don

Tomás Arias

P.

Mi estimado amigo:

Ruego a Ud. encarecidamente que se sirva decirme a continuación si es o no cierto que yo soy el autor del manifiesto de separación de Panamá y del Mensaje dirigido por la Junta de Gobierno Provisional a la Convención Constituyente que se reunió en enero de 1904.

Me propongo publicar en un volumen los escritos míos que tengan alguna importancia y deseo, como es natural, incluir entre ellos esos dos trabajos que no aparecen con mi firma.

Soy de Ud amigo y s.s.

(fdo.) Eusebio A. Morales

Mi estimado amigo:

En contestación a la carta de Ud. que antecede, y de acuerdo con sus deseos manifestados en ella, le digo: que es cierto que Ud. redactó a petición de don Federico Boyd, el Manifiesto que la Junta de Gobierno Provisional dirigió al país, con motivo de su separación de Colombia; y que también redactó Ud. como Secretario de Gobierno de la misma Junta, el Mensaje que ésta dirigió en enero de 1904 a la Convención Constituyente el día de su instalación.

Quedo de Ud. Atto. s.s. y amigo,

(fdo.) Tomás Arias.

Panamá, noviembre 11 de 1910.

MANIFIESTO

El acto trascendental que por movimiento espontáneo acaban de ejecutar los pueblos del Istmo de Panamá es consecuencia inevitable de una situación que ha venido agravándose día por día.

Larga es la relación de los agravios que los habitantes del Istmo hemos sufrido de nuestros hermanos de Colombia; pero esos agravios hubieran sido soportados con resignación en aras de la concordia y de la unión nacional, si su reparación hubiera sido posible y

si hubiéramos podido abrigar fundadas esperanzas de mejoramiento y de progreso efectivos bajo el sistema a que se nos tenía sometido por aquella República. Debemos declarar solemnemente que tenemos el convencimiento sincero y profundo de que era vana toda esperanza e inútil todo sacrificio de nuestra parte.

El Istmo de Panamá fue gobernado por la República de Colombia con el criterio estrecho que en épocas ya remotas aplicaban a sus colonias las naciones europeas: el pueblo y el territorio istmeños eran una fuente de recursos fiscales, y nada más. Los contratos y negociaciones sobre el Ferrocarril y el Canal de Panamá y las rentas nacionales recaudadas en el Istmo han producido a Colombia cuantiosas sumas que no enumeramos para no aparecer en este escrito destinado a la posteridad como impulsados por un espíritu mercantil, que no ha sido ni es nuestro móvil; y de esas cuantiosas sumas el Istmo no ha recibido el beneficio de un puente para ninguno de sus numerosos ríos; ni el de la construcción de un camino entre sus poblaciones, ni el de un edificio público, ni el de un Colegio; ni ha visto tampoco interés alguno en fomentar sus industrias, ni se ha empleado la más ínfima parte de aquellos caudales en propender a su prosperidad.

Ejemplo muy reciente de lo que a grandes rasgos dejamos relatado es lo acontecido con las negociaciones del Canal de Panamá, consideradas por el Congreso y desechadas de un modo sumario. No faltaron hombres públicos que declararan su opinión adversa fundados en que sólo el Istmo de Panamá sería favorecido con la apertura de la vía en virtud de un tratado con los Estados Unidos, y que el resto de Colombia no recibiría beneficios directos de ningún género con aquella obra, como si esa razón, aun teniéndola por evidente, justificara el daño irreparable y perpetuo que se le causara al Istmo con la improbación del tratado en la forma en que lo fue, que equivalía a cerrar la puerta a futuras negociaciones.

El pueblo del Istmo, en vista de causas tan notorias ha decidido recobrar su soberanía, entrar a formar parte de la Sociedad de las naciones independientes y libres, para labrar su propia suerte, asegurar su porvenir de modo estable y desempeñar el papel a que está llamado por la situación de su territorio y por sus inmensas riquezas. A eso aspiramos los iniciadores del movimiento efectuado que tan unánime aprobación ha obtenido. Aspiramos a la fundación de una República verdadera en donde impere la tolerancia, en donde las leyes sean norma invariable de gobernantes y gobernados; en donde se establezca la paz efectiva que consiste en el juego libre y armónico de todos los intereses y de todas las actividades; y en

donde, en suma, encuentren perpetuo asiento la civilización y el progreso.

Al principiar la vida de nación independiente, bien comprendemos las responsabilidades que ese estado implica, pero tenemos fe profunda en la cordura y en el patriotismo del pueblo istmeño que posee además las energías suficientes para labrarse por medio del trabajo un porvenir venturoso y sin azares ni peligros.

Al separarnos de nuestros hermanos de Colombia, lo hacemos sin rencor y sin alegría. Como un hijo que se separa del hogar paterno, el pueblo istmeño al adoptar la vía que ha escogido lo ha hecho con dolor, pero en cumplimiento de supremos e imperiosos deberes: el de su propia conservación y el de trabajar por su propio bienestar.

Entramos, pues, a formar entre las naciones libres del mundo, considerando a Colombia como nación hermana, con la cual estaremos siempre que las circunstancias lo demanden y por cuya prosperidad hacemos los más fervientes y sinceros votos.

J.A. Arango. —Federico Boyd. —Tomás Arias

MENSAJE

De la Junta de Gobierno Provisional a la Convención Nacional
Constituyente — 1904

Honorables Diputados:

Os halláis aquí reunidos en representación de los pueblos del Istmo, merced a un acontecimiento de la mayor resonancia histórica: la transformación del antiguo Departamento de Panamá en una República independiente, libre y soberana.

Esa transformación se ha efectuado sin sacrificio de vidas ni de parte alguna de la riqueza pública, por haber sido unánime el movimiento que le dio impulso, armónico y firme el esfuerzo para sostenerla y universal la aprobación del país.

Causas de diversa naturaleza, que vosotros como istmeños conocéis bien, justifican plenamente ante nosotros mismos y ante los demás pueblos de la tierra nuestra separación de la República de Colombia. Vosotros sabéis que al independizarse de España el Istmo se incorporó voluntariamente a Colombia, confiando sin duda en que mejoraría su condición y estaría en capacidad de labrar su prosperidad al amparo de aquella nación que se alzaba como una de las más poderosas del continente. La experiencia, larga y dolorosa, ha demostrado que aquellas esperanzas fueron infundadas.

El régimen de gobierno central implantado en una nación como aquella, cuyo territorio se extendía desde el Mar Caribe hasta el río Amazonas, sin vías de comunicación que pusieran en contacto sus diversas y remotas partes, tan desemejantes entre sí por la naturaleza del suelo como por la índole de sus habitantes, debía producir y produjo, en efecto, la reacción inevitable que en forma de guerra civil desastrosa azotó el país en los años de 1840 y 1841, iniciada por las provincias deseosas de una organización descentralizada favorable a su desarrollo.

En ese movimiento armado tomaron parte las provincias de Panamá y Veraguas, las cuales se separaron de la entonces República de Nueva Granada y convocaron una Convención Constituyente que declaró constituido el Estado Libre e independiente del Istmo el 18 de marzo de 1841. Una de las disposiciones de aquel acto constitucional fue que el Istmo jamás entraría otra vez a formar parte de la Nueva Granada bajo un régimen central.

No triunfaron entonces las ideas que dieron origen a la guerra civil, y el centralismo continuó en vigor hasta el año de 1855 en que el Congreso de la Nación Granadina expidió una ley por la cual se creó el Estado de Panamá con facultades autónomas. A aquella ley siguieron otras análogas que transformaron toda la nación, de tal modo que cuando en 1858 se expidió una nueva Constitución política que le dio al país el nombre de Confederación Granadina, el sistema federal existía ya real y efectivamente.

Sobrevino luego una nueva guerra civil cuyas consecuencias se sienten todavía por los gérmenes funestos que dejó diseminados en el país. Los federalistas triunfantes por las armas extremaron sus ideas y quisieron ponerlas a cubierto de toda reforma futura; debilitaron de ese modo el poder real de la entidad nacional, y de un sistema teóricamente ideado para fundar el orden y el concierto armónico de los poderes públicos y de los intereses sociales, surgieron las agitaciones continuas, las luchas armadas y el desastre.

El entonces Estado Soberano de Panamá no se salvó de los males de aquel régimen. Vinculado a una nación cuya inestabilidad era crónica, se vio envuelto también en continuos desórdenes provocados con fines políticos por agentes del gobierno general, hasta que en 1886 se estableció de nuevo el régimen central que hoy rige en Colombia y bajo el cual vivió el Istmo de Panamá hasta el 3 de Noviembre de 1903.

Bajo ninguno de esos regímenes progresó el Istmo en proporción a sus capacidades industriales y sus facilidades comerciales notorias; el centralismo le fue funesto por las circunstancias que antes hemos

enunciado; la federación también lo fue por una concurrencia de causas complejas que la historia estudiará con mayor serenidad.

Si, pues, ninguno de esos sistemas produjo los bienes esperados; si todos se ensayaron y ninguno de ellos fue parte a promover el adelanto intelectual, moral y material de los pueblos que componen esta entidad etnográfica y política, el mal debía consistir en algo que se imponía sobre todos esos sistemas y prevalecía sobre ellos para desnaturalizarlos; en algo que realmente hacía sentir una influencia letal y entorpecedora. Hoy en presencia de los sucesos recientes y de los bienes relativamente grandes que en tan corto tiempo hemos alcanzados, siquiera sea que se consideren como únicos, la concordia entre los partidos y la desaparición de los odios que hasta ayer no más fueron origen de persecuciones y de crueldades, el mal se ha revelado a los ojos de todo observador sagaz, y consiste en la dependencia directa o indirecta de un poder extraño que jamás se puso en contacto con las necesidades del país o que las desatendió de modo voluntario, persistente y criminal.

Algunas de estas ideas las hallaréis vosotros expuestas en el manifiesto que contiene las causas del movimiento tan felizmente iniciado en esta ciudad el 3 de Noviembre del año último, y como tal documento tiene carácter oficial, creemos innecesario insistir en la relación pormenorizada de las razones que produjeron aquella explosión del patriotismo.

El hecho actual, elocuente y de consecuencias irrevocables, es que la República de Panamá existe, que para constituirla definitivamente en forma que garantice los bienes del orden y de la libertad habeis sido elegidos por el pueblo istmeño en elecciones realizadas con la mayor pureza y con absoluta libertad. Sois, pues, los representantes genuinos de la voluntad popular, y poseéis los poderes del soberano sin más limitaciones que las que la opinión pública os ha impuesto al elegiros.

La Junta de Gobierno Provisional, compuesta por nosotros en virtud de designación de las Municipalidades de la República, cesa desde hoy en el ejercicio de las facultades legislativas de que tuvo que hacer uso para organizar los varios ramos del servicio público y para resolver cuestiones de vital importancia para la Nación. Resignamos, pues, en vosotros esas facultades que de derecho os pertenecen y conservamos la dirección ejecutiva de la administración para que no haya trastornos en el servicio por el tiempo absolutamente indispensable hasta que en vuestra sabiduría dispongáis el modo de reemplazarnos en ramo tan importante del Gobierno.

Al depositar en vosotros los poderes de que hemos estado investidos desde el día 4 de Noviembre del año último, es nuestro deber daros cuenta de los actos legislativos que hemos dictado en virtud de las circunstancias excepcionales en que nos hemos visto, al frente de un país nuevo en el que se suponían no existentes por razón de los hechos consumados las leyes que rigieron hasta el día anterior a la proclamación de la independencia, y en donde había que proceder con cordura y actividad a asegurar la existencia de la nación misma contra toda agresión externa.

Para atender a los diversos y variados ramos de la administración pública, creíamos necesaria la creación de seis Ministerios, así: Gobierno, Relaciones Exteriores, Justicia, Hacienda, Guerra y Marina e Instrucción Pública, para desempeñar los cuales nombramos, respectivamente, a los señores doctores Eusebio A. Morales, F.V. de la Espriella, Carlos A. Mendoza, don Manuel E. Amador, don Nicanor A. de Obarrio y don Nicolás Victoria J., siendo este último reemplazado, por excusa, con el señor don Julio J. Fábrega.

Uno de los primeros actos del Gobierno así formado fue poner en vigor todas las leyes que habían regido hasta el día anterior al movimiento, con las alteraciones y cambios que imponía el nuevo régimen y con las modificaciones que la Junta de Gobierno acordara posteriormente. Esa era una medida de necesidad incuestionable. No es posible que un país que ha estado gobernado por un cuerpo de leyes conocido, se encuentre repentinamente sin ley ninguna que regule las relaciones de los asociados y fije las facultades y los deberes de las autoridades encargadas de darles protección y seguridad. Lo más acertado era en esas circunstancias seguir gobernándonos por las leyes anteriores y así lo resolvimos, dando por resultado el funcionamiento inmediato y armónico de toda la administración pública sin el más leve tropiezo.

Una medida que desde hace muchos años reclamaba la opinión pública era la creación de la Provincia de Bocas del Toro, y en consideración a los valiosos intereses vinculados a aquel territorio, a la dificultad en las comunicaciones y aun a razones de seguridad, dictamos el decreto por el cual se creó la Provincia, compuesta de los Distritos de Bocas del Toro, Chiriquí Grande y Bastimentos. Gran regocijo ha causado ese acto de justicia en todas las poblaciones favorecidas y estamos seguros de que la nueva Provincia continuará desarrollándose industrialmente con mayor rapidez y con más estabilidad que antes.

Las leyes puestas en vigor comprendían el importante ramo de la justicia; pero como por la naturaleza de la transformación efec-

tuada, los Tribunales y Juzgados no podían seguir funcionando como si derivaran su autoridad de un poder que había desaparecido, se expidió un decreto orgánico del ramo en armonía con la nueva situación creada.

Lo mismo ocurrió en la Hacienda pública. En el extinguido Departamento existían dos clases de impuestos, de contribuciones y de proventos fiscales: unos nacionales que pertenecían a la nación colombiana y otros departamentales que correspondían al Departamento. Fue necesario introducir alteraciones en la legislación existente para uniformar el sistema fiscal y suprimir las Administraciones que habían llegado a ser inútiles.

Las recetas actuales han sido insuficientes por dos causas para atender a todos los servicios públicos. Una de ellas ha consistido en la notable disminución del producto de la contribución comercial, disminución ocasionada por la expectativa de los cambios que el Tratado del Canal habrá de imponer en nuestro sistema rentístico y que habrán de afectar principalmente al comercio de importación. Como la fecha en que el tratado debe entrar en vigor es incierta, el comercio ha temido hacer las importaciones ordinarias y la contribución ha bajado consecuentemente.

Si a eso se agregan las necesidades crecientes por razón del aumento del Ejército, con un numeroso personal, el servicio de la marina, el personal de los nuevos Ministerios y los variados, repentinos e inevitables gastos que demanda una transformación tan trascendental como la efectuada, no es sorprendente que el Gobierno Provisional se haya visto en la necesidad imperiosa de ocurrir al crédito de la Nación para atender a esos gastos urgentes. Los empréstitos contratados con ese objeto han sido dos de a cien mil dólares cada uno, obtenidos ambos en Nueva York en condiciones ventajosas para el fisco nacional. Los detalles de esas operaciones os serán suministrados por el Ministerio del ramo.

Las relaciones exteriores han sido atendidas del modo que exigían las circunstancias, por medio de Agentes Confidenciales encargados de solicitar el reconocimiento de la República. Para desempeñar tales funciones en los Estados Unidos de América y asumir las de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, una vez obtenido el reconocimiento, fue designado el señor Phillipe Bunau-Varilla, quien hizo la solicitud correspondiente ante el ilustrado Gobierno de aquel país. Obtuvo oportunamente la decisión apetecida y fue recibido en audiencia pública en su carácter de diplomático el día 13 de Noviembre. Al reconocimiento de los Estados Unidos siguió el de Francia, y luego siguieron por el orden de su enumeración los de Austria-Hungría, China, Alemania, Rusia, Dina-

marca, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Japón, Suecia y Noruega, Suiza, Perú, Cuba, Costa Rica y Nicaragua.

Nos es muy satisfactorio daros cuenta de esos hechos, sobremañera plausibles, que demuestran la complacencia universal por el advenimiento de la nueva República, y prueban inequívocamente que el mundo civilizado ha sabido apreciar los justos móviles que impulsaron a los pueblos del Istmo a romper el vínculo político que los ligaba a la República de Colombia.

Demuestra también ese reconocimiento por las naciones más poderosas e ilustradas del mundo, que ellas tienen confianza en la capacidad de nuestra República para desempeñar el papel importante a que está destinada por su posición, por sus recursos y por la obra de interés universal que se construye en su territorio, y en leal correspondencia a tan señaladas y excepcionales muestras de simpatía, el Gobierno provisional creyó de su deber manifestar desde los primeros días de su existencia que la nueva nación se consideraba obligada, en beneficio de la civilización y de los intereses comerciales del mundo, a facilitar la pronta realización de la obra del Canal de Panamá.

El Ministro Plenipotenciario de la República en los Estados Unidos de América ajustó en consecuencia, con el Gobierno ante el cual estaba acreditado, una Convención para la construcción de aquella obra, que lleva fecha 18 de Noviembre de 1903 y que el Gobierno Provisional ratificó por decreto de fecha 2 de Diciembre del mismo año.

Para ratificar ese Tratado el Gobierno tuvo en cuenta razones poderosas especiales que os serán comunicadas por el Ministerio del Ramo, en caso de que juzgueis indispensable conocerlas.

Es condición especial del convenio la obligación perpetua que los Estados Unidos han aceptado de garantizar la independencia de nuestro país. Ese acuerdo, en punto de tan vital importancia puesto que se relaciona con la existencia misma de la Nación, que a falta de tal garantía se vería expuesta a agresiones externas cuyo temor nos mantendría obligados a permanecer en constante estado de defensa, es evidente prueba de la buena fe y del espíritu de justicia que anima a aquel pueblo amigo que nos ha tendido mano generosa. El convenio, apreciado con criterio estrecho, puede parecer desfavorable para nosotros en ciertos respectos, pero estimándolo como se estiman las obras calculadas para cambiar la faz de las naciones, considerándolo siquiera como la semilla de bienes incalculables que habrán de favorecer a la posteridad más remota, el tratado realiza muy nobles y elevadas aspiraciones.

Fundado en consideraciones de esa naturaleza y en otras que, como ya os hemos expuesto, os serán comunicadas, si lo creéis necesario, el Gobierno Provisional ratificó el tratado, sin vacilación, por un acto legislativo que lleva la firma de todos los Ministros del Despacho y que después ha merecido la aprobación entusiasta de casi todas las Municipalidades de la República. Resta ahora que el Senado de los Estados Unidos le imparta su aprobación.

En relación con ese convenio es ésta la oportunidad de comunicaros que el Gobierno Provisional ha dado instrucciones al Ministro de la República en los Estados Unidos para tratar de darle forma distinta de la pactada al pago de la suma de diez millones de dólares, precio de las concesiones otorgadas, indicándosele que esta República preferiría reducir a dos millones de dólares la suma pagadera en la fecha de la ratificación, y convertir el resto en una renta perpetua sobre el Tesoro federal de los Estados Unidos. Para recomendar ese plan nos hemos inspirado en ideas de equidad que vosotros comprendéis sin esfuerzo, y en los más elementales consejos de la prudencia. A un país como el nuestro no le conviene la introducción inmediata de un capital enorme en relación con sus necesidades y con sus servicios, porque ello daría lugar a despilfarros inevitables: nacería el deseo inmoderado de construir obras públicas sin la meditación y el estudio que recomienden su utilidad, y sobrevendría una fiebre de especulaciones que produciría consecuencias perniciosas en todas las capas sociales. A más de esa razón de prudencia, hay una de equidad aún más poderosa. Los Estados, según la ficción del derecho, son eternos. Una generación sola no es dueña de los bienes del país. Las tierras que hoy recorremos con la vista desde las fronteras de Costa Rica hasta las soledades del Darién no son nuestro patrimonio exclusivo; son la herencia de generaciones futuras que vienen atropellándose a buscar su puesto en el concierto de los pueblos y de las razas, y esas generaciones tienen derecho a los mismos bienes que nosotros, tienen derecho a que no las desposeamos de su parte de sol, de calor y de luz. Si por errores presentes se invirtiera en obras improductivas el capital de que la República podría disponer, habríamos ejecutado un acto por extremo injusto y censurable.

Sea cual fuere el éxito de las gestiones hechas con el noble objeto expresado, nos permitimos indicaros que en la Constitución que dicteís dispongáis lo conveniente a efecto de que la suma que la República reciba con motivo de las negociaciones del canal, no pueda ser destinada sino a ciertos fines de utilidad pública, en ciertas proporciones y con limitaciones y restricciones expresas.

El Departamento de Guerra y Marina ha tenido a su cargo inmediato la labor consiguiente al aumento del pie de fuerza en previsión de conflictos internacionales, y el atender al servicio de la marina para poder disponer en cualquier momento de transportes rápidos y adecuados.

Los grados concedidos por el Gobierno serán sometidos a vuestra aprobación.

En el ramo de Instrucción Pública, abandonado durante tres años de guerra, nada encontramos que no necesite reformas substanciales. Os toca a vosotros la labor de organizarlo sobre bases científicas, de conformidad con sistemas y procedimientos modernos.

Después de la ojeada general que antecede, referente a las ponderosas labores que hemos tenido a nuestro cargo, permitidnos que, llevados del sentimiento patriótico más desinteresado, os hagamos algunas reflexiones sobre la importancia inmensa que tienen para nosotros mismos y para el mundo que nos contempla, los trabajos que vais a emprender.

La Constitución política de un país, como en otra ocasión hemos tenido la oportunidad de observar, no es, no puede ser, la obra exclusiva de un partido político. Una Constitución, como el nombre mismo lo indica, es la traducción, en preceptos obligatorios, del modo de ser, de las costumbres, de las aspiraciones y de los ideales políticos de un pueblo; los pueblos no se modelan a la obra caprichosa de los ensayadores de sistemas y el pretenderlo causa siempre graves y profundas perturbaciones que a veces no se reparan sino después de crueles y terribles pruebas.

Sí, como lo esperamos, vuestro patriotismo está a la altura de vuestras responsabilidades vuestra obra llevará el sello de la sabiduría y de la prudencia. Fundareis el orden, sin el cual la misma libertad perece en los horrores de la anarquía, asegurareis eficazmente el derecho individual, sin el cual la República es una vana palabra, y pondreis en las manos de la autoridad la suma de poder indispensable para hacer el bien.

Espíritus poco preparados para obras de este orden creen que las Convenciones son palenques en donde van a empeñar airadas luchas los opuestos sistemas filosóficos y hasta las creencias religiosas. Tal concepto ha sido la causa de males inmensos. Vosotros sabeis bien que la historia registra páginas sangrientas escritas por la intolerancia triunfante y perseguidora que no siembra sino desolación y ruina para cosechar asoladoras reacciones. De esos males tienen la culpa los que siempre han querido convertir el Senado en

Academia y pretendido imponer opiniones e ideas que los pueblos rechazan.

Os conjuramos, pues, en nombre de la Patria y en nombre de los intereses de la civilización, que son solidarios en el mundo, a que huyaís del peligro que os hemos señalado. Formad una República que permita la expansión libre del derecho individual en todas sus manifestaciones hasta el límite del derecho ajeno, pero no trateís de proscribir ninguna idea. Dejad a las ideas el campo libre para que iluminen si son buenas, y si son malas para que perezcan a la luz del día.

Panamá, enero 15 de 1904

Honorables Diputados.

J.A. Arango. —Tomás Arias.—Federico Boyd.

Cartas del Dr. Manuel Amador Guerrero al Dr. Eusebio A. Morales

Las presentes cartas, pertenecientes al archivo de Eusebio A. Morales nos han sido suministradas por el Dr. Arturo Morgan Morales, nieto del ilustre patricio.

Estos documentos inéditos del Dr. Amador son el testimonio de las primeras controversias panameñas en torno a las exigencias del tratado del canal, fresca aún la tinta que en él estampó Felipe Bunau Varilla.

Estas cartas en los días de hoy vuelven a encontrar vigencia porque nos revelan el sentido de identidad de los conjurados de 1903 frente a los problemas nacionales, y su vocación de defender la soberanía panameña, amenazada por las interpretaciones unilaterales del Departamento de Estado del ya frágil tratado del canal.

Las cartas de Amador constituyen un testimonio de las gestiones de Morales en Washington, ya plasmadas en varios documentos oficiales que se insertan en la presente edición, y que fueron publicados en su obra **Ensayos Documentos y Discursos** pero en igual forma constituyen una defensa de Manuel Amador Guerrero, tantas veces disminuido en el difícil papel que hubo de asumir como primer magistrado de la Nación.

Amador fue receptivo a las críticas recibidas por el tratado Hay-Bunau Varilla y fue el primer gobernante panameño en convocar a un grupo de juristas panameños para que hiciesen una evaluación del tratado, Comisión ésta integrada por Belisario Porras, Facundo Mutis Durán y Francisco Filós.

En el año de 1914 y al inaugurarse la vía interoceánica fue la Tesis del Gobierno Nacional presidido por Belisario Porras, que Panamá debería negociar un nuevo tratado y para esa tarea fue encomendado el Dr. Eusebio A. Morales, quien como Embajador en Washinton le correspondió redactar el proyecto del nuevo tratado del canal, cuyas negociaciones infelizmente no prosperaron ante la intransigencia que prevalecía entonces en Estados Unidos frente a las demandas panameñas.

Sr. Dr. Eusebio A. Morales
Panamá, Julio 13/904

Estimado Dr. y amigo:

Cuatro palabras por no haber tenido tiempo de ser más extenso. Recibí su grata carta por el vapor, portador como habrá Ud. visto, por la misma que ha debido recibir ha 2 semanas, ya yo había previsto que dado el tiempo que sirviese en E.U. el sueldo debía aumentarse.

Lo que he convenido con Espriella es que tenga Ud. el sueldo igual al Ministro, de modo que al exceder el tiempo que allá empleen de tres meses, se le dará una suma que en proporción, compense de la que debe pagarse a razón de 2000 al año.

No le avisé por cable porque aunque si accedía al aumento, no era en la forma que Ud. me indicaba.

Veo claro que el gobierno de E.U. nos principia a dar **sopitas de hiel** para compensar las **sopitas de miel** que nos dio antes. No hay más que esperar.

De Ud. affmo. amigo,

M. Amador Guerrero

Panamá, Julio 16 de 1904.

Señor Dr. Don

EUSEBIO A. MORALES

Nueva York

Estimado Amigo:

Por el vapor pasado me fue materialmente imposible atender a mi correspondencia personal, conforme mis deseos, pues desde el lunes hasta el miércoles, no tuve dos minutos para dedicarme a tan grata tarea, impidiéndome hacerlo el continuo número de visitantes, que en asuntos oficiales y personales, estuvieron en la Presidencia.

Por su carta de fines del pasado, comprendo que la comisión confiada a Uds. les tomará más de los tres meses. Noto lo que a este respecto me dice Ud.; el sueldo de Uds. es equivalente al del ministro: \$2.000.00 por trimestre, o cuarto de año. Tendré presente el tiempo que necesitan, para que no salgan perjudicados.

Los detalles que me suministra sobre la inversión de los fondos, no pueden ser mejores, especialmente la colocación de los tres millones a corto plazo al 3%. Persona que conoce bastante de finanzas me dice que la compra de los bonos del Ferrocarril de Panamá, ha sido un buen negocio.

Como al recibo de ésta ya tendrán la "Gaceta Oficial" en que fue promulgada la ley sobre moneda, supongo que habrán dado los pasos necesarios para la acuñación de nuestro medio circulante metálico. Esto, como lo demás que se les ha confiado, no dejará que desear.

Con referencia a las delicadas cuestiones suscitadas por la interpretación del tratado del Canal, se le ha confiado a Obaldía su arreglo. Espero y deseo que le presten Uds. su importante ayuda y tanto él, como yo y el país entero, apreciarán cualquier indicación oportuna y conveniente que tenga a bien hacerle. Muy terminantes me parecen los artículos del tratado que cita Ud. Considero de mucha importancia y utilidad para nosotros, la publicación del artículo que aparecerá en la "North American Review", revista muy seria y considerada de lo mejor en los E. Unidos, y como Ud. cuando escribe y hace un estudio de una cuestión como ésta, lo hace concienzudamente y éste no solo tendrá ese mérito, sino que de seguro defenderá Ud. los intereses de Panamá.

No dude Ud., que el Almirante Walker recibirá de mí los informes mejores que se pueden dar y si en mí está de manera alguna que lo nombren, puede estar Ud., seguro de que lo procuraré.

Respecto al rechazo del Sr. R. Arias, por la Convención, como uno de los Directores del Banco Hipotecario, no es acto que refleje en lo más mínimo sobre su respetabilidad y buen nombre. Ninguno de ellos le hizo cargo alguno: unos votaron en contra impulsados por ofuscación producida por la pasión política, diciendo que el golpe no iba sino contra Tomás; otros basándose en que, puesto que había hecho oposición al proyecto (en el Cablegrama que enviaron Uds.), no debía formar parte de la directiva. Ya la Asamblea terminó sus sesiones, y todos los diputados concurrieron a Palacio, a saludarme, proposición que fue aprobada por unanimidad. Tomamos una copa de champaña, en la mayor cordialidad, es de esperarse que todo marche bien, olvidando lo pasado.

La ley de elecciones, se expidió con muy poca variación, conforme al proyecto de Ud.

No tema que su hijito me inoportuné, antes por el contrario, lo tendré presente para que esté al corriente de lo que debe de hacer.

Con los amigos Remón y Benítez, no he tenido suerte, pues no ha habido ninguna vacante. Ninguno de los empleados había renunciado y en cambio se han suprimido varios destinos.

Sin más por hoy, se despide,

Su Aftmo. Amigo,

M. A. Guerrero

Sr. Dr. Eusebio A. Morales

Panamá, Julio 26 de 1904

Estimado Dr. y amigo:

Tengo su carta del 12 en curso.

Ya habrá Ud. visto que los documentos que encomendamos a Obaldía, el asunto puertos se cruzó con la de Ud., en que hace igual indicación. A virtud de conferencia con la Cámara de Comercio, enteramos a ésta del Estado del asunto y mostramos los antecedentes. La opinión está de acuerdo en que se tratê allá el asunto, con mayor razón estando el gobierno Davis desprovisto de autorizaciones.

Deseo que llegue el Correo para ver su artículo que creo será más conveniente, solo que yo no opinaría por La Haya, como árbitro sino por Alemania-Inglaterra o Francia, y en ese orden. Hablé con Espriella sobre proveerlos de fondos para gastos; no sé si lo hará por este correo.

Me asegura un amigo que está formando mi directorio de oposición así: Presidente Dr. Porras, vocales Arosemena C. y Patiño. Secretario el Dr. P. Arosemena, no sé que haya de cierto. El Dr. Porras sale el primero de El Salvador para ésta.

Espero su carta por este vapor dentro de poco y si algo hubiere que decirle lo hará al pie de ésta.

Quedo su fmo. amigo,

M. Amador Guerrero

Sr. Dr. Eusebio A. Morales

Panamá, Agosto 14 de 1904

Estimado Dr. y amigo:

Grata muy grata me ha sido su estimada carta del 2. Me encanta y me atrae cuando me habla con franqueza, porque Ud. habrá notado que es ésta mi manera de ser.

Déjeme hablarle ante todo del joven hijo de Ud., que se ha hecho simpático aquí para todos cuanto lo tratan. Me ofreció darme aviso de su partida y ya dije a Ud., que le avisaré a Arias cuya dirección por cable tengo, o bien avisaré a Raúl si es que Arias ha salido para ésta, pues Espinoza me dice que lo ha llamado.

Mucho me preocupa el asunto de los puertos y los demás que de allí se desprenden. Ha dos días tuvimos una reunión P. Arosemena, Dr. Porras, Patiño, P. Díaz y unos diez más para pensar y hablar sobre tan importante asunto, y en vista de que las tales instrucciones para estos señores no han llegado ni creo que llegarán, se resolvió avisar a Obaldía para que agitara el asunto, pero poco después vino un cable diciéndonos que había pensado una extensa exposición al Ministerio pidiendo se suspendieran las medidas dictadas, hasta la llegada de un acuerdo y concluyó, que confía honorabilidad reconocida Gobierno de E.U. Dichoso el que confía, desearía confiar para tener mi espíritu tranquilo, no es así por desgracia.

Ocupado con puerto Ancón no creo que nadie se ocupe de política. Sería un crimen pensar en otra cosa que en el derecho que se nos quiere arrebatarse.

He buscado con gran preocupación su escrito y veo ahora su resistencia de publicarlo. Me parece una sabia resolución porque si lo volvemos política, estamos perdidos y no les haremos daño alguno. Reyes tomó ese camino muy errado a mi modo de ver.

El Almirante W., me ofreció una conferencia y estuvo muy amable y tan cariñoso que cualquiera habría concebido esperanza, pero después de todo nos dijo que el gobierno no desistía de su propósito y que la bandera de la nación cubría todos los demás derechos. Qué le parece: Los comisariatos que como Ud. sabe nos metían tanto miedo han desaparecido por completo y me persuado de que cualquier tratado habría dado idéntico resultado.

Creo a pesar de todo que en nada debemos convenir, que nos sacrifiquen; pero no con nuestro consentimiento.

Creo que deberíamos procurar que aquel gobierno conviniera en nombrar un tribunal permanente que podría, ser la Corte Suprema de los E.U., para que decidiera de las actuales controversias y de las muchas más que habrán de presentarse durante los trabajos de la magna obra del canal. Tendríamos así alguna esperanza en el resultado de nuestros reclamos, y si nada obtenemos al menos no sufriríamos la humillación de que los E.U. nos impongan su soberana voluntad.

No es cierto lo que dijo la Espriella, que se había pactado un *modus vivendi* entre E.U., y Panamá, o sea entre el gobierno de la Zona y nuestro gobierno. El Gral. Davis y el M. Barrett tuvieron ese deseo; pero el memorándum que presentaron que no era otra cosa que dejarle los puertos y por ahora le hicimos modificaciones que no quisieron aceptar. Consistían éstos en que los buques viniesen despachados para los puertos de la Rep. y que le daría permiso para la Boca a descargar. Esto mientras se concluía una negociación definitiva sobre este asunto. No convendremos en nada irrisorio. Que por la fuerza hagan lo que se les antoje, pero no apoyados en decisiones hechas por nuestro Gobierno. Eso de ningún modo.

No tema Ud. amigo mío que por debilidad me decida a conceder lo que no debo, ni puedo, ni quiero. La energía es la única arma que podemos esgrimir y no podemos echarla a un lado. No echaremos baladronadas a lo Pérez Saso pero no vacilaremos en sostener nuestros derechos, créalo.

Cualquiera esperanza fundada que exista, comuníquemela sin demora.

Ayer recibimos el cable de Uds. pidiendo se nombrara a Cromwell abogado consultor. Este era mi deseo, pero como nos hicieron creer que mandarían poder a W. y B., para arreglar el asunto, nos pareció que sobraba el abogado allá.

Confiamos en que Uds. pelearán estos asuntos hasta el fin, quiera Dios ayudarlos.

Quedo de Uds. affmo amigo,
M. Amador Guerrero

Sr. Dr. E. A. Morales

Panamá 4 de Octubre de 1904

Mi estimado Dr. y amigo:

Las cuatro letras envié al vapor pasado para Ud. y el amigo Arias, porque no tuve tiempo para más. Ya les dije que recibí sus apreciables del 19 del pasado.

Lejos Ud. de Panamá no está en condiciones de apreciar bien los hechos que han ocurrido y que han apresurado la formación de un partido que diera apoyo al gobierno y lo defendiera de los cargos que con razón o sin ella se le hacían.

El Ministerio que Ud. me indica me hace pensar que no me quedaría papel que hacer en el gobierno o que el constante desacuerdo con los Ministros daría por resultado, o mi separación del

puesto que ocupo a lo cual no estoy dispuesto, o la renuncia de los Ministros.

Además si se tiene en cuenta que estos señores creen al partido que sostiene al gobierno atacado de lepra y compuesto de traidores negociantes, ineptos ¿cómo creer que se amalgamarían esos Arias con ese partido? Ahora, ¿cómo me deshago de los que de buena fe me ayudan, para buscar mejores amigos en los que hoy hacen la guerra al Gobierno?

Amigo mío si yo me hubiera asegurado por un momento que la situación iba a cambiar tan desfavorablemente, no habría habido fuerza que me hubiera hecho aceptar la candidatura para el puesto que ocupo, pero no es tiempo ya de hablar de ésto, me eligieron y aquí estaré hasta el fin.

Mi entusiasmo por el momento de independencia y mi buena fe al coadyuvar a que se llevara a cabo me hicieron creer que las cosas pasarían de diverso modo: Ud. sabe que fue Ud. una de las personas a quien propuse se encargara de una Secretaría y no fue Ud. el único liberal a quien yo traté de tener en el Gobierno, nadie quiso prestarse a ayudarme en la difícil tarea de gobernar y organizar la República, mucho más difícil para mí que para cualquier otro que tuviera versación en asuntos de gobierno y mejores aptitudes; pues Ud. sabe que en mis 71 años solo he desempeñado puestos públicos ocasionalmente y por poco tiempo y no es practicando la medicina y asistiendo hospitales como se adquieren las aptitudes para el elevado puesto en que han querido colocarme, sin que yo haya dado paso alguno tendiende a procurar mi elección.

Ud. recordará la conducta del Dr. P. Arosemena, en quien tenía la más alta confianza y a quien santamente creí encontrar un apoyo decidido, si Ud lo ha olvidado déjeme que le recuerde: Con la mayor espontaneidad trabajé para colocarlo a él como primer designado y fue convenido en que otro amigo del gobierno que designáramos sería el segundo.

Al regresar a Colón un día por la tarde en cuya noche debía hacerse la designación del segundo, que mis amigos y yo debíamos designar, me encuentrocon un convenio firmado por él y otros diputados, por el cual se designaba a él de primer designado y al Dr. Mendoza segundo. Después de ésto qué labor ardua para

Vea la copia de la carta de Env. de B.V. a Hay que va a Ricardo y la respuesta, esto es terminante.

mí obtener el voto de los amigos para el Dr. Arosemena y para el Dr. Mendoza. Este fue el primer síntoma de discordia y Ud. sabe cómo y por quiénes se dio el mal paso. ¿Lo justifica Ud.? No lo creo.

Allá vuelve el asunto puertos por que el Gral. Davis quien tiene autorización para tratar, es decir la Rep. trataría con "La Zona" no con los E.U. Ud., sospecho que de allá volverá para acá. ¡Qué situación amigo mío!

Creo que la opinión de Uds. los que están más inmediatos al escenario es la más acertada: Que la suprema Corte de E.U. decida el punto y lugar cualquiera que sea el resultado, procederemos a hacer un tratado de Comercio para procurar no perder todas las rentas, hoy amenazadas de muerte.

No defiendo, ni puede defenderse la conducta de Bunau Varilla, pero con Varilla y sin Varilla nos habría pasado lo mismo.

No creo mal que Ud. conserve unos días al joven sin estudios, se conviene conocer la ciudad, lo que estar seguro seguro conseguirá dentro de poco, dado su carácter y edad.

Mucho retarda la acuñación de la moneda, es de sentirse.

Sin otro particular por el presente, me repito,

M. Amador Guerrero

Nueva York, Julio de 1904

Nueva York, Julio de 1904

Sr. Dr. Manuel Amador Guerrero
Panamá,

Muy estimado Dr.

Con todo respeto por sus opiniones me permito decirle que yo considero mejor para la república no tratar con la Comisión del Canal sino asuntos puramente mecánicos y dejar la consideración de los verdaderamente importantes para discutirlos y arreglarlos con el gobierno de los Estados Unidos, en forma de tratados.

La Comisión del Canal no tiene poder para celebrar convenciones y a nosotros nos conviene un arreglo firme y obligatorio. Además con el gobierno americano puede conseguirse más en nuestro favor que con la Comisión. Por ejemplo yo creo que en el asunto de las contribuciones puede sostenerse con la lectura desapasionada del tratado que los Estados Unidos no tienen facultades para imponerlas.

Panamá les ha concedido el uso de su soberanía para fines de protección que se imponen y que ella no podría dar en caso de conflicto con los demás poderes del mundo. Para facilitar esa protección sin perder de vista que se trata de un convenio, y no de otra cosa, Panamá confirió poder y autoridad a los Estados Unidos, pero no se ha desprendido de sus derechos de soberanía en absoluto.

Prueba de ello es el artículo XIII que dice "Los Estados Unidos podrán importar a la zona libre de derechos y sin restricciones todo lo que necesiten"

Si la intención de los contratantes hubiese sido la de que los Estados Unidos pudieran imponer contribuciones en la Zona, ¿para que ese artículo que es el único que se refiere al asunto?

Prueba también de que Panamá no se ha desprendido de su soberanía es el artículo que Ud. conoce en el cual se estipula que las expropiaciones que se hagan de terrenos en la Zona, serán valuados por una Comisión Mixta nombrada por las dos república. Si no fuera como yo sostengo para qué establecer tribunales mixtos.

En fin el asunto es de tal naturaleza que en el último caso sería cuestión de solicitar su aclaración sin celebrar por lo pronto ningún arreglo en que aparezcamos de pronto dando más de aquello que el otro contratante tiene que dar.

Le suplico encarecidamente Dr. que no se comprometa en el asunto; que forme un plan en el cual se interprete el tratado en forma menos dañosa para el país, y le envíe instrucciones al Señor de Obaldía para que trate el asunto en todas sus fases.

Eusebio A. Morales

El Canal de Panamá

Legación de Panamá.—Número 6.—

Washington agosto 11 de 1904.

Excelencia:

He recibido instrucciones de mi Gobierno para hacer ante el ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia las gestiones conducentes a obtener una solución satisfactoria de las dificultades que, inesperadamente, han surgido entre las autoridades de la República y el señor Gobernador de la Zona del Canal, con motivo de la interpretación que este último le ha dado a algunas de las cláusulas del convenio sobre el Canal Istmico celebrado entre los dos países, el día 18 de noviembre último.

Varios son los puntos en que tal discrepancia ha ocurrido y es indispensable desde luego hacer apreciaciones generales sobre el convenio en su conjunto, para poder aplicar en cada caso la interpretación más conforme con la armonía entre sus diversas cláusulas; más en consonancia con declaraciones anteriores hechas por el ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia, y más convenientes para mantener la cordialidad que entre los dos países ha existido desde que el mío entró a formar parte de la familia de las naciones.

Como antecedentes imprescindibles de la convención Varilla-Hay es necesario tener presente el tratado Hay-Herrán, celebrado el 22 de enero de 1903, aprobado por el Senado de los Estados Unidos, y rechazado por la República de Colombia.

Ambos tratados fueron celebrados con el mismo objeto principal: facilitar a los Estados Unidos la construcción de un canal para naves entre los mares Atlántico y Pacífico. Ni en uno ni en otro caso fue el pensamiento de las altas partes contratantes celebrar un convenio de cesión de territorio ni de renuncia absoluta de soberanía por parte de alguna de ellas. El ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia, para poner en claro ante el mundo, y muy especialmente ante las naciones de Centro y Sur América, el objeto real de las negociaciones que dieron por resultado la celebración del trata-

do Hay-Herrán hizo la declaración formal y categórica contenida en el artículo IV que dice así:

“Los derechos y privilegios concedidos a los Estados Unidos por los términos de esta Convención no afectarán la soberanía de la República de Colombia sobre el territorio dentro de cuyos límites habrán de ejercerse tales derechos y privilegios. El Gobierno de los Estados Unidos reconoce en un todo esta soberanía y rechaza toda pretensión de menoscabarla de manera cualquiera o de aumentar su territorio a expensas de Colombia o de cualquiera de las Repúblicas hermanas de Centro y Sur América; pues desea, por el contrario, robustecer el poder de las Repúblicas en este continente y promover, desarrollar y conservar su prosperidad e independencia”.

Esa declaración solemne, hecha en documento público del más elevado carácter, cual es un tratado entre naciones, envuelve en concepto de mi Gobierno la promesa perpetua de una línea de conducta generosa y noble por parte de los Estados Unidos, promesa que no ha quedado destruida por el hecho de no existir el tratado Hay-Herrán; pues la declaración en que está incorporada expresa el propósito de seguir una política franca y leal, aceptada y confirmada después por el Senado de los Estados Unidos, que es la más alta corporación legislativa de este país. Esa declaración, como Vuestra Excelencia sabe, tuvo por objeto hacer desaparecer el temor que en las Repúblicas americanas existe de una absorción más o menos remota por parte de esta Nación, tan poderosa en todos sentidos; y ella influyó de modo decisivo en el Gobierno de mi país para aprobar sin reservas y sin modificaciones la Convención Varilla-Hay.

Considerando mi Gobierno que esa declaración tan solemne como espontánea tiene el carácter de perpetua y definitiva, confía en que el ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia interpretará el convenio sobre canal Istmico del modo más armónico y consecuente con ella, y en esa convicción paso a exponer a Vuestra Excelencia otras observaciones más específicas.

I

El convenio sobre Canal Istmico no importa cesión de territorio ni trapaso absoluto de soberanía

La simple lectura del artículo VI del tratado Hay-Herrán, que es antecedente de inapreciable valor, pues en él se expresa la intención de los Estados Unidos al negociar con Colombia, es suficiente

para establecer la verdad de la proposición que acabo de enunciar; pero hay, además, para sustentarla, poderosas razones deducidas del Convenio Varilla-Hay que en la mayor parte de sus cláusulas es idéntico al Hay-Herrán. En efecto, como antes he tenido el honor de observar a Vuestra Excelencia, en esta misma nota, ambos convenios versan sobre la concesión a los Estados Unidos del uso, ocupación y control de ciertas tierras y aguas para facilitar la construcción, conservación, explotación, sanidad y protección de un canal marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. Este es el pensamiento principal y dominante en ambos actos; en ninguno de ellos se ha usado expresión alguna que implique traspaso del dominio absoluto sobre el territorio, ni muchos menos la transferencia de la Soberanía.

Esa concesión podría haber sido hecha por Colombia, antes del 3 de Noviembre de 1903, y por la República de Panamá, después de esa fecha, a cualquiera compañía o asociación legal, sin que por el hecho de su otorgamiento pudiera pretenderse derecho al pleno dominio sobre la faja de terreno en que la obra iba a ejecutarse, ni mucho menos al ejercicio de una soberanía absoluta.

La relación jurídica en ese supuesto, lo mismo que en el presente caso, sería la que existe entre un arrendador y un arrendatario. Unicamente por ser el arrendatario otra República, puede haber confusión respecto del carácter y de la esencia de las relaciones contractuales creadas por el Convenio.

Si la intención de las altas partes contratantes hubiera sido en uno o en otro de los dos casos a que me he venido refiriendo, la cesión absoluta del dominio y de la soberanía sobre el territorio, ambos tratados podrían haberse reducido a dos artículos: uno en que se especificara la cosa vendida, y otro en que se expresara el precio de la venta; pero comprendiendo ambas partes que ese no era el caso, y penetradas de que otra era la intención, viéronse obligadas a fijar, en lo posible, las relaciones entre el arrendador y el arrendatario, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de aquella negociación trascendental y las necesidades que podrían surgir por la naturaleza misma de la obra que se iba a emprender.

Así por ejemplo, tratándose de una empresa de indiscutible conveniencia, en la que van a invertirse considerables sumas del tesoro federal de los Estados Unidos, y con motivo de la cual pueden surgir controversias diarias en razón de los trabajos; ¿hubiera sido cuerdo por parte de Colombia primero, y de Panamá, después, exigir la posición de una jurisdicción absoluta sobre todas esas cuestiones y pretender el poder exclusivo de fallarlas y decidir las cuando una de las partes era una nación extraña?

Era natural, pues, que alguna provisión se estableciera a ese respecto, y de allí seguramente nació el pensamiento de conferir a los Estados Unidos la facultad de establecer un Poder Judicial restringido en la Zona.

En el tratado Varilla-Hay esa concesión fue más amplia que en el Tratado Hay-Herrán; pero tampoco es absoluta.

El artículo III del tratado Varilla-Hay, único en que se trata de derechos de soberanía, establece que los Estados Unidos poseerían y ejercerían los derechos, poder y autoridad que la República de Panamá les concedió sobre la Zona, como si ellos fueran soberanos en el territorio; pero esa expresión lleva implícita la idea de que no lo son, y aunque en la parte final del artículo se agrega: "con entera exclusión del ejercicio por la República de Panamá de tales derechos soberanos, poder y autoridad", tales palabras, que se encuentran en evidente contradicción con las que les preceden, deben ser interpretadas de acuerdo con otros artículos posteriores del convenio que demuestran la intención real de los contratantes.

En el artículo VI, por ejemplo, se trata de los derechos de propiedad de particulares en la Zona y se ha convenido que todo daño causado con motivo de las concesiones hechas a los Estados Unidos, o por razón de la construcción, conservación, explotación, sanidad y protección del Canal y de sus obras auxiliares, sean investigados, apreciados y decididos por una comisión mixta nombrada por los dos países y cuyas decisiones serán finales. (1) Si los Estados Unidos poseyeran la soberanía sobre la Zona, con exclusión absoluta de la República de Panamá, esta cláusula sería inexplicable.

Por el artículo X la República de Panamá se obliga a no imponer ni permitir que se impongan contribuciones o impuestos de ningún género, ya sean nacionales, departamentales o municipales sobre el Canal mismo o sobre el Ferrocarril u obras auxiliares o sobre sus remolcadores y buques como tampoco sobre los empleados, obreros y otros individuos al servicio del Canal, del ferrocarril y obras auxiliares; pero de esa estipulación se deduce que sí conserva la facultad de imponer esas contribuciones sobre las propiedades y personas no comprendidas en la excepción.

1 Este documento es tomado de la Memoria de Gobierno y Relaciones Exteriores de 1906 (páginas 227 a 235) y las faltas de concordancia que se observan en este párrafo demuestran que en él se ha incurrido en una omisión. Debe decir: "y se ha convenido que todo daño causado y TODA EXPROPIACION HECHA con motivo de las concesiones, etc. etc..... sean investigados, apreciados y decididos por una Comisión Mixta, etc. etc."

Según el artículo XII la República de Panamá está obligada a permitir la inmigración y el libre acceso a las tierras y talleres del Canal y de sus obras auxiliares de todos los empleados y obreros de cualesquiera nacionalidades que lleguen contratados ya, o en busca de trabajo, y se obliga a considerarlos como exentos del servicio militar.

Y por último fue convenido entre las partes, según el artículo XXIII, que los Estados Unidos disfrutarían del derecho de emplear para la protección del ferrocarril, del Canal y de sus obras auxiliares, sus propias fuerzas de mar y de tierra y podrían construir fortificaciones con este objeto.

Como se deduce de esas estipulaciones contenidas en cláusulas posteriores al artículo III y todas en términos claros, precisos y perentorios, la República de Panamá conserva aún parte del Poder Judicial de la Zona del Canal; se ha comprometido a permitir la entrada a la Zona del Canal de ciertos inmigrantes, lo cual implica que si la cláusula no existiera, ella podría impedirlo; se ha obligado a no poner contribuciones al Canal ni a sus obras auxiliares etc., etc., lo cual demuestra que si no fuera por la renuncia especial contenida en el artículo, conservaría su derecho soberano para imponerlas; ha convenido en admitir la introducción a la Zona libres de derechos de importación, los artículos necesarios para el Canal, las obras auxiliares, y los empleados en ellas, obligación que no puede contraer sino quien tiene la facultad y el derecho de poner tales gravámenes, y por último ha autorizado a los Estados Unidos para usar sus fuerzas de mar y de tierra en el caso de que fuesen indispensables para la protección del Canal, lo cual necesariamente supone que, si esta cláusula no existiera, los Estados Unidos no tendrían tal facultad.

Ninguna de las estipulaciones que he enumerado tendría razón de ser si la República de Panamá hubiera renunciado al dominio de la Zona y a sus derechos de soberanía en absoluto; pero su intención no fue nunca renunciar a esos derechos, ni los Estados Unidos han tenido el propósito de adquirirlos, pues ellos, muy al contrario, han declarado que no pretenden aumentar su territorio a expensas de Colombia ni de ninguna otra República de Centro y Sud América y nada hay que justifique la más remota sospecha de que tal declaración no es sincera.

En los tratados públicos no puede admitirse la existencia de cláusulas inútiles ni contradictorias; las que aparecen como inútiles, deben ser interpretadas de modo que produzcan algún efecto; y las que son contradictorias deben interpretarse teniendo en cuenta el

tenor de las últimas, porque es de suponerse, como dice Woolsey, que ellas expresan la última idea o pensamiento de las partes.

Si existiere alguna contradicción entre las cláusulas sobre las cuales acabo de llamar la atención de Vuestra Excelencia y la III del Convenio Bunau-Varilla-Hay, es claro que las últimas deben prevalecer, porque son más específicas y más claras y porque están más conformes que aquélla con las demás cláusulas del mismo Convenio y con la política externa de los Estados Unidos en relación con las naciones sur y centro americanas.

Mi Gobierno estima que el pensamiento de las partes contratantes está oscuro en todo cuanto se refiere a estas delicadas cuestiones del dominio y de la soberanía; pero después de un estudio cuidadoso puede llegarse a la conclusión de que los dos países ejercen conjuntamente la soberanía sobre el territorio de la Zona del Canal y que en los casos expresamente especificados en el Convenio Bunau-Varilla-Hay el uso de tal derecho le corresponde a los Estados Unidos, en virtud de delegación de la República de Panamá; pero en todo aquello en que el Convenio guarda silencio, los derechos de la República de Panamá permanecen inalterables y completos.

Tal situación que daría lugar a constantes conflictos si se prolongara, requiere la celebración de un convenio aclaratorio discutido por las partes con el espíritu conciliador que ha prevalecido hasta ahora en las relaciones de los dos países y a ello está dispuesto el Gobierno mío.

Pasando ahora a las cuestiones especiales que se han suscitado, permítame Vuestra Excelencia que las trate separadamente.

II

Puertos

En la Zona del Canal, tal como está descrita en el artículo II del Convenio Bunau-Varilla-Hay, no se comprenden las ciudaddes de Panamá y Colón ni sus puertos adyacentes; las unas y los otros han sido expresamente excluidos de dicha Zona y por consiguiente, aun aceptando por concesión el supuesto de que los Estados Unidos poseyeran el derecho de soberanía sobre ella, tal derecho no podría extenderse a lo que por el mismo convenio se considera excluido de su jurisdicción.

Restaría en relación con este asunto considerar dos cosas:

1. Si los Estados Unidos tienen facultad según el Convenio Bunau-Varilla-Hay para habilitar como puertos propios de él cualquier lugar comprendido dentro de la Zona y abrirlo al comercio del mundo aun con detrimento de los intereses de la República de Panamá.
2. Si en el supuesto de existir esa facultad, los Estados Unidos pueden extenderla hasta declarar puertos propios de él y sometidos a su jurisdicción, cualquiera o parte de cualquiera de los que actualmente existen pertenecientes a la República de Panamá, aun incluyendo los mismos exceptuados por el artículo II del Convenio.

Desde luego es de rigor observar que el establecimiento de un puerto y su habilitación para el comercio del mundo, es una facultad inherente al soberano del territorio; y, como ya he demostrado en la primera parte de esta nota que los Estados Unidos no disfrutaban de la soberanía absoluta de la Zona, sino de los derechos especiales concedidos por el Convenio Bunau-Varilla-Hay, es claro que no reside en los Estados Unidos tal facultad.

En previsión, sin duda, de la necesidad que los Estados Unidos pudieran llegar a tener de puertos durante la época de la construcción del Canal y después de estar éste al servicio del comercio, la República de Panamá conviene en ceder a los Estados Unidos, según se ve en la parte final del artículo IX, el derecho de usar los puertos y ciudades de Panamá y Colón como lugares de anclaje, de reparación de naves, de carga y descarga, depósito y trasbordo de cargamentos, ya en tránsito, ya con destino al servicio del Canal.

Los puertos de Panamá y Colón son, por la naturaleza del terreno, las entradas mismas del Canal. Siendo así, la idea de otros puertos para el mismo uso o destino no debió presentarse a la consideración de los negociadores; y como por el Convenio los Estados Unidos tienen derecho a usarlos, reconociéndolos como pertenecientes a la República de Panamá, es claro que no están facultados para declararlos como puertos propios y sujetos a su jurisdicción exclusiva. Obvio es que tampoco puedan esos puertos estar bajo su autoridad, solo porque se emplee la ficción de un nombre diverso, como puerto de Ancón o puerto Cristóbal.

El Puerto de Panamá es uno solo, que comprende todas las costas que rodean a la ciudad, las islas cercanas, y todas las aguas que bañan esa porción del territorio nacional. A ese Puerto en toda su amplitud se refiere el artículo II del Convenio Varilla-Hay, y dentro de sus límites queda comprendido el lugar que se conoce con el nombre de La Boca. Como parte del puerto de Panamá,

La Boca queda excluida de la Zona del Canal; pero por la misma circunstancia, ese lugar puede ser usado por los Estados Unidos para cargar, descargar, depositar y trasbordar cargamentos en virtud del derecho que se les ha otorgado para ello.

Lo mismo acontece con el puerto de Colón. El lugar llamado Cristóbal no es sino un barrio de la ciudad; allí no hay nada que pueda considerarse, ni abusando de las palabras, como un puerto distinto; y por consiguiente, toda está bajo la jurisdicción exclusiva de la República de Panamá; pero los Estados Unidos tienen el derecho de usarlo como lo estipula el tantas veces mencionado artículo IX del Convenio.

Si al uso de ese derecho se hubieran limitado las autoridades de la Zona, su posición sería inobjetable y mi Gobierno habría cumplido con el mayor empeño las obligaciones que le incumben; pero, las cosas han ocurrido de diverso modo. El señor General G.E. Davis ha dictado una disposición, sin duda de carácter legislativo, por la cual convierte en puertos de la Zona, los lugares de La Boca, en Panamá, y de Cristóbal, en Colón; los declara abiertos al comercio universal y sometidos a su jurisdicción exclusiva, con prescindencia absoluta de la República de Panamá, y sin tener en cuenta la cláusula que excluye de la Zona a las ciudades de Panamá y Colón, junto con sus puertos adyacentes.

Mi Gobierno no puede aceptar tal situación por considerarla contraria al espíritu y a la letra del Convenio Varilla-Hay, y tiene la convicción de que el procedimiento adoptado por las autoridades de la Zona no ha obedecido a instrucciones que recaigan precisamente sobre el punto que ha originado esta penosa controversia, sino que ha tenido origen en sugerencias locales.

III

Aduanas

También ha dispuesto el señor General Davis, en su carácter de autoridad superior de la Zona del Canal, el establecimiento de Aduanas en los mismos lugares que ha habilitado como puertos, y ha puesto en vigor la tarifa de importación que actualmente rige en esta República.

No hay ninguna cláusula de la Convención Varilla-Hay, que permita a los Estados Unidos el establecimiento de aduanas en los puertos de Panamá y Colón, ni el cobro de derechos de importación en ningún lugar de la Zona del Canal. Tal facultad lo mismo que la referente a los puertos, reside en el soberano del territorio y

los Estados Unidos no poseen la soberanía absoluta que podría darles derecho al establecimiento de un sistema fiscal propio.

La parte de sus derechos de soberanía que la República de Panamá ha concedido a los Estados Unidos por consideraciones de orden elevado, se ha referido a todo lo necesario y conveniente para dar al Canal eficaz protección, en paz o en guerra; para mantenerlo libre y abierto al comercio universal, y para impedir su uso indebido por una potencia extraña. También ha concedido la República de Panamá el uso de sus derechos para establecer una administración pública que mantenga el orden interno de la Zona del Canal, a efecto de que los trabajos no se interrumpan y el servicio no sufra cuando el Canal esté concluido; pero no ha sido el pensamiento de ninguna de las partes que los Estados Unidos convirtieran la Zona del Canal en fuente de recursos fiscales, estableciendo altas tarifas aduaneras aun en contra de la República de Panamá, que es la dueña del territorio, y quien aún posee este derecho que no ha renunciado.

Muy al contrario de eso, en varios artículos del Convenio Varilla-Hay, se encuentra consignada la voluntad de las partes en el sentido de que la Zona del Canal fuera un territorio enteramente abierto y libre al comercio, y en ese concepto la República de Panamá contrajo obligaciones que de otro modo no se explicarían.

El artículo IX del Convenio consagra el principio de la franquicia de las entradas del Canal y de las ciudades de Panamá y Colón (ciudades y entradas que son las mismas como antes he dicho) a efecto de que ni en una ni en otra se exigieran derechos de peaje, tonelaje, anclaje, faro, muelle, etc., etc., sobre las naves que pasarán el Canal, con excepción de los derechos que los Estados Unidos impusieran por el uso del Canal y otras obras, o que la República de Panamá estableciera sobre las mercaderías destinadas al consumo del resto de la República.

Si a esa estipulación se agrega la contenida en el artículo XIII, en virtud de la cual la República de Panamá permite a los Estados Unidos la introducción a la Zona, libres de impuestos de Aduanas y de cualesquiera otros, de todo lo necesario para la construcción, servicio, explotación, sanidad y protección del Canal y de sus obras auxiliares, es evidente que los Estados Unidos antes de obtener la aceptación de esa cláusula no se consideraban con derecho para introducir a la Zona sus propias máquinas, materiales, provisiones, etc., etc., sin pagar a la República de Panamá los impuestos establecidos; y si tal es el caso, mucho más claro es que no pueden establecer tarifa propia que, en definitiva, viene a ser con-

tra la República de Panamá y especialmente contra sus principales ciudades.

Interpretando esas cláusulas de modo que se armonicen unas con otras, puede llegarse a la conclusión de que si alguna tarifa de aduanas puede establecerse en los puertos de Panamá y Colón, o sean las entradas del Canal, sobre la importación de artículos comerciales destinados a ser usados o consumidos en la Zona, tal tarifa le corresponde a la República de Panamá y no a los Estados Unidos; pues ella sólo se ha obligado por el artículo XIII del Convenio a permitir que los Estados Unidos importen en "cualquier tiempo a dicha zona y obras auxiliares, libres de derechos de aduana, impuestos, contribuciones y gravámenes de toda clase y sin ninguna restricción toda clase de naves, dragas, máquinas, carros, maquinarias, instrumentos, explosivos, materiales, abastos y otros artículos necesarios y convenientes para la construcción, conservación, servicio, sanidad y protección del Canal y de sus obras auxiliares, y todas las provisiones, medicinas, vestidos, abastos y otras cosas necesarias y convenientes para los oficiales, empleados, obreros y jornaleros al servicio o en el empleo de los Estados Unidos y para sus familias:" de modo que toda introducción hecha en la Zona, de mercaderías o efectos no comprendidos en la excepción que el artículo establece en términos claros y categóricos, es decir, toda introducción que no sea hecha por los Estados Unidos sino por particulares no empleados en el Canal, puede ser gravada por la República de Panamá.

Esta es la interpretación más conforme con el carácter general de la Convención sobre canal Istmico, pues no debe perderse de vista que el objeto de ella no es ceder por una parte ni adquirir por otra extensiones territoriales ni recursos fiscales o rentísticos; el fin contemplado es la construcción de un canal y todo cuanto se estipula en el Convenio tiene por objeto facilitar esa construcción, no entorpecerla.

IV

Correos

En la Zona del Canal se han establecido oficinas de correos y se usan en ellas, para el exterior, estampillas de valores diversos a las que actualmente usa la República de Panamá. Como los valores de esas estampillas son menores en la Zona, y no se ha puesto ninguna restricción en su venta, el público ocurre a comprarlas y a portear allá su correspondencia, ocasionándole a la República un quebranto muy considerable en esa renta nacional.

Mi Gobierno considera que los Estados Unidos pueden tener un servicio doméstico de correos dentro de la Zona; pero no pueden despachar correos para el exterior del país, pues tal derecho le corresponde a la República de Panamá.

Hechas las observaciones que anteceden en las cuales me he esforzado en presentar la cuestión por su lado jurídico, ciñéndome a las cláusulas del Convenio Varilla-Hay, creo oportuno exponer al ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia, otras fases del asunto que son no menos dignas de consideración.

Aun suponiendo que el Convenio Varilla-Hay pudiera interpretarse en el sentido de conceder a los Estados Unidos el derecho de establecer puertos, aduanas y correos en la Zona del Canal; aun dando por claro y definitivamente reconocido en favor de los Estados Unidos el derecho absoluto al dominio y a la soberanía sobre el territorio; si el ejercicio de esos derechos redundara en daño grave e irreparable para la República de Panamá, y produjera un estado de ruina comercial y económica que las partes no tuvieron en mira ocasionar, pues nadie contrata para hacerse a sabiendas un perjuicio incalculable y sin remedio, debería ser motivo de grave meditación para el Gobierno de Vuestra Excelencia y para este país en donde prevalecen un profundo espíritu de justicia y un elevado sentimiento de equidad, el poner en vigor medidas como las de que me ocupo, que producirían aquellos resultados y que darían golpe de muerte a mi país, sin producir beneficio para los Estados Unidos.

Bien sé que el sentimiento no debe entrar para nada en negociaciones de este género: pero aun viendo el asunto por el lado de las conveniencias más egoístas, ¿qué interés pueden tener los Estados Unidos en que la República de Panamá se arruine económicamente, en que su posición financiera sea insostenible, por la desaparición de sus recursos fiscales, y que al fin se vea incapacitada para cumplir ante el mundo las obligaciones inherentes a una nación libre y soberana? ¿No está por el contrario en el interés de los Estados Unidos propender al desarrollo de la República de Panamá y contribuir a su prosperidad y engrandecimiento?

Si las disposiciones dictadas sobre puertos, aduanas y correos continuaran en vigor, las ciudades principales de la República de Panamá perderían la importancia que siempre han tenido como lugares de tránsito, y todo el comercio se desviaría de ellas para centralizarse en los puntos que los Estados Unidos escogieran para ello, en forma de puertos. Las rentas que por tal motivo percibe hoy la República y las que de modo indirecto recibe por el tráfico,

desaparecerían por completo. Hoy mismo sucede ya que las Compañías de vapores del Pacífico no quieren despachar sus naves sino por el llamado puerto Ancón, y se niegan a recibir carga por el llamado puerto de Panamá de modo que, si las cosas siguen así, las ciudades dichas quedarán pronto convertidas en lugares inhabitados, aislados de todo contacto comercial directo con el mundo, es decir, quedarían en condición inferior a la que tenían antes de celebrarse el tratado en que cifraban la esperanza de su mejoramiento y progreso.

Si en la Zona del Canal siguiera en vigor la tarifa establecida contra toda introducción de mercaderías que no proceden de los Estados Unidos, la industria del comercio que hasta ahora ha florecido, desaparecería por completo, o quedaría reducida, acabando la importación de lo necesario para los empobrecidos pueblos del Interior de la República. En efecto, artefactos americanos llegarían a nuestros mercados y allí pagarían el correspondiente impuesto; no podrían, pues, competir con los que llegan libres a la Zona. Los artefactos que Panamá recibe de Europa no podrían cruzar la Zona y venderse en ella sino pagando una alta tarifa, y, por consiguiente, estarían sujetos a un doble impuesto que los colocaría en desventajosa situación.

Las industrias nativas encontrarían también en la tarifa de la Zona una valla infranqueable, y, así, el daño causado con ella sería mayor para la República de Panamá que para cualquiera otro país.

Ni las cosas más necesarias para la vida, ni los artículos de más continuo uso y consumo producidos en el país, podrían cruzar la línea divisoria, sin sufrir recargos considerables que, en definitiva, serían prohibitivos.

Con golpe tan rudo dado al comercio y a las industrias nativas, las rentas de la República de Panamá desaparecerían; y como por el Convenio del Canal tiene contraídas ciertas obligaciones que limitan sus recursos fiscales de todo género y ciertas responsabilidades que implican gastos de consideración, el prospecto que se le presenta a mi país es de debilidad, de pobreza y de atraso, en vez del porvenir brillante que los mismos Estados Unidos han tenido en mira labrarle cuando le han extendido su mano generosa y le han ofrecido su apoyo leal y eficaz en horas de infortunio.

Mi Gobierno no cree que el de Vuestra Excelencia haya tenido el propósito de causar a la República tan inmensos e irreparables daños; muy al contrario confía en que bastará la exposición de ellos para que cese la situación creada y se pongan las bases de una

vida común en la cual se consulten los intereses de los dos países, cosa que no es imposible sino muy al contrario, muy hacendera.

Pero antes de que se llegue a esa convención final que debe comprender muchos detalles y de la cual podré tratar a Vuestra Excelencia en otra oportunidad, por ahora me limito a solicitar de Vuestra Excelencia que, haciendo uso de las facultades administrativas de que está investido, y con el objeto de poner término a la delicada situación que atraviesa la República de Panamá, imparta las órdenes del caso a efecto de que se suspendan las disposiciones dictadas por las autoridades de la Zona del Canal, en lo referente a puertos, aduanas y correos, hasta tanto que sobre ellas se llegue a un acuerdo que consulte los intereses comunes.

Doy a vuestra Excelencia seguridad completa de que el Gobierno de mi país tiene el deseo más vehemente y más sincero de llegar a ese arreglo, en términos nobles (2) y satisfactorios para los Estados Unidos.

Con sentimientos de alta consideración y respeto soy de Vuestra Excelencia, obsecuente servidor,

J.D. de Obaldía

2 La palabra NOBLES no se hallaba en el proyecto de nota hecho por mí. Esa fue la única adición que le introdujo el Ministro señor Obaldía. E. A. M.

El Tratado del Canal⁽¹⁾ su historia e interpretación

I

Antes de entrar en un estudio detallado de las principales cláusulas contenidas en el Tratado referente al Canal Istmico, celebrado entre los Estados Unidos y la República de Panamá el 18 de noviembre último, conviene considerar, de paso, ciertos hechos que, a más de ser indispensables para el conocimiento de los antecedentes de dicho Tratado, ilustran algunos de los puntos sobre los cuales existe divergencia de opiniones entre los Gobiernos de los dos países.

Después de largas negociaciones, los Estados Unidos y Colombia concluyeron en enero de 1903 un Tratado conocido con el nombre de "Convención Herrán-Hay", cuyo objeto era asegurar la construcción y control por los Estados Unidos, de un canal a través del Istmo de Panamá. Esta Convención fue ratificada por el Senado Americano, pero no así por el de Colombia.

El pueblo panameño, que vio en el rechazo del Tratado por el Senado Colombiano, un golpe mortal a sus intereses del momento y a sus esperanzas de prosperidad futura, juzgó que había llegado la hora de romper sus lazos políticos con la República de Colombia, a la cual se uniera antaño por su propia voluntad, y proclamó su separación del Gobierno de Bogotá el 3 de noviembre último.

Es esta una ocasión oportuna de declarar, como lo hago de manera enfática y solemne, que en la labor preparatoria de la emancipación de Panamá, la actual administración de los Estados Unidos no tomó parte alguna, ni directa ni indirectamente. Es absolutamente falso que hubiese existido algún pacto o entendimiento previo en virtud del cual este país prometiera su ayuda para sostener la independencia de la nueva república; y falso asimismo que el pueblo del Istmo actuara bajo la creencia de que existía tal

1 Artículo escrito en octubre de 1904 para ser publicado en la North American Review de noviembre, y retirado en vista de la actitud del Presidente Roosevelt, quien envió al Istmo al Secretario Taft a celebrar los arreglos que se conocieron con el nombre de "Convenio Taft".

promesa de apoyo o cooperación por parte de aquél. Los hombres que dirigieron el movimiento separatista pensaron que, una vez llevado a cabo, los Estados Unidos se verían frente a una situación que no podía ser resuelta sino de un solo modo, a saber: tomar las medidas necesarias a fin de evitar que el Istmo se convirtiera en teatro de una larga y desastrosa guerra, perjudicial a los intereses del mundo entero y repulsiva a los sentimientos de los pueblos civilizados. Ellos estaban convencidos de que ésta era la única solución a que debía o podía llegar un Gobierno Americano, cualquiera que fuese su filiación política, y, por consiguiente, aprovecharon la brillante oportunidad que se les ofrecía en el momento en que tanto el gobierno como el pueblo americano deploraban hondamente la desaprobación de la Convención Herrán-Hay por parte de Colombia.

Tan pronto como la separación se efectuó, surgió para el pueblo panameño el problema de conservar su recién adquirida independencia. Aunque evidentemente la nueva República no podía equipararse a Colombia en recursos y poder militar, es indudable que ella habría podido levantar un ejército suficiente para sostener una guerra defensiva durante años y hacer del Istmo un yermo ensangrentado. Los Estados Unidos tenían grandes intereses en Panamá. Habían decidido la construcción de un canal interoceánico a través de su territorio, lo que era ya prácticamente imposible en virtud de la desaprobación por Colombia del Tratado Herrán-Hay, y más imposible aún si estallaba en el Istmo una guerra cualquiera. Así, pues, todas las circunstancias eran propicias para llegar a un convenio que impidiera una guerra sangrienta en el Istmo y que, a un mismo tiempo, asegurara la construcción de la deseada comunicación entre los dos océanos.

Uno de los primeros actos del Gobierno provisional de la República de Panamá fue acreditar un Ministro en Washington. Para ese delicado puesto fue nombrado el señor Felipe Bunau-Varilla, ciudadano francés, a quien el Presidente Roosevelt recibió en audiencia pública el 13 de noviembre y quien sin esperar instrucciones de su Gobierno, firmó el 18 del mismo mes, el Tratado referente al Canal de Panamá, del cual han emanado las serias discrepancias de opinión que ahora existen entre las dos naciones contratantes.

El señor Bunau-Varilla, con poco recomendable celeridad concluyó una Convención cuyas cláusulas principales nadie en Panamá había siquiera soñado que pudieran ser propuestas, desde luego que los panameños abrigaban la confianza de que los Estados Unidos no exigirían de la nueva República, a manera de compensación por la garantía de su independencia, un Tratado mucho más gravoso

que el Herrán-Hay, celebrado con Colombia y aprobado por el Senado Americano.

El representante de Panamá en Washington obró como nadie lo esperaba. No pareció tomar gran empeño en defender los intereses vitales que estaba obligado a proteger, sino que, por el contrario, puso de manifiesto durante todas las negociaciones, una falta de reflexión y una precipitación injustificables. El resultado de esa actuación es un Tratado lleno de contradicciones y de evidentes absurdos, que exige del modo más imperioso la celebración de uno nuevo que elimine las cláusulas contradictorias del primero y que impida al más poderoso de los países contratantes interpretar como mejor le acomode los absurdos de la Convención que el señor Bunau-Varilla firmó porque lo tuvo a bien, pero no porque fuera beneficioso, ni siquiera justo, en el menor grado posible, para el país cuya representación diplomática tenía.

II

Una de las cuestiones más importantes que se suscitan del Tratado es la referente a la soberanía de la Zona del Canal, o sea de la faja de tierra de diez millas de ancho sobre la cual se van a realizar los trabajos. Varias otras diferencias se desprenden de esa cuestión principal, cuyo arreglo sería, por consiguiente, de sumo valor para zanjar éstas.

En la Convención Herrán-Hay, que debe siempre tenerse presente al estudiar el Tratado con Panamá, los Estados Unidos declararon de modo expreso que ellos no deseaban menoscabar la soberanía de ninguno de los países de Centro y Sur América ni adquirir parte alguna de sus territorios, sino que, al contrario, estaban interesados en que conservaran su independencia y en que desarrollaran su poder y su riqueza. Esta declaración, desde luego no tiene el carácter obligatorio de un compromiso legal, cuyo cumplimiento puede exigirse apelando a una Corte de Justicia; pero sin duda alguna ella tiene que ser mirada como una obligación moral, porque cuando la hicieron, los Estados Unidos comprometieron ante el mundo y particularmente ante las naciones de Centro y Sur América, su buena fe y sus sentimientos de lealtad internacional. Ellos no pueden sostener hoy que tal declaración carezca de oportunidad o de fuerza moral por el hecho de que Colombia no ratificó el Tratado Herrán-Hay. Los Estados Unidos hicieron una promesa solemne para todos los tiempos, redactada en forma inequívoca por su Secretario de Estado. Dice así:

"Los derechos y privilegios concedidos a los Estados Unidos por los términos de esta Convención, no afectarán la soberanía de la República de Colombia sobre el territorio dentro de cuyos límites habrán de ejercerse tales derechos y privilegios.

El Gobierno de los Estados Unidos reconoce en un todo esta soberanía y rechaza toda pretensión de menoscabar de una manera cualquiera o de aumentar su territorio a expensas de Colombia, o de cualquiera de las Repúblicas de Centro y Sur América; y desea, por el contrario, robustecer el poder de las Repúblicas de este Continente y promover, desarrollar y conservar su prosperidad e independencia".

Después de declaración tan solemne y tan clara los Estados Unidos no pueden reclamar ningún derecho de soberanía sobre el territorio donde se va a construir el Canal, porque Panamá es una República del Continente Americano, y ese territorio está dentro de sus fronteras.

Por el artículo II del Tratado, la República de Panamá concedió a los Estados Unidos, a perpetuidad, el uso, ocupación y control de una faja de tierra, y de tierras cubiertas por aguas, para la construcción, conservación, servicio, sanidad y protección del canal. Esa concesión es, pues, con un fin determinado: construir un canal entre el océano Atlántico y el Pacífico. Si los Estados Unidos resolvieran ahora no construir dicho Canal, ¿sería el Tratado obligatorio para la República de Panamá? Indudablemente que no.

Verdad es que según el artículo III de la Convención, la República de Panamá concedió a los Estados Unidos todos los derechos, poder y autoridad dentro de la Zona mencionada y descrita en el Artículo II, los cuales poseerían y ejercerían ellos como si fueran los soberanos de ese territorio, con entera exclusión de la República de Panamá en el ejercicio de tales derechos soberanos, poder y autoridad; pero las cláusulas sólo pueden considerarse como una parte del Tratado y, por tanto, deben interpretarse en armonía con el resto de él. La intención de las partes contratantes no fue negociar la soberanía de ninguna porción del territorio panameño. Los Estados Unidos no podían ni siquiera manifestar semejante deseo, supuesto que habían declarado, ante el mundo entero, su propósito de no menoscabar la soberanía de ninguna de las Repúblicas de Centro y Sur América. Esta interpretación del Tratado es la más conveniente a los verdaderos intereses de los Estados Unidos, porque arrogándose éstos el ejercicio de tales derechos de soberanía sobre una parte del Istmo, en contradicción con aquella voluntaria y espontánea declaración, perderían para siempre los sentimientos de amistad y la confianza que casi todas esas Repúblicas abrigan respecto de ellos.

Como prueba evidente de que los países contratantes no pensaron en que uno de ellos cediese la soberanía de la zona, basta leer

los artículos X, XII, XIII y XXIII del Tratado, en los cuales la República de Panamá se obliga:

1. A no imponer contribuciones de ninguna clase, ya sean nacionales, municipales o departamentales sobre el canal, los ferrocarriles y obras auxiliares, remolcadores y demás naves empleadas en el servicio del canal, almacenes, talleres, oficinas, etc., etc.;
2. A permitir la inmigración y libre acceso a las tierras y talleres del canal a todos los empleados y obreros de cualquiera nacionalidad que vengan contratados para trabajar o que busquen empleo en él, con sus respectivas familias;
3. A eximir a dichos inmigrantes a la zona, del servicio militar de la República de Panamá;
4. A permitir a los Estados Unidos la importación a dicha zona, libres de derechos de aduana, impuestos, contribuciones y gravámenes de otra clase, toda clase de naves, dragas, máquinas y cualesquiera artículos necesarios y convenientes para la construcción, conservación, servicio, sanidad y protección del canal;
5. A permitir a los Estados Unidos el empleo de sus fuerzas de policía y de sus fuerzas terrestres y navales para la protección del canal.

Un estudio cuidadoso de los artículos antes mencionados, por los cuales la República de Panamá otorgó a los Estados Unidos ciertas exenciones y privilegios especiales dentro de la Zona del Canal, lleva a la conclusión de que o el Tratado es el documento más contradictorio que jamás haya podido ser ideado por dos Gobiernos, o de que el artículo III debe ser interpretado de manera que no consagre la desaparición absoluta de la soberanía panameña sobre la Zona del Canal.

Mi propósito al llamar la atención del pueblo americano hacia lo que, a mi juicio, no fue la verdadera intención de los ciudadanos de las naciones contratantes, es recalcar la necesidad que existe de un nuevo Tratado en el que todo motivo de divergencia y disensión entre los dos países sea eliminado ahora y para siempre.

En cuanto a las actuales causas de descontento en el Istmo, pueden sintetizarse así:

Partiendo del supuesto de que los Estados Unidos han adquirido soberanía en la Zona del Canal, las autoridades de éste han abierto al comercio del mundo dos puertos que no son otros que los mismos puertos de Panamá y Colón, expresamente excluidos de la Zona por el artículo II del Tratado.

También como consecuencia de esa suposición, las autoridades del Canal han puesto en vigor la Tarifa Dingley, sin excepción alguna en favor de Panamá; han establecido un sistema propio postal y fiscal e implantado toda clase de impuestos que se cobran aun en las inmediaciones mismas de las principales ciudades de la República.

La República de Panamá no puede aceptar como definitiva semejante interpretación del Tratado que convierte en tierra extranjera una parte de su territorio, que la coloca en gran desventaja para sus relaciones con los demás países y que le crea una situación interna difícil y precaria.

El objeto de la Convención es asegurar la construcción, conservación, servicio, sanidad y protección del Canal, y todas las concesiones hechas por la República de Panamá a los Estados Unidos son con esos propósitos. Ni los Estados Unidos ni Panamá pensaron, al tiempo de negociar el Tratado, en que se establecerían en la zona, antes de que el Canal se construyese, nuevos puertos de entrada, en que se promulgarían leyes de aduana cuya aplicación sería perjudicial para la República de Panamá y para sus pequeñas industrias; lejos muy lejos del espíritu de la Convención estuvo la idea de establecer en la Zona del Canal un formal y gravoso sistema tributario.

A juzgar por las actuales apariencias, las grandiosa idea de abrir esta vía comercial para beneficio de todos los pueblos y naciones del orbe, se ensombrece más y más cada día, para ser reemplazada por una concepción profundamente egoísta y por los métodos más arbitrarios. La idea predominante ahora parece ser la de convertir la Zona del Canal en campo de negocios para empresas privadas, desatendiendo por completo los grandes intereses que Panamá sacrificó en la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y de establecer con los Estados Unidos relaciones perpetuamente cordiales.

El Canal de Panamá y la Liga de las Naciones

I

Una ley del Congreso de los Estados Unidos, titulada The Panama Canal Act y aprobada por el Presidente Taft el día 24 de agosto de 1912, estableció en favor de las naves dedicadas al comercio costanero de aquel país la extensión del pago de peajes por el uso del Canal, inspirándose para esta medida en la plataforma o programa que le sirvió al partido demócrata para obtener el triunfo en las elecciones presidenciales del mismo año.

La Gran Bretaña consideró tal medida como contraria a las estipulaciones del Tratado Hay-Pauncefote y presentó insistentes y enérgicas protestas diplomáticas contra ella ante el Gobierno americano hasta que al fin, a solicitud del Presidente Wilson en mensaje memorable leído ante las dos Cámaras, éstas derogaron la exención.

Los debates que se suscitaron en el Congreso y en la prensa de los Estados Unidos con motivo del proyecto de derogación, fueron muy ardientes a la vez que instructivos e interesantes. Fue entonces cuando por primera vez vimos expresada la idea de internacionalizar el Canal de Panamá, es decir, la idea de que los Estados Unidos renunciaran a la administración y explotación de la vía como obra exclusivamente para ser administrada por una Junta Internacional y usada en pie de absoluta igualdad por todos los pueblos.

Vino la gran guerra y durante ella claro es que ningún estadista iba a dedicar sus energías al estudio de un problema cuya solución iba a depender en primer término del resultado de la guerra misma. Si Alemania le imponía su voluntad a Francia e Inglaterra, ningún poder humano podía impedir que el Canal de Panamá fuera alemán. La guerra ha tenido un feliz desenlace, y por eso la cuestión de las grandes vías internacionales puede ser resuelta en términos de justicia y de equidad para todas las naciones.

El tema merece ser estudiado por los panameños con interés y con alteza de miras, y para estimular tal estudio vamos a consignar en artículos sucesivos algunos datos y observaciones interesantes cuyo conocimiento es indispensable para formar un concepto claro de la cuestión.

Recientemente se organizó en el Estado de Massachussets una asociación titulada Liga de las Naciones Libres, de Massachussets, y su primer acto fue enviarle al Presidente Wilson un telegrama de felicitación por haber resuelto concurrir en persona a las Conferencias, de Paz para sostener la justicia internacional y la Liga de las Naciones libres. En esa ocasión, el Profesor Edwin V. Gay, de la Universidad de Harvard expresó su concepto "de que para obtener de una liga de las naciones todos los beneficios deseables, cada nación tenía que hacer grandes sacrificios. Entre los sacrificios que podrían exigírseles a los Estados Unidos —continuó diciendo—, se hallan su renunciación al control del Canal de Panamá, el arreglo de los reclamos de Colombia y la supresión de concesiones especiales al Comercio con las Filipinas".

Ha sido, pues, el Profesor Gay el primero que después de la guerra ha presentado a la discusión un asunto de vital importancia para los panameños. Merece nuestra gratitud.

II

La construcción del Canal a través del Istmo de Panamá, que significa la inversión de un capital de cuatrocientos millones de dólares; el desarrollo inmenso de la navegación por medio de vapores rápidos; el cultivo del banano y de la caña de azúcar, cuyos productos encuentran en los Estados Unidos su mejor mercado; el prospecto comercial y económico de los Estados americanos del Pacífico y de las naciones del extremo oriente; todos esos factores combinados con otros de menor trascendencia han venido a producir en la política internacional de los Estados Unidos un cambio fundamental. Hasta hace pocos años la doctrina Monroe era más que otra cosa, una simple cuestión académica discutida por los profesores universitarios y por los alumnos aspirantes a grados con el mismo espíritu especulativo con que hubieran tratado del imperativo categórico de Kant o del pragmatismo de James. El Canal de Panamá ha cambiado todo eso. Hasta 1914 bien podía decirse con fundamento que los Estados Unidos no tenían política internacional definida en ningún sentido, ni respecto de Europa, ni respecto del Asia ni de América. Hoy puede decirse que ya van teniendo una, originada o derivada de la doctrina Monroe, como consecuencia inevitable de la nueva situación creada en el mar Caribe por la construcción del Canal. La doctrina Monroe tiene hoy dos modalidades, dos fases, dos aspectos: el uno activo, práctico, concreto, respecto de las naciones bañadas por el mar Caribe; el otro meramente pasivo, abstracto, casi indiferente respecto de las naciones más distantes de la América del Sur.

Es de llamar la atención que en esta nueva actitud de los Estados Unidos no ha habido estudiado designio ni solidaridad tradicional con algún pensamiento antiguo de sus estadistas, no. Los hechos mismos con presión formidable han venido modelando compulsiva y fatalmente la conducta de aquel país. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Santo Domingo y con Haití? Estos dos países víctimas de frecuentes y destructoras revoluciones, estaban próximos a verse envueltos en serios conflictos con algunas potencias europeas, por falta de cumplimiento de compromisos solemnes, y los Estados Unidos tenían que resolver este problema urgente: ¿Permitirán que los países acreedores, la Alemania uno de ellos, ocuparan la isla de Santo Domingo con el pretexto de cobrar sus deudas? La respuesta era obvia. Había que impedirlo en nombre de la doctrina Monroe, y el modo de hacerlo era convertirse en mediadores, en intermediarios entre los acreedores y los deudores. Para ello era preciso intervenir en las finanzas desordenadas de aquellas naciones a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigibles. ¿Hubo en todo eso un designio largo tiempo preparado, o premeditado como algunos pretenden? No; porque para contrarrestar o destruir el designio bastaban dos cosas que no dependían sino de los haitianos y de los dominicanos: no tener revoluciones y pagar puntualmente sus deudas.

El proceso de la nueva política americana en el Caribe ha sido pues, el siguiente: el Canal de Panamá es una obra construida en beneficio del comercio universal, y los Estados Unidos constructores, dueños y administradores de ella, tienen interés en que se conserve siempre eficaz, exenta de peligros y libre al acceso y al uso de todos los pueblos. La región del Caribe es la zona del peligro, porque el Canal queda a cuarenta y ocho horas de navegación de los puntos más distantes que rodean a dicho mar: toda situación que dé lugar a la ocupación por una potencia europea de un territorio cualquiera en esa región es un peligro para el libre uso del Canal y una violación de la doctrina Monroe. A los Estados Unidos les conviene y les interesa que tales emergencias peligrosas no ocurran, y por eso, instintivamente, han venido empeñándose en que los países cercanos al Canal vivan en orden; por eso insisten en que se realice eficaz y prontamente en ellos la obra fecunda de su saneamiento moral, físico y económico. En esa necesidad y no en otra se han inspirado la conducta y los esfuerzos de los Estados Unidos durante los últimos años. ¿Va el resultado de la guerra a cambiar en algo esa situación? Nosotros creemos que sí, si llega a formarse la Liga de las Naciones.

III

En el libro de Walter Lippmann, *The stakes of Diplomacy*, que hace pocos días citamos en esta hoja, hay un capítulo titulado Campos de fricción en el cual se analizan con profunda sagacidad las causas de conflictos entre las naciones industriales y comerciales de todos los tiempos. Las causas fundamentales, en concepto del autor, son estas: El reparto de territorios no poblados, o poblados escasamente a los cuales se les da el nombre de colonias, que son deseables por contener materias primeras necesarias para la industria; la creación artificial de esferas de influencias sobre pueblos débiles para explotar éstos comercial o industrialmente de un modo casi exclusivo; y finalmente, la existencia de países atrasados que constituyen una presa fácil de capturar y de devorar.

Lippmann escribió su obra en 1915, cuando aún no era inminente la participación de los Estados Unidos en la guerra, y cuando aún no se agitaba como problema actual la cuestión de formar la Liga de las Naciones; y sin embargo, la solución que él propone para la supresión de las causas de conflicto que hemos enumerado es una anticipación de la idea de la Liga. Estas son sus palabras:

“Lo importante es que existan permanentemente ciertas Comisiones internacionales cuya función sea entenderse en lo relativo a aquellos lugares de la tierra en donde se originan las crisis del mundo. Cuántas deben establecerse no es posible sugerirlo aquí. Debe existir una para Marruecos; una para el Congo; una para los Balkanes ; tal vez una para la Manchuria; puede haber necesidad de una para Constantinopla y otra para ciertos países que le hacen frente al mar Caribe. Tales cuerpos gubernativos internacionales son necesarios en dondequiera que los premios disputables sean grandes, que los territorios carezcan de organizaciones y que la competencia sea activa”.

Nosotros sostenemos que en el mundo moderno no hay premio disputable más grande que el Canal de Panamá. Nuestro istmo es el arquitrabe del comercio universal de los siglos futuros, y por eso constituye indudablemente uno de los campos de fricción más peligrosos de la nueva era que se inicia. Nuestra convicción profunda es que si ahora no se establece la paz definitiva y duradera que todos los pueblos exigen, y si no se crea una Liga de las Naciones que cuente con el poder y la fuerza indispensables para impedir las guerras, nada habremos alcanzado como enseñanza de la terrible hecatombe que la humanidad ha presenciado y sufrido durante cuatro años, y principiarán de nuevo los preparativos, más formidables que nunca, para una nueva guerra. ¿Entre quiénes, se nos

preguntará? Y nosotros contestamos, sin temor a equivocarnos: la guerra futura tendrá por causa determinante el predominio sobre el Istmo de Panamá y el dominio del Canal; y en ella figurarán en campos opuestos los Estados Unidos y la Inglaterra.

IV

Siendo el Canal de Panamá uno de los puntos peligrosos para la paz universal, uno de los campos de fricción entre los intereses y las aspiraciones comerciales e industriales de muchos países poderosos, su situación, sus posibilidades y su uso no pueden dejar de ser considerados en los arreglos que van a tener por objeto establecer una paz mundial sólida y durable.

Si las ideas y los planes de paz del Presidente Wilson merecen, como es obvio que deben merecer, la atención cuidadosa y benévola de las potencias que han venido desempeñando papel predominante en la guerra, la idea de la Liga de las Naciones será aceptada en alguna forma por Francia, Inglaterra e Italia. La existencia de tal institución es de una importancia esencial para todos los países pequeños o débiles, y lo es para Panamá más que para ningún otro país por estar ocupando la posición estratégica que ocupa: una faja angosta de tierra entre dos grandes océanos con un canal ya construido y en servicio dentro de ella.

La aceptación de los planes de paz del Presidente Wilson obligará a los Estados Unidos a adoptar una política de sacrificios y de renunciación en beneficio de la armonía universal. El fracaso de esos planes producirá el resultado de hacer que los Estados Unidos se aparten de toda injerencia o interés en las cuestiones europeas; que limiten su influencia y sus esfuerzos al continente americano; y que se preparen militarmente para defender su influencia y su poder.

Ese dilema es perfectamente conocido en Europa, y por eso las respuestas dadas en distintas ocasiones a los célebres catorce puntos del programa de paz americano han sido satisfactorias, tanto de parte de los gobiernos como de las asociaciones.

Respecto de vías internacionales, el Presidente Wilson dijo en su discurso de 8 de enero:

“Las porciones turcas del actual imperio otomano deben obtener la seguridad de una solución estable, pero las otras nacionalidades que se hallan bajo la dominación turca deben recibir una garantía indudable para la vida humana y para el goce de la oportunidad de desarrollar sin trabas su existencia autónoma. Los Dardanelos deben abrirse permanentemente como una vía libre para las naves y el comercio de todas las naciones bajo las garantías internacionales”.

A ese punto contestó Lloyd George:

"El mantenimiento del Imperio turco en los territorios nativos de la raza turca, con su capital en Constantinopla; la internacionalización y neutralización del paso entre el Mediterráneo y el Mar Negro; el reconocimiento de condiciones nacionales separadas a la Arabia, la Armenia, la Mesopotamia, la Siria y la Palestina".

Y los bolcheviques dirigidos por Trotsky propusieron en las Conferencias de Brestlitovsk como una de las bases de la paz, la siguiente:

"Autonomía para la Armenia turca. Neutralización de todos los estrechos marítimos que comunican con mares interiores, incluyendo los Canales de Suez y Panamá".

Apenas comiencen a discutirse las ideas del programa de Wilson referentes al imperio turco y a los Dardanelos, no faltará quienes observen: "Está bien que hagamos respecto de los Dardanelos lo que dice el Presidente Wilson pero ¿qué hacemos con el Canal de Suez? ¿qué con el Canal de Panamá? ¿qué con los ríos internacionales? ¿qué doctrina internacional nueva debe establecerse respecto de los grandes ríos que son arterias comerciales de indiscutible importancia? Y en tal emergencia ¿qué dira el Presidente Wilson? Será posible que diga: "el Canal de Panamá es nuestro y no permitiremos que se le discuta." No lo creemos posible. Y ¿qué dirá, por último el país que tiene su existencia misma vinculada al Canal, y que con éste está obligado a correr los riesgos y los peligros? Esa es la cuestión.

V

Nuestras observaciones sobre la internacionalización del Canal no deben tomarse en el sentido de que le demos especial preferencia a una administración dirigida por una comisión internacional sobre una administración puramente americana como la actual. Nosotros no hacemos sino ver la situación planteada por la guerra tal como ella es en realidad y tal como en nuestro concepto va a presentarse en las conferencias de paz. Si el Presidente Wilson le pide a las potencias que tienen intereses predominantes en el Mar Negro, y a cualquier nación que suceda a los turcos en el dominio y la soberanía de los Dardanelos, que abran el estrecho al uso libre de todos los pueblos con garantías internacionales, que es como decir bajo una administración internacional, él mismo es quien plantea la cuestión del Canal de Panamá y del Canal de Suez, pues no habría razón plausible para aplicarle a estas dos vías una regla distinta de la aplicable a los Dardanelos. La única razón aparente sería la de tratarse de obras artificiales cuyo costo lo han pagado, en un caso, el Tesoro de los Estados Unidos, y en el otro, una compañía par-

ticular. Pero tal razón no sería alegada nunca por el Presidente Wilson, pues él ha venido tratando las cosas de la guerra y de la paz desde un nivel muy alto, inspirándose en ideales de justicia, no en consideraciones pecuniarias.

Podemos tener, pues, por seguro, que la cuestión de los Dardanelos va a hacer necesario que en las conferencias de paz se resuelva y adopte alguna política internacional clara y permanente respecto de los canales de Panamá y de Suez. ¿Cuáles serán las bases de esa política?

Examinemos el punto.

Hemos anotado ya las ideas emitidas por el Presidente Wilson, por el Primer Ministro inglés Lloyd George, por Trotsky y por el Profesor Gay sobre internacionalización y neutralización de estrechos y canales, y en esta parte de nuestras observaciones es conveniente que expliquemos siquiera sea sucintamente, el significado de esas dos palabras en el estado actual de las relaciones internacionales.

La neutralidad convencional de un territorio es la exclusión absoluta de su uso para fines de guerra, o para operaciones militares. La neutralidad convencional de un estrecho, es precisamente lo contrario, es el uso libre de la vía, en paz y en guerra, por todas las naciones, sin preferencia por ninguna.

Internacionalizar un territorio no puede ser otra cosa que la suspensión temporal o la desaparición absoluta de los derechos y el poder del soberano y la adquisición y el ejercicio de éstos por la sociedad de las naciones o por un grupo de naciones conjuntamente interesadas. Internacionalizar un estrecho, un canal, o un río, es poner cualquiera de esas vías bajo el gobierno y la administración de una agencia internacional que no dependa en especial de ningún Estado y que reciba el apoyo de todos.

La neutralidad de los Canales de Suez y Panamá ha sido motivo de discusiones y negociaciones que han durado muchos años y que han culminado en los siguientes convenios internacionales:

1. El Tratado Clayton-Bulwer, celebrado entre los Estados Unidos de América y la Gran Bretaña el 19 de abril de 1850 y cuyo título completo es este: "Convención entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña para facilitar y proteger la construcción de un Canal para buques entre los océanos Atlántico y Pacífico; y para otros objetos".

2. El tratado conocido con el nombre de Convención del Canal de Suez, firmado en Constantinopla el 29 de octubre de 1888, entre la Gran Bretaña, Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Holanda, Rusia y Turquía.
3. El tratado Hay-Pauncefote, firmado en Washington el 18 de noviembre de 1901 entre los Estados Unidos y Gran Bretaña y cuyo sencillo título dice así: "Tratado entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña para facilitar la construcción de un Canal para buques."
4. El Tratado Hay-Bunau-Varilla que aquí conocemos demasiado bien y cuyas consecuencias estamos sintiendo todos los días.

En esas cuatro convenciones se han consignado cláusulas relativas a la neutralidad de los dos Canales que merecen ser recordadas en el momento actual.

NOTA: Estos artículos fueron publicados como editoriales del "Diario de Panamá" a fines de 1918.

DISCURSO
escrito en 1916 para ser pronunciado
al regreso de una misión
a la República Argentina

Señores:

Después de una larga ausencia del país, durante la cual he residido en medio de un pueblo digno de ser imitado por su capacidad creadora y de ser imitado por sus virtudes y sus condiciones de energía templadas por un profundo sentimiento de justicia; después de haber tenido ocasión de recorrer a la ligera los países más grandes y progresistas de Sur América, vuelvo a Panamá con inmensa alegría a la cual se mezcla, sin embargo, un sentimiento melancólico por la desaparición de seres queridos que han dejado a mi alrededor un vacío que ningún otro puede llenar. Faltan aquí, a mi lado, la figura grave y atrayente de un hombre ilustre que fue para mí como un hermano y la figura casi infantil de otro ser amado que era una promesa para el porvenir.

Pero a pesar de la perenne amargura que deja en el espíritu la eterna desaparición de seres amados, el regreso a la patria siempre es una satisfacción íntima, un goce indefinible. Yo he experimentado ese goce al hallarme entre mis amigos, entre mis conciudadanos sin distinción de clases ni partidos, al recorrer de nuevo los lugares en donde he vivido y luchado por tantos años, al ver los viejos muros de esta histórica ciudad, al contemplar las vetustas torres cantadas por nuestro poeta nacional y al aspirar con fruición el aire puro de nuestros campos.

Y al mismo tiempo que vuelvo a Panamá con alegría, vengo con espíritu sereno, vengo con un espíritu transformado por la meditación y por el estudio comparativo de otros pueblos y de otras costumbres, y por eso aspiro a que mis amigos y mis conciudadanos oigan mis palabras como las de un hombre muy por encima de las luchas del momento, de un connacional que no se encuentra bajo el influjo de ardientes aspiraciones que de ordinario perturban o anulan las nobles tendencias del alma humana, ni bajo el funesto imperio de ambiciones egoístas.

Tal vez mi voz parecerá extraña en estos días de lucha política en que las pasiones no permiten que en el ambiente nacional

penetre un solo rayo de justicia pero yo no vengo aquí atraído por la pueril vanidad de pronunciar discursos en el mismo diapasón de los oradores partidaristas, sino a hablar el lenguaje elevado de la verdad, porque considero como un deber patriótico que en medio del tumulto y de la algarazara que levantan las facciones políticas en pugna, haya alguna voz que pida un instante de serenidad para contemplar el abismo hacia donde van despeñados todos los combatientes y el país mismo, a semejanza de un navío de guerra que después del abordaje se hunde con los vencedores y con los vencidos.

Quienquiera que medite algo sobre la naturaleza y el alcance de nuestros males políticos y sociales tiene que llegar a la conclusión de que nuestro mal más hondo es la casi total ausencia del sentimiento de la nacionalidad en la masa del pueblo panameño. El sentimiento de la nacionalidad es nulo o es débil entre nosotros porque ese sentimiento no nace y se desarrolla sino al calor de dolores y de infortunios comunes, de luchas largas y sangrientas, del sacrificio de preciosas vidas y del martirio de algunos seres predestinados que vienen a ser finalmente los creadores de la nacionalidad, porque ellos han encarnado, condensado y revelado en sus obras, en sus vidas y aun en su martirio, los pensamientos incoherentes y las aspiraciones intuitivas de todo un pueblo. Pero Panamá, país nacido a la vida independiente sin luchas y sin sangre, sin actos de heroísmos y sin el sacrificio de ningún mártir, se encontró súbitamente disponiendo de un bien que no había conquistado con su esfuerzo, y es natural que todavía hoy, trece años después de la independencia, este bien inestimable no sea apreciado en todo su valor. Aun entre los mismos promotores del movimiento de separación había hombres que no creían en la permanencia de lo que estaban fundando y para quienes lo esencial era resolver un problema económico inmediato y personal, más bien que reconocer el espíritu y consagrar la existencia de una nacionalidad. Hombres de elevada posición política en el país me han dicho en alguna ocasión: "aquí tendremos dos o tres Presidentes, después.... no tendremos más". Otros me han manifestado su convicción profunda de que ésto, es decir, la República no puede durar mucho. A hombres de representación en el país y en sus partidos políticos les he oído exclamaciones como esta: "Antes de permitir que Fulano llegue a ser Presidente de Panamá, preferimos que se acabe el país". Y por último, en todos los círculos políticos y populares prevalece la creencia de que ningún ciudadano puede elevarse a la Presidencia aunque para ello cuente con los votos del pueblo panameño, si antes no tiene la simpatía o la venia de los Estados Unidos.

Esas manifestaciones hechas por personas dirigentes y esas creencias generales que todos conocemos son para mí la corroboración de la existencia de los males más graves que pueden afectar a un país: la debilidad del sentimiento de la propia nacionalidad; la falta de fe en la propia existencia soberana; la falta de confianza en la propia capacidad como entidad independiente; y el pesimismo más profundo respecto de los destinos nacionales. Así pues, la facilidad con que el Istmo obtuvo, primero, su independencia de España en 1821, y después su separación de Colombia en 1903, la hemos pagado con la compensación dolorosa de poseer un organismo nacional anémico, sin espíritu, sin fuerza y sin fe. Si hubiéramos surgido a la vida nacional entre ríos de sangre, conducidos por héroes dotados de las capacidades directivas, de la clarividencia de los genios y del magnetismo personal de los verdaderos conductores del pueblo, si hubiéramos sufrido los desastres de agresiones externas que tienen el poder de unir en un pueblo todas las fuerzas, todas las voluntades y todos los sentimientos en un solo haz, no estaríamos hoy en presencia del fenómeno extraño de un país a quien parece serle indiferente el suicidio nacional, sólo porque no tiene conciencia clara de su propia existencia como nación soberana.

Yo me he preguntado a mí mismo muchas veces: ¿es éste realmente, un país, un pueblo, una nacionalidad? ¿Existe aquí un verdadero espíritu nacional digno de ser admirado por los historiadores, cantado por los poetas y transformado en leyenda inspiradora en el hogar y en la escuela? ¿Poseemos como colectividad la decisión enérgica capaz del heroísmo y la resolución suprema capaz del martirio? Y en el recogimiento de mi propia conciencia he contestado que sí. Nuestra alma nacional existe con elementos de grandeza, nobleza y patriotismo. Ella no se ha revelado todavía porque no se ha visto sometida a la prueba de la adversidad; ella lleva en sí la fuerza latente que determina las acciones gloriosas; ella posee la capacidad requerida para transformar nuestra humilde nacionalidad de hoy en un Estado vigoroso, próspero, civilizado y feliz. La debilidad del sentimiento de la nacionalidad originada de nuestras condiciones de vida y del modo de haber obtenido la independencia, ha sido y es indudablemente una grave condición de nuestra vida colectiva pero es un mal que puede llamarse funcional y no una lesión orgánica irremediable. Ese mal, sin embargo, exige pronto y eficaz remedio. ¿Cuál es el remedio?

El remedio es despertar, desarrollar, engrandecer y ennoblecer el espíritu nacional. Hacer que el sentimiento de la patria esté por sobre todo otro sentimiento y por sobre toda otra aspiración o

ambición individual o colectiva; convertir el sentimiento pasivo de la nacionalidad en pasión nacional activa, creadora e inspiradora que llegue hasta las regiones del impulso heroico; convertir en religiosa reverencia el respeto al nombre, a la bandera y al escudo de la patria; anatematizar y proscribir todo cuanto tienda a empañar el nombre del país o a empequeñecer su carácter o a menoscabar su independencia o destruir su soberanía. Esa es, esa debe ser, señores, la labor constante y perseverante de nuestros estudiantes, de nuestros publicistas, de nuestros poetas, de nuestra tribuna y de nuestra prensa, de nuestros educadores y maestros, de nuestros hogares y de nuestro clero. Debemos encontrar en una educación pública inspirada en el ideal de la nacionalidad el factor que reemplace el heroísmo de las batallas libertadoras, y fundar así con esa argamasa moral indestructible, más duradera que el mármol, el granito y el bronce, un estado libre y grande que viva perennemente en la historia humana.

Estas últimas reflexiones me traen a considerar problemas nacionales más concretos y más enlazados con la situación política actual y con la labor de los partidos y agrupaciones en que el país se halla dividido.

La independencia de Panamá y la fundación de esta República sin lucha ni oposición alguna produjeron en el pueblo panameño una lamentable ilusión de perspectiva. Creíamos todos que el proceso natural e histórico de la creación en un Estado podía precipitarse como a la voz de un conjuro, y que bastaba que los partidos políticos tradicionalmente enemigos convinieran en decir "sea el Estado", para que el Estado fuera. Nos forjamos la ilusión de que habíamos construido ya sobre base incommovible un edificio que sólo existía en nuestras imaginaciones deslumbradas por el seductor y hermoso horizonte abierto repentinamente ante nuestros ojos, y olvidamos las enseñanzas de la historia que es guía y maestra de todas las edades y de todos los pueblos. Un Estado necesita, para afirmar su individualidad en el primer período de su existencia, de una voluntad nacional individa e indivisible, de un esfuerzo común persistente e inflexible que funda en un solo molde las voluntades dispersas y las aspiraciones indecisas; y no es sino después de ese primer proceso fundamental cuando comienzan a delinearse los diversos modos como los hombres o las agrupaciones ven las cuestiones internas y a surgir las diferencias de interpretación de los problemas nacionales que dan lugar a la formación de partidos políticos caracterizados. La aparición de partidos políticos en un país, es pues, una etapa secundaria, es fenómeno meramente funcional de un organismo que ya posee los atributos del ser. Nosotros hemos

invertido el orden natural que se observa en todo lo creado; comenzamos por la etapa secundaria antes de haber recorrido la etapa fundamental que debió ser la verdaderamente constructiva del país, la reveladora del espíritu nacional, la creadora de una personalidad con caracteres, fines e ideales propios: y como consecuencia de ese error nos hallamos desorientados, desilusionados y expuestos a que en ese estado de nuestra mente colectiva nos arrastre una ola destructora.

No nos queda como recurso salvador sino desandar lo que hemos andado por caminos extraviados. Debemos formar, con los elementos y fuerzas directivas que el país posee, una agrupación poderosa que complete la labor fundamental de darle individualidad a la nación panameña, de marcar las líneas o las vías por las cuales debe ella marchar para desarrollarse y convertirse en pueblo próspero y feliz; de descubrir y vigorizar los no revelados resortes de nuestra alma nacional, del mismo modo que el artista revela armonías inefables en su instrumento de música, insonoro y muerto en inexpertas manos; y por último, hacer que el país tenga designios, aspiraciones, e ideales hacia los cuales se dirija como nación, como una totalidad que marcha hacia arriba en una dirección visible, en desempeño de una misión histórica.

La situación política del momento no me permite aspirar a que esta idea sea recibida con entusiasmo, ni siquiera con aprobación. Empeñado como está el país en una ardiente campaña presidencial, las agrupaciones políticas en acción no podrán recuperar su serenidad sino después de decidida la lucha en los comicios, y si he lanzado mi idea en esta ocasión ha sido únicamente porque habiendo demostrado la existencia de un grave mal de nuestro organismo nacional, era preciso que al mismo tiempo indicara cuál es en mi concepto el remedio salvador. Sin embargo, no es extraño a mi propósito el tratar siquiera sucintamente la condición en que se encuentran nuestros partidos militantes, desde el punto de vista de los principios en que todo partido debe inspirarse, condición que se origina en el mal ya observado en esta disertación, esto es, en que los llamados partidos políticos panameños son organizaciones prematuras, sin ideales definidos, sin propósitos impersonales visibles y sin la cohesión espiritual que caracteriza a los partidos verdaderos; son organizaciones transitorias fundadas sobre el *substratum* de partidos colombianos inadaptados aún e inadaptables al nuevo ambiente nacional; son los restos del caudillaje creado por las antiguas luchas fratricidas que hoy bajan al ocaso para no tener otras auras. Hoy existen en Panamá dos agrupaciones que pretenden tener la personería y el prestigio del partido liberal y dos agrupaciones

que pretenden representar al partido conservador. ¿Son esas diversas agrupaciones los exponentes legítimos de ideas liberales o de ideas conservadoras panameñas? ¿Están de algún modo demarcados los linderos entre esas agrupaciones, para poder decir que un núcleo cualquiera se halla dentro de ellos o fuera de ellos? ¿No es muy significativo el hecho notorio de que desde 1903 para acá grupos liberales y de conservadores se han declarado inesperadamente enemigos de los demás miembros de sus mismas supuestas colectividades, con saña aún mayor de la que antes de la separación del Istmo existía entre liberales y conservadores? ¿No están revelando esos fenómenos repetidos procesos de desintegración y de disolución de los partidos tradicionales del país? El proceso es visible aún para la inteligencia menos perspicaz. Grupos que se han separado sin causa plausible sino es la de un mezquino interés, en cualquier momento se unen de nuevo a otros con los cuales han estado en abierta pugna, y mañana se disgregan de éstos y se tornan aliados activos de sus enemigos de ayer, todo con una presteza y una agilidad que me hace recordar ciertas danzas modernas en las cuales hombres y mujeres forman una cadena cerrada en forma de círculo y cada bailarín dado de manos con sus vecinos va cambiando de posición por entre los demás al son de la música, hasta que el Jefe de la danza da una palmada; la pareja que le queda a uno delante es la que le corresponde, y la danza continúa entonces entre parejas sueltas hasta que otra palmada da la orden de restablecer la cadena y repetir la operación. Esa ha venido siendo la actitud de nuestros partidos políticos, de tal suerte que ya ningún *leader* tiene seguridad de que le sigan todos o siquiera la mayoría de sus supuestos adherentes.

La descomposición y disolución de esas agrupaciones y partidos, descomposición que tal vez obedece a un movimiento nacional instintivo hacia formas más concordes con nuestra vida social sería una realización deseable y hasta digna de ser acelerada hoy mismo si no fuera porque en el momento actual prevalecen la más extraña confusión de ideas y la más peligrosa confusión de responsabilidades. Voy a tratar este punto con algún detenimiento para concluir mi ya largo discurso.

Lo que tenemos hoy en Panamá no es una lucha, no es una batalla política, es una exasperación política, es un delirio, un frenesí que está revelando vicios constitucionales, vicios de educación pública, y aun de educación privada; pero el mal más grave que esa situación causa es el desconocimiento de las responsabilidades que todo partido que pretende representar y defender intereses e idea-

les nacionales, tiene respecto de la integridad sagrada de cuanto contribuye a formar el concepto de patria: territorio, instituciones, historia, aspiraciones, ideales. Ese desconocimiento de las responsabilidades que los partidos tienen para con el país en donde actúan y a cuya sombra viven, los ha llevado en el fragor de la pelea a solicitar que un poder extraño a nuestra vida nacional, a nuestras tradiciones y a nuestra historia, se mezcle en nuestros asuntos domésticos para contribuir en alguna forma a decidirlos. Yo también, como miembro de una colectividad pública numerosa y sincera, he cometido esa falta, he olvidado esa responsabilidad y el recuerdo de ella en los días serenos en que el hombre repasa en silencio los actos ejecutados bajo el influjo de pasiones ciegas, ha sido uno de los motivos que me han impelido a estudiar con imparcialidad las causas de nuestras hondas perturbaciones nacionales; y hoy, sinceramente convencido de que ningún pueblo, ninguna nación, ningún Estado puede perdurar en la historia con caracteres propios si no cultiva con esmero un exquisito, sensible y orgulloso espíritu nacional que no tolere ni mucho menos pida injerencias extrañas en su vida doméstica, declaro de la manera más enfática y solemne que me opondré siempre con todo el vigor de mi alma y con todas las fuerzas de mi carácter, en todo tiempo y en toda circunstancia, a que el pueblo panameño sufra el acto de humillación y de abyección de ver sus altas autoridades supeditadas por la presencia de un agente extraño para resolver una campaña electoral. Yo apelo de la manera más leal y patriótica al buen sentido y al honor de mis conciudadanos; apelo al buen sentido nacional para que resolvamos nuestras diferencias en paz, con el auxilio de nuestras leyes y de nuestros propios sentimientos de equidad, porque no hay hombre ni partido que en la balanza de la justicia eterna valga o pese lo que valen y pesan el nombre, el honor y la existencia de la nación misma. Reflexionemos que si nuestro país existe, siquiera como una entidad modesta, es un crimen tratar de destruirlo; que si está en nuestras manos el poder conservar nuestra independencia, el tratar de mermarla no tiene justificación; que si gozamos de una soberanía garantizada por la nación más noble del mundo actual, no debemos empañar o menoscabar nosotros mismos esa soberanía que nadie quiere arrebatarnos.

Esas son las consideraciones que he deseado presentarle al país como resultado de mis reflexiones durante los años que he vivido en el exterior. Ojalá ellas sean apreciadas teniendo en cuenta la sinceridad en que se inspiran, analizadas con espíritu sereno por las gentes patrióticas y seguidas en lo futuro si algo valen para el país y para su historia.

Lo que antecede fue escrito en 1916 como resultado de mis reflexiones sobre la marcha política del país desde 1903. Tuve la intención de aprovechar ese trabajo en una Conferencia que pensaba dar en el Instituto Nacional; pero habiendo coincidido mi llegada a Panamá, de regreso de mi misión a la República Argentina, con el doloroso suceso del desarme de la Policía Nacional llevada a cabo por el Gobierno de los Estados Unidos, comprendí que la exposición imparcial y serena de aquellas ideas carecía de oportunidad.

Hoy puede afirmarse sin vacilaciones que el curso de la política y de todos los asuntos públicos panameños ha venido empeorando día por día y haciendo más imperativa una renovación esencial y profunda de nuestra vida nacional.

Los males apenas esbozados por mí en 1916 se presentan ahora con caracteres más visibles y más graves, y es ya tiempo de que los hombres juiciosos y verdaderamente patriotas del país reúnan sus voluntades y sus esfuerzos para ver si es posible llevar a cabo un cambio de rumbo que corresponda a los propósitos elevados de los fundadores de esta República.

La enumeración y la descripción completa de esos males requerirían un trabajo especial muy extenso porque sería preciso analizar los orígenes remotos y próximos de nuestras pervertidas costumbres políticas y de nuestros no menos perniciosos hábitos sociales, y por eso apenas es posible hacer por el momento una enumeración incompleta y una breve descripción de ellos.

En primer lugar aparece como mal fundamental el falso concepto que aquí se tiene de lo que es la democracia. Se ha partido del supuesto de que la democracia debe ser el rebajamiento de todos los valores sociales al nivel de lo que muy poco o nada vale, y hemos estado poniendo en práctica ese sistema que nada crea, que conduce a los hombres al predominio de la animalidad primitiva simple y desnuda, y que destruye toda tendencia a la elevación espiritual y todo estímulo para realizar esa elevación. Hemos querido establecer que los tallos que dan granos o frutos valen lo mismo que la maleza que lo circunda.

En segundo lugar y como consecuencia del anterior, se advierte un grave mal nacido del falso concepto de lo que es la política. Hemos cultivado el principio de que toda actividad social debe girar alrededor de los empleos públicos y hemos estado creando un mundo artificial y absurdo en el cual las actividades políticas

son nuestro oficio, nuestra industria, nuestra aspiración y nuestra meta, cuando en realidad esas actividades deben ocupar un campo que ocupan en una sociedad civilizada otras actividades independientes, muchas de ellas en pugna, y muchas concordantes y armónicas entre sí. ¿Qué viene a ser la política, por ejemplo en un país como los Estados Unidos, comparada con las actividades industriales y económicas, las intelectuales y artísticas, las religiosas, filantrópicas y cooperativas? Aquí hemos llegado hasta el extremo de convertir la política en la industria más general y favorecida de la cual los afiliados en diversos campos esperan recibir provechos personales como si se tratara de un negocio lucrativo. La política no debe ser eso: debe ser un servicio desinteresado y patriótico en el cual se culmine después de probadas la competencia y la honorabilidad para servir; y mientras no cambiemos de prácticas en este respecto, el país carecerá de gobiernos eficientes e íntegros.

Harold J. Laski, sabio Profesor de Política de la Universidad de Londres, en una crítica reciente de las instituciones y prácticas políticas norteamericanas compara un Presidente de los Estados Unidos con un Primer Ministro de Inglaterra. El primero, dice, es en muchas ocasiones el producto del acaso o de combinaciones en las cuales muy raras veces se prefiere a verdaderos estadistas; en Inglaterra, quien llega a la culminante posición de Primer Ministro tiene que ser un hombre eminente, con muchos años de experiencia en la vida pública, y que haya dado irrefutables pruebas de capacidad para dirigir y para construir, haciéndose por eso merecedor del respeto y de la admiración sinceras de su partido. Gladstone, continúa Laski, tuvo treinta y cinco años de servicios en el Parlamento y en el Ministerio antes de ser Primer Ministro la primera vez; Disraeli, treinta años.

Es claro que en el mundo han existido hombres que en pocos años se han elevado a posiciones tan altas que bien pueden llamarse **únicas**, pero esos no han sido hombres del calibre de la generalidad de las gentes; ellos han sido verdaderos genios, excepciones raras como un Napoleón o un Newton. El mundo político no puede resignarse a esperar genios que lo dirijan, y lo prudente es confiarle esa dirección a quienes posean sabiduría, experiencia e integridad.

Y como de esos **falsos** conceptos de la democracia y de la política surgen las ambiciones injustificadas y prematuras, como por ensalmo nacen también agrupaciones nuevas disgregadas de las antiguas, cada día más pequeñas e insignificantes, creadas por hombres mediocres sin otro propósito que el mezquino de su propia conveniencia. Así tenemos ya pequeños grupos que se han bautizado a sí mismos con los pomposos nombres de partidos **laboristas** y

partidos agrarios o agrícolas con tendencias a crear luchas de clases sociales con las rivalidades y animosidades que entre esas clases existen en los viejos países industriales. Un partido laborista en Panamá, cuando el país carece casi en absoluto de obreros, hasta el punto de que todas las empresas que realmente están creando industrias productivas se ven obligadas a importar trabajadores extranjeros, es algo verdaderamente absurdo, lo mismo que un partido agrícola en donde nadie quiere ser agricultor. Y lo más risible es la importación de la fraseología superficial que en otros pueblos se explica y se justifica, pero que aquí suena hueca y estrambótica: **proletariado, capitalismo, burguesía y obrerismo**, con los adornos y arandelas usuales. Lo único que nos falta es una dependencia de la **Tercera Internacional**.

La confusión aumenta cuando al lado de esos grupos se organizan otros con caracteres neta y exclusivamente personalistas que ya no pretenden siquiera inspirarse en doctrinas o en ideas más o menos nobles, sino que adoptan como norma de conducta el servirle a un hombre, el obedecer a un hombre, el endiosar a un hombre sin reflexión, sin convicción, sin resistencia y con una casi total ausencia de escrúpulos, hasta que llega el momento de abandonarle para hacer lo mismo con otro. Y así hemos tenido esa larga lista de agrupaciones artificiales de las cuales no quedan ya sino los nombres: a los **constitucionalistas** de 1904, inventados para cohonestar la desertión de ciertos liberales, y cuyo único objeto era servirle al doctor Amador Guerrero, siguieron y siguen en melancólica procesión digna de estudio, guardistas y obaldistas de 1906, aristas y obaldistas de 1908 con los disfraces de Unión Patriótica y Coalición Republicana, diistas y porristas de 1912; valdesistas y chiaristas de 1916; porristas y urriolistas de 1920: otra cosa que se llamó en 1923 Liga Nacional Porrista, seguida después de otros y otros **istas** cuyo número aumenta a medida que las aguas políticas van bajando de nivel; en vez de faros que deben servirle de guía a un partido digno y a un pueblo realmente libre son arrecifes que se descubren cuando la marea ha llegado a su extremo descenso y pone de relieve las lamas y las rocas insignificantes.

No es necesario continuar insistiendo en que nuestras prácticas democráticas se alejan más cada día de los ideales democráticos que le sirvieron de inspiración y de justificación a los promotores de la independencia panameña. Si las tendencias actuales llevadas hasta su límite extremo nos condujeron sin peligro al predominio de una democracia pura en una sociedad perfectamente educada y capaz de resolver por sí misma en la plaza pública los más graves problemas del país, aquí habríamos alcanzado el ideal en materia

de instituciones políticas; pero tal aspiración es de realización imposible mientras no se alcance algo más fundamental todavía y es una completa transformación de los **motivos humanos**.

La **democracia pura** se ha hecho irrealizable en el mundo por el crecimiento de la población, y más que todo, por la complejidad de los factores nuevos que entran cada día en la estructura de la sociedad humana. No queda más recurso que continuar perfeccionando el sistema de la **democracia representativa** y darle prominencia y autoridad a los directores experimentados y altruistas. Eso naturalmente excluye de la dirección a la mediocridad advenediza y bullanguera que nada puede crear ni conservar.

Discurso En La Toma de Posesión del Presidente Valdés

Excelentísimo señor:

Por segunda vez me toca en suerte como Presidente de la Asamblea Nacional, recibir el juramento solemne que el Primer Magistrado de la República debe prestar para entrar a ejercer sus elevadas funciones, y en ésta, lo mismo que en ocasión semejante hace ocho años, experimento honda satisfacción al ver que el trascendental suceso de la transmisión del poder público se realiza otra vez entre nosotros en medio del orden más completo, con sujeción estricta a la Constitución y a las leyes del país. Hoy, sin embargo mi satisfacción es más grande porque me ha correspondido el honor de investir del mando supremo de la Nación a un ciudadano con quien me han ligado durante la mitad de mi vida estrechos vínculos de amistad y de leal compañerismo que han venido fortaleciéndose más y más con el transcurso de los años.

No es esta la oportunidad de hacer encomio personal alguno del ciudadano a quien la Nación panameña ha llamado a ocupar el más alto puesto del país. No hay ni puede haber encomio superior al que va envuelto en el resultado final de la campaña política más larga y más ardiente que se ha visto entre nosotros, pues ese resultado es el reconocimiento implícito de las virtudes públicas y privadas que adornan al elegido, es una innegable demostración de confianza en sus capacidades de estadista y es una revelación de las esperanzas patrióticas que la Nación finca en el escogido para regir sus destinos.

Prestada por vos, señor, como acabáis de hacerlo, la promesa constitucional que echa sobre vuestros hombros las graves responsabilidades del gobierno del país, parece que este acto podría cerrarse en silencioso recogimiento, porque después de esa promesa, la nación sabe que vos sereis baluarte y escudo que defienda la integridad de sus instituciones, de su honra, de sus derechos y de sus intereses; pero el carácter de nuestra organización constitucional y más que todo nuestras costumbres políticas hacen del Presidente de la República, no el mero ejecutor de la Constitución y de las leyes, sino el promotor más eficaz del bienestar público, el agente más activo del desarrollo del país, el intérprete más autorizado de las aspira-

ciones y de las tendencias nacionales, y por eso este acto no puede cerrarse en silencio.

No es mi intención, señor Presidente, anticiparme a hacer una exposición de los propósitos que deben animaros durante el curso de vuestra administración. Vos expondréis esos propósitos concretos con más autoridad que yo y con conocimiento pleno de los obstáculos que encontrareis para realizar mucho en pocos años; pero hay un orden de ideas más elevado y trascendental, que requiere la atención de los gobernantes, de los estadistas y de la nación entera, a efecto de crearse o formar una orientación determinada para nuestra vida independiente y de elevarnos a nuestros propios ojos como pueblo digno y soberano; y son estas ideas las que trataré de exponer brevemente. Nuestro país necesita ante todo y sobre todo el cultivo del sentimiento de la nacionalidad. Es preciso que formemos el designio colectivo inalterable de ver al país como una entidad moral superior a toda idea o concepto partidarista y muy por encima de las luchas de los hombres y de las agrupaciones políticas; es necesario educarnos y enseñarnos a refrenar nuestras pasiones hasta acostumbarnos a resolver nuestros problemas más internos bajo la influencia, dirección y el fallo de una opinión justa, serena e inexorable.

El sentimiento de la nacionalidad es el supremo creador de ideales, el generador de los grandes heroísmos, la fuente de todos los triunfos y glorias nacionales y el resorte moral que impele al hombre a los más grandes sacrificios. Un país sin ideales no es una nación, no es un Estado, es un jirón geográfico sin personalidad moral, cuyo destino es desaparecer y extinguirse para siempre. Cultivemos el sentimiento de la nacionalidad para que de él nazcan los ideales propios que le sirvan de estrella polar, no a un gobernante, sino a todos los gobernantes nacionales, cualesquiera que sean su origen y sus opiniones políticas, y para que la nación misma se vea impelida hacia arriba por una fuerza moral irresistible e inflexible.

Cuando el sentimiento de la nacionalidad se ha arraigado en un país; cuando ese país marcha hacia un ideal visible, comprendido claramente por todos sus elementos sociales, el progreso viene como un hecho necesario. Desarróllanse a su influjo la riqueza y la cultura y estos factores poderosos del adelanto nacional obran como fuerzas aceleratrices de nuevos progresos y de más fecundas conquistas en todos los campos de la actividad humana. Esa es una labor ardua en un país como el nuestro en donde impera el pesimismo más desconsolador sobre nuestros destinos nacionales. Tal parece que nadie entre nosotros mismos creyera todavía en la existencia real del país como entidad independiente, y es pre-

cisamente ese pesimismo lo que debilita nuestro carácter y nos arrastra a perder lo que poseemos. Cambiemos, pues, de rumbo; adoptemos como política nacional invariable y perpetua, la afirmación y la consagración de nuestra nacionalidad; marchemos como pueblo unido, compacto y esforzado hacia ese ideal inspirador y fecundo, para que algún día nuestros hijos se sientan orgullosos de ser ciudadanos de un país modesto, pero noble, digno y libre.

En cuanto a vuestras labores inmediatas, señor Presidente, ninguna es más grave ni de mayor importancia que la reorganización de las finanzas nacionales. En esa reorganización va envuelto el análisis severo de nuestros gastos y de nuestro sistema tributario y el examen científico de las fuentes de nuestra riqueza pública para formar un plan concertado que le permita al país la mayor expansión comercial e industrial sin trabas ni restricciones artificiales. Panamá es el único punto de la tierra en donde todas las vías comerciales se cortan; el punto donde se ponen en contacto todas las naciones marítimas del mundo; el lugar en que todas las razas se encuentran y se confunden; y esa situación excepcional crea condiciones especiales que deben ser objeto de detenido estudio. Desde luego, es inevitable que nos hagamos esta pregunta: ¿constituye la situación excepcional de Panamá una fuente de riqueza pública y de consiguiente prosperidad nacional? La respuesta tiene que ser afirmativa, y de ella nacen otras cuestiones sumamente importantes que el país debe resolver previamente y con sabiduría para poder formar planes económicos e industriales. ¿Puede Panamá ser algún día un país manufacturero? Indudablemente que no, porque carece de los elementos necesarios para serlo: carbón y hierro. ¿Cuáles pueden ser, entonces, las industrias llamadas a prosperar entre nosotros? Las que la naturaleza está indicando: el comercio, la agricultura, la ganadería y la navegación. Nuestro país está destinado a ser un pueblo de comerciantes, de agricultores, de ganaderos y de navegantes y nuestros esfuerzos deben dirigirse al fomento eficaz, constante y sabio de esas industrias.

Nuestra situación fiscal debe ser objeto de cuidadoso estudio por parte de la administración que hoy se inaugura; pero no debe ser motivo de alarma para el país. Los problemas fiscales son problemas graves cuando se presentan en países pobres y sin prospecto industrial halagador, pero en un país de potencialidades económicas evidentes como Panamá ellos tienen fácil remedio, en la implantación de una estricta vigilancia en la colección de las rentas públicas y en la adopción de economías en los ramos del servicio administrativo que lo permitan.

Por lo demás, señor Presidente, el programa de vuestra administración no puede menos que ser un programa constructivo que corresponda a las necesidades reales del país y que se cumpla aprovechando las lecciones de la experiencia para no incurrir en pasados errores; un programa de conciliación y de concordia entre las agrupaciones políticas en que el país se halla dividido con motivo de la campaña electoral que acaba de terminar; un programa de reformas políticas y administrativas que conduzca a la elevación del nivel moral de nuestros hombres y de nuestras colectividades para que el país se haga digno de ser amado y exaltado por sus hijos y respetado por los extraños.

La presencia en este acto del ciudadano que os ha precedido en el ejercicio del más alto cargo del país, y que ha venido en cumplimiento de un deber que la ley le impone a depositar en mis manos para ponerla en las vuestras, la banda tricolor símbolo de la autoridad que la Nación os confiere, me proporciona la oportunidad de ofrecerle a ese ciudadano que entrega sin dolor y sin amargura y antes bien con alegría, la autoridad que ha tenido en sus manos por cuatro años, el testimonio de mi afecto y de mi respeto personales y de rendirle en este acto público y solemne a nombre del país, el tributo sincero de la admiración y del agradecimiento nacionales.

Señor Presidente:

Hago votos sinceros por el éxito de vuestra administración. Os conozco bien y tengo la convicción profunda de que al descender del alto puesto que desde hoy ocupáis en el país, llevareís a vuestro hogar el aplauso y el aprecio profundo de la Nación Panameña.

Memoria de Hacienda y Tesoro presentada al Organo Legislativo en sus sesiones ordinarias del año 1922

Honorables Diputados:

En virtud de renuncia irrevocable presentada por mi distinguido antecesor señor General don Santiago de la Guardia, el señor Presidente de la República me confirió el alto honor de nombrarme Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Tesoro, puesto que entré a desempeñar el día 17 de Febrero de 1921.

Cuatro días después de mi nombramiento surgió el conflicto internacional provocado por el Gobierno de Costa Rica, y estando ausente del país el Secretario de Gobierno y Justicia, señor doctor Ricardo J. Alfaro, el señor Presidente de la República dispuso que me hiciera cargo de aquel Departamento mientras duraba la ausencia del Secretario titular. Tan repentino aumento de atenciones y de graves responsabilidades tenía que ocasionar alguna demora en mi labor preliminar de información y de estudio de las cuestiones pendientes y de los problemas relativos a nuestra hacienda pública, labor que debía preceder a todo plan juicioso para el futuro; y así no fue sino en el mes de Mayo cuando pude dedicar todo mi tiempo a los asuntos del Departamento de Hacienda, por haber regresado el doctor Alfaro de su misión en el exterior.

En Mayo estaba próximo a expirar el Presupuesto de Gastos votado en 1919 para regir hasta el 30 de Junio de 1921, y era de lo más urgente preparar el que debía entrar en vigor el 1o de Julio del mismo año.

El Departamento de Hacienda se encontró en presencia de una situación no prevista explícitamente en la Ley fundamental del país. La Asamblea Nacional no había dictado ley de Presupuestos en sus sesiones ordinarias de 1920; pero yendo hacia atrás resultaba también que no había expedido dicha ley en sus sesiones de 1918-1919 para el bienio anterior y que en consecuencia, el único Presupuesto de Gastos debidamente discutido y aprobado por el Poder Legislativo era el de 1o de Enero de 1917 a 30 de Junio de 1919.

La Constitución Nacional prevé el caso de que el Poder Legislativo omita dictar ley de Presupuesto para un bienio y establece que entonces continúe rigiendo el aprobado para el bienio anterior, pero no previó que pasaran dos períodos económicos consecutivos sin que la Asamblea Nacional hubiera discutido y aprobado esa ley tan importante que significa el ejercicio de la prerrogativa más esencial del cuerpo legislativo en una democracia moderna; y por eso el Poder Ejecutivo se encontraba al finalizar el período económico el 30 de Junio, en la necesidad de adoptar algún Presupuesto para el bienio de 1o de Julio de 1921 a 30 de Junio de 1923.

Ahora bien, el Presupuesto de 1919 a 1921, no podía ser el mismo de 1917 a 1919 porque los cambios radicales decretados por leyes de 1918 y 1919 en cuanto a la organización y al personal de los servicios públicos, no podían ajustarse en forma alguna al Presupuesto de 1917-1919, y especialmente era imposible tal ajuste desde que se estableció la Agencia Fiscal y se suprimieron organizaciones y servicios antiguos como los de la Tesorería General, las Administraciones de Hacienda, el Tribunal de Cuentas, el Visitador Fiscal y otras oficinas y empleos del ramo de Hacienda.

Por otra parte, la Asamblea Nacional por medio de leyes había creado actividades nuevas no previstas en los Presupuestos pasados. El ramo de la Renta de Licores, por ejemplo, exigía imperativamente una reorganización completa que correspondiera, en su personal y en sus métodos, al cambio fundamental introducido en el sistema de cobrar los gravámenes. El Poder Ejecutivo se hallaba en el dilema de dejar que esa renta desapareciera por completo por no haberse previsto en el Presupuesto de 1917-1919 la necesidad de pagar un personal numeroso que la administrara y la vigilara, o alterar el Presupuesto para poder darle cumplimiento a la ley.

Ocurría lo mismo con la reorganización del Cuerpo de Policía y con la creación de la Junta Central de Caminos que iba a tener exclusivamente a su cargo la dirección de las obras de caminos proyectadas. No habiendo, pues, presupuestos decretados por la Asamblea, y habiendo, pues, por otra parte, una manifestación explícita y clara de la voluntad del Poder Legislativo en todos los casos enumerados, era ineludible para el Poder Ejecutivo apartarse del Presupuesto del bienio anterior en la formación del nuevo, hacer las supresiones consiguientes a los cambios decretados y agregar las partidas indispensables para el personal y el material de las organizaciones y servicios recién-establecidos.

En esas razones se fundó el Decreto número 66 de 1921, que estará vigente hasta el 30 de junio de 1923.

Las rentas para el bienio en curso fueron calculadas, como era natural y como lo dispone el artículo 704 del Código Fiscal, tomando como base el producto bruto de las mismas en el bienio anterior, obteniéndose así la cifra de B/.11.176.803,48 que aparece en el Decreto. También aparece allí con el título de **Recursos del Tesoro** la suma de B/.3.496.194,72, acumulada en los años anteriores como exceso de las rentas sobre los gastos y destinada a la construcción de caminos, con excepción de B/.300.000,00 separados para pagar gastos de la vigencia anterior. Por eso en el Decreto figura como total de rentas y recursos la suma de B/.14.672.998,20.

Los gastos normales o corrientes exigidos por la administración pública fueron calculados en B/.9.732.448,00. Entre las sumas aprobadas figuran, además, tres partidas considerables que ascienden a un total de B/.4.940.550,20 y cuyo detalle es el siguiente:

Para los gastos administrativos y técnicos	
de la Junta Central de Caminos	B/. 238.000,00
Para los gastos de reparación y de administración	
del Ferrocarril de Chiriquí bajo la dirección de	
la Junta Central de Caminos	B/. 230.000,00
Para la construcción de nuevos caminos y puentes	B/. 4.472.550,20
Total	B/. 4.940.550,20

En ese total quedaban incluidos los fondos acumulados para caminos y una partida adicional de B/.1.600.000,00 que se agregaba en la esperanza de que las rentas nacionales no sufrieran disminución o tuvieran algún aumento.

Aunque ya a mediados de 1921 era evidente el descenso en las rentas por causas que más adelante se analizarán, la ley le imponía al Poder Ejecutivo el deber de basar los cálculos de éstas en el producto bruto del bienio anterior y eso explica la diferencia en los resultados del primer año del bienio. Desde el 1o de Julio de 1921 hasta el 30 de Junio del año en curso.

El producto de las rentas fue de	B/. 5.103.196,42
y como el producto calculado fue de	B/. 5.588.401,74
la deficiencia respecto de la suma calculada ha	
sido	B/. 485.205,32

En estas cifras no entra el producto de la contribución establecida para la Lucha Anti-Tuberculosa, ni tampoco una parte de los provechos de la Lotería Nacional, usados especialmente en la construcción del Nuevo Hospital Santo Tomás.

Estas cifras son:

Lucha Anti-Tuberculosa	B/. 154.147,85
Lotería Nacional de Beneficencia	B/. 432.000.00
Total	B/. 586.147,85

Los gastos públicos de administración que he denominado corrientes o normales, para distinguirlos de las obras de caminos y de puentes emprendidas con fondos especiales, alcanzaron en el primer año del bienio aB/.4.660.868,78

A esta suma deben agregarse gastos de la vigencia anterior, que han ascendido a doscientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y nueve balboas con cuatro centésimos (B/.294.699,04) pero esta última suma no fue cubierta con las rentas ordinarias del Tesoro sino con fondos acumulados en el bienio anterior que no he incluido en estos cálculos de las rentas y de los gastos corrientes.

Puede afirmarse, que en el año transcurrido ha habido un exceso de rentas sobre gastos que monta a B/.442.327,64, y aunque es cierto que el producto de las rentas ha disminuido con relación a lo calculado, ellas han bastado para los gastos ordinarios del Tesoro y permitido obtener un superávit apreciable.

DESCENSO DE LAS RENTAS

Con motivo de la gran guerra que paralizó el tráfico comercial de casi todas las naciones industriales europeas, y que por último llegó a afectar también profundamente el comercio de los Estados Unidos de América, desde Abril de 1917 hasta fines de 1918, las rentas públicas de Panamá sufrieron como era natural las consecuencias de aquella catástrofe económica. Nuestras principales entradas fiscales provenientes de la introducción de mercaderías solo alcanzaron en algunos meses a guarismos insignificantes, como sucedió en el mes de Octubre de 1918, cuando apenas llegaron a producir una suma de B/.68.335,58.

Todas las actividades económicas del país sufrieron hondas perturbaciones y si no hubiera sido por el alto valor alcanzado por algunos pocos artículos de producción nacional y por el mantenimiento de un gran número de soldados, de marinos y de empleados en la Zona del Canal, la miseria hubiera llegado en el país a proporciones desastrosas. El Gobierno de los Estados Unidos gastó en el Istmo sumas considerables en personal y material del ejército, de la marina y del servicio del Canal, y eso produjo una vida artificial engañosa que nos hizo acariciar la esperanza de que el desequilibrio económico del mundo no llegaría hasta nosotros.

Contribuyó a afirmar esa esperanza y a convertirla casi en convicción profunda el renacimiento y la actividad de los negocios desde el día del armisticio. El comercio, restringido hasta aquel día, recobró súbitamente su vigor en vista de la escasez de artículos manufacturados y de la demanda urgente de ellos; numerosas empresas, animadas por el espectáculo de Cuba, en donde los millones se adquirían y se duplicaban en la manufactura de azúcar y en especulaciones sobre tierras rurales y urbanas, se aprestaban a venir a Panamá a traernos también una lluvia de oro; nuestros ganados y nuestros productos agrícolas tenían gran consumo a precios elevados; y todas esas circunstancias estimulaban el comercio.

La demanda universal urgente de artículos manufacturados unida a la inflación monetaria y a los altos salarios en los países productores, determinó fatalmente una alza general de precios que vino a reflejarse en las rentas panameñas y sobre todo en el impuesto de introducción, de un modo sorprendente. Cuando en Octubre de 1918 el impuesto sobre los artículos gravados con el 10 y 15% de su precio, alcanzó como se ha visto a B/.68.335,58 solamente, ya en Mayo de 1919 había subido a B/.115.490,12, y en Diciembre del mismo año a B/.187.274,25. El mismo curso ascendente, aunque en escala mucho menor, se observó en las demás rentas, y como el régimen de los altos precios persistió en casi todo el mundo hasta que en 1920 principió la desinflación de la moneda y de los créditos, la renta continuó en auge espontáneo y explicable hasta fines de 1920 y principios de 1921.

Merced a esas circunstancias excepcionales que probablemente no se repetirán jamás en el mundo, el Tesoro Público panameño, manejado con absoluta honradez y con escrupulosidad, pudo acumular un exceso de rentas sobre gastos montante a B/.3.196.194,72.

Pero la situación anormal de los altos precios, es decir, el alto nivel general de los precios, comparados con el de los anteriores a la guerra, no podía persistir porque ellos no eran el resultado de una vida y de una actividad económica e industrial sana y robusta, sino la consecuencia de la perturbación general ocasionada por la guerra, que desvió por canales improductivos el capital social, destruyó éste en cantidades enormes, restringió la producción, transformó en parásitos a decenas de millones de hombres, y dislocó o trastornó la extracción y la aplicación de toda clase de materias primeras hasta en los rincones más remotos de la tierra.

La desinflación de la moneda y del crédito era inevitable en los países de vida industrial y económica intensa y activa, pues los males de las especulaciones financieras y comerciales fundadas en una moneda inflada y en un crédito excesivo tenían que revelarse

más o menos pronto y más o menos súbitamente, y entonces las consecuencias habrían de ser una parálisis total del comercio y de la industria y una situación caótica llena de peligros sociales. Comenzó el remedio con la restricción del crédito en los Estados Unidos de América; se hicieron efectivas allí fabulosas obligaciones bancarias; principió a efectuarse la desinflación de la moneda con el retiro de billetes y los precios comenzaron también su descenso.

El comercio de Panamá, encontró, naturalmente, mercaderías más baratas en todos los mercados extranjeros y las mismas causas que produjeron el aumento de la renta de introducción, determinaron su baja inevitable. El ejemplo elocuente de un par de zapatos que llegó a costar en Nueva York quince o veinte dólares y que hoy se consigue por seis, siete u ocho, pone de manifiesto la diferencia: el que costaba \$20.00 pagaba \$3.00 de impuesto, y hoy, si cuesta ocho sólo paga \$1.20. El par de zapatos siempre llega al país, pero el impuesto se ha reducido a menos de la mitad, y bien puede afirmarse que el nivel general de los precios ha bajado en un 40% lo cual acarrea una reducción proporcional para el Fisco.

Esa es una de las causas por las cuales el sistema del impuesto *ad-valorem* no tiene mucha aceptación en los países que derivan de él la fuente principal de sus recursos fiscales. Es un impuesto que fluctúa con los precios y que crea la posibilidad de fraudes en las declaraciones del costo. Los comerciantes honorables declaran la verdad y los poco escrupulosos declaran precios mucho menores, perjudicando así al Fisco y al comercio.

Los cuadros comparativos que os someto junto con esta Memoria ponen de manifiesto el producto de todas las rentas, mes por mes, durante el año transcurrido desde el 1o. de Julio de 1921 hasta el 30 de Junio del año en curso, y allí encontraréis que la deficiencia en el impuesto de introducción del 10 y del 15% fue de B/.253.363,92 sobre la suma calculada de B/.1.500.000.00. En cambio veréis que el impuesto sobre la introducción de licores, que se cobra por litro y no *ad-valorem* tuvo un aumento de B/.25.398,97 sobre lo calculado, que fue de B/.238.000.00 en un año.

Aparte de la causa de disminución de las rentas ocasionada por la baja universal de los precios, es preciso admitir que también existe entre nosotros una causa general más profunda y muy digna de estudio: esa causa es nuestra insuficiencia económica. Antes de terminar esta Memoria me propongo presentaros una exposición general sobre tan delicado e interesante aspecto de nuestra vida nacional.

Al hablaros tan extensamente de las fluctuaciones de las rentas públicas durante los últimos cuatro años y de las causas que han ocasionado esas fluctuaciones, lo he hecho con el propósito de llamar vuestra atención hacia la circunstancia de que ninguna influencia favorable o adversa han tenido en ellas los administradores de la cosa pública, y que el mal no ha sido aquí sino el reflejo de males universales sentidos hoy en todas las naciones del mundo, sin exceptuar siquiera a ninguna de las que se mantuvieron neutrales en el conflicto mundial y que parecían destinadas a obtener de la guerra una óptima y permanente cosecha. Es raro que haya un país europeo o americano que en los últimos tres años se haya salvado de dificultades fiscales y de déficits alarmantes en su tesoro. Nosotros, aun hoy, podemos decir que no estamos amenazados por un desequilibrio grave en nuestros recursos, pues si bien es cierto que éstos han disminuido, lo que nos resta es suficiente para atender con puntualidad a los gastos corrientes de la administración pública y al servicio de nuestra deuda. Lo único que puede sufrir atraso es el desarrollo de los caminos, que fue comenzado en grande escala y que habrá necesidad de restringir notablemente durante el próximo año o suspender del todo.

Los cálculos de nuestras rentas para el bienio de 1o de Julio de 1923 a 30 de Junio de 1925 deben basarse sobre el producto alcanzado en el año transcurrido, y fijarse en B/.10.206.392,84; pero en previsión de que aun esas cifras lleguen a sufrir quebranto en lo futuro a causa de la depresión económica mundial que se prolonga indefinidamente, bueno es dejar entre las rentas y los gastos un margen considerable de seguridad, y reducirnos a las actividades estrictamente indispensables de una administración pública ordenada y modesta; y si acometemos obras o empresas de desarrollo éstas deben ser atendidas con fondos especiales creados por medio de empréstitos o de impuestos nuevos suficientes.

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

El sistema tributario vigente hoy en Panamá tiene en gran parte un origen tradicional, y en lo demás es consecuencia de las peculiares condiciones de vida de nuestro país.

Durante el largo período de la Colonia prevaleció en el Istmo el más severo sistema mercantilista. El comercio no era permitido sino con España, y en épocas fijas venían a Portobelo los galeones de la madre patria cargados de mercaderías españolas para venderlas a los comerciantes del Atlántico y del Pacífico. Toda mercadería no española era de prohibida importación a las colonias y quedaba suje-

ta a la pena de comiso. Aquel régimen opresivo llegó hasta el extremo de prohibirse en los países coloniales la producción de artículos que se producían en España, aunque la producción en América fuera mejor y más económica. Aun entre las Colonias unas con otras el comercio era restringido, y así, por ejemplo, los únicos artículos que podían legalmente introducirse de Nueva España (México) al Perú eran añil, brea, alquitrán y hierro.

Como consecuencias de aquellas restricciones, el contrabando se convirtió en una industria floreciente, tolerada y aprovechada por las mismas autoridades españolas encargadas de perseguir los fraudes. En las *Noticias Secretas de América*, libro escrito por los sabios españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa en calidad de informe sobre el estado de las colonias rendido al Rey de España después de la permanencia de ellos en la América por los años 1735 y 1736, se hallan minuciosamente descritos los fraudes y el modo de realizar éstos con la complicidad y la participación interesada de los altos empleados llamados entonces Corregidores.

Estos hechos y estas ideas y prácticas tienen no sólo un interés histórico, sino un importante interés económico fácil de apreciar hoy. En efecto, ¿qué querían los Gobiernos españoles que vinieran a hacer a América los súbditos de España? ¿Podían venir a poblar países en los cuales era prohibido producir lo que se producía en España? ¿Podían dedicarse libremente a la agricultura con el prospecto de una recompensa proporcionada a sus esfuerzos y sacrificios? No. Los españoles no encontraban en América sino tres actividades en las cuales hacer fortuna: ser empleados públicos con todos los poderes y recursos necesarios para enriquecerse; o ser ganaderos para proveer de carne a los habitantes todos y especialmente a los trabajadores de las minas; o ser mineros, o pescadores de perlas en pequeña escala. Desde entonces, desde aquella época colonial remota y olvidada, parece haber quedado en este país el germen de sus hábitos actuales. El parasitismo cuenta con mayor número de prosélitos que el trabajo de la tierra o de la fábrica. Y tal vez por esa misma persistencia de hábitos formados desde hace siglos nuestro sistema rentístico ha venido perpetuándose sobre las mismas líneas de entonces; la **capitación**, impuesto el más desigual e injusto transplantado por España a América, para gravar a los indios, aún sobrevive con el nombre de trabajo **personal subsidiario** o **contribución de caminos**; las **alcabalas**, no llevan ese nombre pero comprenden todo un catálogo de impuestos modernos sobre los consumos y sobre las ventas; los **quintos del Rey** sobre el producto tanto del laboreo de las minas como de la pesca de perlas, existen hoy, aunque muy moderados, con el nombre de impuestos sobre los

títulos y de licencias o permisos de pesca; los almojarifazgos son hoy nuestros impuestos de importación y exportación. Hemos ganado con la supresión de los estancos del aguardiente y del tabaco, pero en cambio tenemos impuestos especiales de consideración sobre esos artículos. Desaparecieron las anatas y las medias anatas, pero existen como entradas municipales los impuestos sobre ciertas profesiones y oficios.

Hoy los principales impuestos panameños son los siguientes:

1o. El llamado **Impuesto Comercial**, dividido en dos clases: una según la cual, las mercaderías extranjeras importadas al país pagan un gravamen de 10 y de 15 por ciento de su costo en el país de origen; otra, según la cual ciertas mercaderías extranjeras, a saber, el tabaco, en sus diversas formas, los licores de todo género, el café, el azúcar, la sal, los fósforos, el ganado y las carnes de consumo, pagan impuestos especiales, por unidad de peso o de medida, y por cabeza de res importada. En este impuesto deben quedar comprendidos los derechos consulares y las encomiendas postales.

2o. El impuesto sobre la producción y consumo de alcoholes y licores nacionales.

3o. El impuesto de papel sellado y timbres nacionales.

4o. El impuesto de degüello de ganado mayor y menor.

5o. El impuesto sobre inmuebles.

Además de esos impuestos principales la Nación tiene establecidos otros gravámenes de menor rendimiento como los derechos de registros, los derechos sobre minas y pesca de concha madreperla, el impuesto sobre las herencias y el derecho sobre patentes de privilegios y marcas de fábrica; y percibe considerables sumas como renta de capitales o de bienes de su dominio privado, y contribuciones que en el fondo no son impuestos, pues representan más bien servicios que no son pagados por quien no los recibe. Estas últimas fuentes de recursos fiscales son dignas de mención, pues ellas vienen a reducir los impuestos panameños a sumas mucho menores de lo que expresan nuestros Presupuestos.

En esas formas la Nación recibe anualmente:

1o.	La anualidad del Canal	B/.	250.000,00
2o.	El producto de seis millones colocados en los Estados Unidos con garantía hipotecaria	B/.	300.000,00
3o.	Intereses del capital del Banco Nacional	B/.	33.750,00
4o.	Mercados y Muelles (calculado para 1921 a 1922 que ha sido excedido según puede verse en el cuadro de renta).	B/.	85.000,00

5o.	El producto de los servicios de correos y telégrafos (calculados para 1921-1922, que ha sido excedido en un 25% según los cuadros)	B/. 97.500,00
6o.	La Lotería Nacional de Beneficencia (cálculo para 1921-1922)	B/. 299.150,00
7o.	El producto del Corral de Bella-Vista, que es un servicio nuevo para la pesa de ganado (en cuatro meses)	B/. 2.790,00
	Total de rentas derivadas del dominio privado de la Nación, de capitales colocados a interés y de servicios	B/. 1.068.190.00

Calculados en cuatro millones y medio de balboas los gastos corrientes actuales de cada año de nuestros presupuestos, resulta que el gravamen real que pesa sobre el pueblo panameño es de B/.3.500.000.00 anuales, en números redondos, y como la población del Istmo es, aproximadamente, de 420.000 habitantes, la carga de los tributos per capita es de B/. 8.33.

La cifra mencionada como monto anual de los gastos públicos corrientes, es, sin embargo, mayor de la que debiera ser. Existe en casi todas las oficinas públicas un personal muy numeroso que debe ser reducido al estrictamente necesario; hay falta de método, y, por consiguiente, pérdida efectiva para el Tesoro en la compra y el uso de material para las oficinas; se han emprendido y se emprenden obras públicas sin haber preparado previamente los presupuestos rigurosos necesarios para saber si el Estado se halla en capacidad de llevarlas a cabo, para no verse después en la alternativa de suspenderlas convirtiendo en pérdida total lo invertido o continuarlas sin saberse nunca hasta dónde debe llegar el sacrificio. Si esos males se corrigen por medio de disposiciones restrictivas que el Poder Legislativo es el llamado a dictar, el presupuesto de gastos panameño puede reducirse a cuatro millones de balboas anuales aproximadamente; y como la deuda pública a cuyo pago están afectadas las anualidad del Canal y la renta de los seis millones irá extinguiéndose gradualmente, los recursos nacionales irán creciendo en la misma proporción y podrán dedicarse sumas mayores a obras nuevas o a nuevas actividades y servicios.

1o. IMPUESTO COMERCIAL

Mucho se ha discutido recientemente por la prensa sobre las cuestiones de puertos libres, de libre cambio y de protección a las industrias nacionales, y en esas discusiones se han repetido una y cien veces los mismos argumentos conocidos ya, que han venido

exponiéndose en innumerables libros, folletos y discursos parlamentarios durante el transcurso de casi un siglo. No es ésta la oportunidad de terciar en tal discusión y no la mencionaría si no fuera porque en ella va envuelta de todos modos la existencia del llamado impuesto comercial, que es hoy la renta más productiva del país, y porque no es improbable que en alguna forma lleguen hasta vosotros planes más o menos precipitados, elaborados por los sostenedores de las teorías encontradas que han sido materia del debate.

El impuesto comercial o sea el impuesto sobre la introducción de mercaderías extranjeras ha sido establecido en Panamá con el fin primordial de obtener una renta apreciable para atender a nuestros gastos públicos; es un impuesto indirecto que el consumidor paga sin advertirlo y que por esa circunstancia es de fácil cobro. Es por otra parte un impuesto que puede calcularse aproximadamente con anticipación teniendo en cuenta los consumos inevitables del país.

Muchos comerciantes inteligentes abogan por la supresión total de este impuesto fundándose en previsiones de más o menos probable realización, que pueden expresarse así:

1o. La supresión del impuesto reducirá proporcionalmente el precio de consumo de los artículos importados y permitirá poner éstos al alcance del mayor número de consumidores aumentando así el volumen de las ventas y el de las importaciones.

2o. Con la supresión del impuesto, Panamá puede convertirse en pocos años en un centro colosal de depósitos y de almacenes de mercaderías de todos los países de la tierra, que encontrarían aquí compradores de países vecinos y aun de algunos distantes.

3o. El comercio local que hoy tiene un formidable competidor en los Comisariatos del Ferrocarril de Panamá, quedaría libre de esa concurrencia, pues en concepto de los sostenedores de la supresión del impuesto, aquellos establecimientos no pueden luchar ventajosamente con el comercio independiente en igualdad de condiciones.

Los adversarios de la supresión contestan en estos o semejantes términos:

1o. Panamá deriva su principal entrada fiscal de los derechos de introducción, y si se suprimen éstos carecerá de recursos para atender debidamente a los servicios públicos indispensables.

2o. Panamá necesita de fuertes impuestos de introducción para darle vida a sus industrias.

3o. Panamá tuvo establecida durante muchos años la libertad de comercio más amplia, y sin embargo, no aumentó su comercio

en las proporciones calculadas por los partidarios de la supresión del impuesto, ni experimentó progreso notable de ningún género.

A los anteriores argumentos replican en sustancia los sostenedores de la supresión:

1o. Admitimos que Panamá necesita la renta derivada del impuesto comercial para sus gastos públicos; admitimos que la supresión pura y simple acarrearía un desequilibrio fiscal considerable; pero sostenemos que un cambio de forma en el impuesto puede proveer de mayores rentas al Gobierno y permitir la eliminación de todas las trabas puestas al comercio exterior. Esa forma es la de un impuesto de tanto por ciento sobre las ventas de mercaderías de todas clases, impuesto experimentado ya en el Canadá y que ha sido motivo de interesantísimos debates en el Congreso de los Estados Unidos.

2o. Admitimos que en Panamá se ha ensayado antes el sistema de la supresión de derechos aduaneros y que el efecto producido en el volumen del comercio exterior fue inapreciable; pero observamos que el Istmo de aquellas épocas, sin contacto directo entre sus dos océanos, no es el Istmo de hoy, transformado en todos sentidos por la obra del Canal, por el aumento asombroso del tráfico mundial, y por las ventajas especiales y únicas que le da su posición geográfica.

3o. Admitimos que las industrias nativas merecen protección y estímulo.

De toda esta discusión se desprende que si es posible hallar una fórmula que permita reemplazar juiciosamente el impuesto comercial, con el fin de proveer al Gobierno de rentas adecuadas y de establecer un sistema racional de protección y estímulo a ciertas industrias incipientes del país, todas las divergencias desaparecen. Ahora bien, la labor de preparación de un plan que abarque propósitos tan diversos no es labor de un día ni es labor de aficionados: es un trabajo de aliento que le corresponde a gentes expertas, autoridades en ciencias económicas, en finanzas y en comercio, que pongan a un lado la hojarasca de las opiniones aventuradas o caprichosas y estudien desde sus raíces nuestras condiciones económicas, nuestras verdaderas y positivas posibilidades de desarrollo y no las fantásticas visiones o los delirios de quienes creen fácil tornar en rico y próspero, de un día a otro, un país casi despoblado y en un estado de atraso apenas imaginable.

Permítaseme proponeros, como medida prudente, la creación de una Junta o Comisión especial que se encargue de preparar para las sesiones próximas de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma

total de nuestro sistema tributario, debiendo componerse dicha Junta, de expertos en asuntos económicos, comerciales e industriales, siendo permitido por razones obvias que en ella figuren indistintamente nacionales y extranjeros. En su oportunidad os someteré un proyecto de ley sobre este asunto.

2o. IMPUESTO DE LICORES

Después del impuesto comercial sigue hoy en importancia en nuestra hacienda pública el impuesto sobre la producción y consumo de alcoholes y licores. Reemplazado completamente el anticuado sistema de cobrar el impuesto sobre la producción, por el más justo, racional y equitativo de cobrarlo sobre el consumo, los resultados obtenidos desde que principió a regir la Ley 10 de 1919 han sido sorprendentes.

A pesar de los tropiezos y dificultades inevitables que en sus principios tenían que afectar, retardándolo, el funcionamiento del sistema recién implantado, tan radicalmente distinto del anterior, la renta comenzó a producir los más halagadores resultados muy pocos meses después de entrar en vigencia la ley. Es de justicia consignar aquí que el buen éxito obtenido se debe, aparte de la conveniencia incuestionable de la innovación, a la labor inteligente, activa, tenaz, y cuidadosa de los señores don Rafael Neira A. y Don Luis E. Alfaro, Administrador y Sub-Administrador nombrados, quienes se encargaron de organizar el ramo y de administrar la renta con un personal escogido que ha colaborado con ellos decidida y eficazmente.

Los productos de esta renta desde la fecha en que principió a regir la Ley 10 de 1919 hasta el 30 de Junio de 1922 han sido los siguientes:

Año de 1919	B/. 1.090.834,77
Año de 1920	B/. 1.492.912,39
Año de 1921	B/. 1.373.805,62
Año de 1922 (seis meses)	B/. 630.675,86
Total	B/. 4.588.228,64

En estas cifras están incluidos los siguientes elementos, que propiamente forman parte del ramo de licores: el impuesto para la lucha Antituberculosa que tiene aplicación especial, y los impuestos de timbres, de fabricación de licores nacionales y de cerveza.

No me permito sugerir alteración fundamental de ningún género en la Ley 10 de 1919 pues ella satisface todas las exigencias del sistema implantado y sólo os expreso la conveniencia de que voteis una partida adecuada para suministrarle caballos a los em-

pleados de la Renta que para vigilar ésta constante y activamente y para perseguir y capturar a los destiladores clandestinos de alcoholes, necesitan disponer de cabalgaduras en cualquier momento y con frecuencia ocurre que por falta de ellas no pueden hacer una investigación urgente e importante. Podría adoptarse el sistema de hacerles pagar a los empleados los caballos que se les entreguen, a efecto de que los cuiden por ser propios de ellos, y que luego se les dé del Tesoro Público una suma mensual para alimentarlos.

En un sentido sí es preciso adicionar la Ley 10 de 1919 y es en el de las penas que deben aplicarse por las infracciones más o menos graves y por los fraudes más o menos destructores de la renta que la misma ley ha previsto.

En los artículos que señalan las penas no se establece gradación alguna que le permita al juzgador tratar con mayor severidad al autor principal de un fraude grave que al cómplice de una infracción menor, y esta deficiencia ha obligado frecuentemente a los encargados de aplicar las sanciones, a apartarse de la ley y a tratar de establecer, consultando la justicia, toda una escala proporcional de penas. No me parece bien que tal práctica reciba la consagración de la costumbre, pues ella deja a la voluntad de ciertos funcionarios el ejercicio de un poder discrecional muy amplio, que puede ser bien usado por algunos y mal usado por otros.

3o. IMPUESTO DE INMUEBLES

Un impuesto que merece estudio especial de parte vuestra hasta adoptar una ley clara y terminante en sus preceptos, que al mismo tiempo sea justa, equitativa y previsoras en los gravámenes que establezca, es el existente sobre los bienes inmuebles.

Hasta 1916, año en que fue aprobado el Código Fiscal, vigente, habían estado rigiendo sobre este asunto dos leyes, la 88 de 1904 y otra más detallada y completa, la 32 de 1909, incorporada casi totalmente en el actual Código.

La Ley 88 establecía como base del impuesto la división de los inmuebles entre rurales y urbanos y fijaba el gravamen en cuatro por mil del valor de los primeros y seis por mil del valor de los segundos. La Ley 32 ya mencionada alteró completamente el sistema y la base fundamental del impuesto, y estableció éste en tres formas, así: las propiedades urbanas debían pagar un cinco por ciento (5%) de su renta anual probable; los solares dentro de las poblaciones debían pagar a razón de cuatro, dos y un centésimo de balboa por cada metro cuadrado de área según la categoría de la población en donde se hallaren; y los predios rústicos en relación con su cabida,

de conformidad con una clasificación variada que comenzaba en un gravamen de cinco centésimos de balboa por hectárea y llegaba hasta a dos balboas por hectárea.

El Código Fiscal en su artículo 552 redujo al tres por ciento el gravamen sobre la renta de las propiedades urbanas; aumentó el gravamen sobre los solares a cinco, tres y dos centésimos de balboa según las categorías ya adoptadas, e introdujo unos pocos cambios en el impuesto sobre los predios rústicos.

Antes de entrar en vigencia el Código Fiscal la Asamblea dictó la Ley 63 de 1917 en la cual se cambió de nuevo el sistema y se dispuso que todas las propiedades rústicas pagaran el tres por mil de su valor, y luego vino la Ley 29 de 1918 a reducir al dos por ciento el gravamen sobre la renta de las propiedades urbanas.

El continuo afán de cambiar las leyes y de alterar las bases adoptadas para fijar los gravámenes tenía que producir un desconcierto perjudicial para el Fisco durante el período de transición de un sistema a otro y así sucedió en efecto.

Cuando el impuesto se cobraba conforme a la Ley 88 de 1904, o sea a razón de seis por mil del valor de la propiedad urbana y cuatro por mil de la propiedad rural, en cada Municipio había una Junta encargada de preparar los respectivos Catastros, hacer conocer éstos y oír reclamos. Le correspondía a esas Juntas llamadas Calificadoras de la Propiedad hacer el avalúo de los inmuebles y determinar el gravamen. Cuando se cambió la base del impuesto, estableciéndolo sobre la renta de los inmuebles urbanos y sobre la cabida de los rústicos (Ley 32 de 1909), también se le atribuyó a las Juntas Calificadoras de la Propiedad la función de formar los Catastros; pero entraban en el procedimiento dos factores distintos, el uno era que los propietarios debían declarar bajo juramento la renta de sus inmuebles cuando eran urbanos y la cabida cuando eran rústicos, y el otro era la intervención de ciertos empleados provinciales nuevos llamados Revisores de Catastros, facultados para pedir las rectificaciones y correcciones que creyeran justas en cada Provincia.

El Código Fiscal dejó existentes las Juntas Calificadoras y detalló mejor que nunca sus funciones y facultades en el artículo 564; pero las dos leyes posteriores, la 63 de 1917 que varió el Código antes de que entrara en vigor, y la 29 de 1918 que redujo el gravamen sobre la renta de los predios urbanos, no expresaron en qué forma debían dichas Juntas dar cumplimiento a las nuevas disposiciones o proceder a hacer los Catastros. ¿Podían guiarse por el Código Fiscal en sus artículos 564 y siguientes? No, porque

estos artículos hacían referencias al gravamen sobre la cabida de los predios rústicos y la Ley 63 establecía tal gravamen sobre el valor de los mismos predios. ¿A quién se le atribuía, por otra parte, la facultad o la función de avaluar tales predios? La ley no había previsto este grave aspecto de la cuestión. Y por último la misma Ley 63 de 1917 en un artículo sin justificación de ningún género, había suprimido el puesto de Revisor General de Catastros que según el Código tenía atribuidas las funciones más importantes del sistema implantado en la Ley 32 de 1909.

Esa lamentable confusión causada por leyes expedidas sin el estudio detenido que estas cuestiones merecen ha venido afectando todo lo relacionado con parte tan importante de los ingresos nacionales.

El Poder Ejecutivo, en vista de aquella anómala situación y considerándose facultado por el artículo 4o de la Ley 29 de 1918 para dictar las medidas necesarias con el fin de hacer efectivo el impuesto, resolvió proceder a levantar por medio de empleados públicos remunerados los Catastros de inmuebles de toda la República y dictó el Decreto número 128 de 1919, por el cual se organizó aquel trabajo, el primero de su género que iba a ejecutarse en el país de conformidad con un plan preconcebido y metódico.

Las Comisiones Provinciales del Catastro principiaron a funcionar en Octubre de 1919 y han terminado ya sus labores. Sería inexacto afirmar que han ejecutado una obra perfecta y completa, pero sí puede decirse que han puesto las bases más sólidas para seguir perfeccionando gradualmente los Catastros de la propiedad inmueble en todo el país. Raras deben de ser las propiedades no enumeradas y descritas en las listas de cada Distrito, y si hay omisiones visibles, ellas seguramente se refieren a inmuebles excluidos del impuesto por disposición de la ley.

Para facilitar la conclusión de los Catastros en su forma definitiva como elemento indispensable para el cobro del impuesto; y para seguir perfeccionando la obra, complementándola con las modificaciones que sean justas y con la adición de las propiedades nuevas, el Poder Ejecutivo ha creado en la Secretaría de Hacienda y Tesoro una sección llamada de Catastros a la cual se le han asignado las funciones indicadas, como también la de preparar y repartir entre todas las oficinas colectoras los recibos individuales que deben presentársele a los sujetos al gravamen.

Esta sección de la Secretaría ha sido organizada y funciona con un personal reducido, modelo de laboriosidad y eficiencia. En concepto mío el Jefe de esta sección debe estar investido del carácter

de Revisor General de Catastros, y autorizado para visitar cualquier lugar de la República para cerciorarse por sí mismo de la exactitud de los avalúos y de las medidas de los predios, especialmente de los no titulados.

El impuesto a que me he venido refiriendo no tiene en su producción para el Fisco la importancia que debería tener. En el bienio de 1o de Julio de 1919 a 30 de Junio de 1921 el producto, incluyendo el gravamen sobre los semovientes (ganados vacuno y caballar) fue de B/.241.671,67, y en el año transcurrido del actual, sin el gravamen sobre los semovientes que ha sido suprimido, ha alcanzado a B/.154.244,30. Si en el segundo año del bienio se obtiene un producto igual, la renta llegará a B/.308.488,60, pero no igualará a la suma calculada para el bienio, que fue de B/.325.000.00.

Este impuesto exige de la manera más imperiosa una legislación nueva que consulte mejor que la existente los más elementales principios económicos y que lo haga producir por lo menos seiscientos mil balboas anuales, en la esperanza de que en pocos años alcance a un guarismo más halagador. Para alcanzar estos resultados debe restablecerse en el país el sistema implantado por la Ley 88 de 1904, o sea el de gravar los inmuebles de todo género en un tanto por mil de su valor, pero sin establecer diferencias que no se justifican entre predios urbanos y rústicos, porque el valor de la propiedad no cambia porque esté vinculado a unos u a otros.

Según los Catastros de que antes he hablado, las propiedades inmuebles enumeradas y avaluadas en todo el país, arrojan los siguientes valores por Provincias:

Panamá	B/. 55.543.626,00
Colón	B/. 16.545.795,00
Bocas del Toro	B/. 2.948.753,00
Chiriquí	B/. 16.075.892,00
Coclé	B/. 7.164.455,00
Herrera	B/. 3.152.810,00
Los Santos	B/. 3.866.925,00
Veraguas	B/. 8.183.115,00
Total	B/.112.581.371,00

Aún suponiendo que en virtud de reclamos pendientes algunos de esos valores se reduzcan, tenemos como factores para restablecer el equilibrio las propiedades nuevas que se incorporan a los Catastros de cada Distrito con absoluta exactitud y sobre todo, la supresión que os propondré por separado de todas las exenciones esta-

blecidas en favor de ciertas propiedades urbanas eliminadas del Catastro, y de las fincas de cacao, caucho, café, caña de azúcar, coco, níspero y vainilla, que ningún efecto benéfico han producido en el país y que sólo sirven para que, con el pretexto de que las fincas tienen cultivos de ese género, se eluda el pago del impuesto sobre muchas propiedades valiosas.

Puede afirmarse, pues, que la avaluación en ciento doce millones de balboas de la propiedad sujeta al impuesto no es exagerada, y cobrando sobre toda ella un seis por mil la renta no sería menor de seiscientos mil balboas por año.

No faltarán opositores tenaces a este proyecto a causa, sobre todo, del alza de la rata que en concepto mío es necesaria para alcanzar el aumento de los ingresos al Tesoro, pero estoy seguro de que la sensatez de la mayoría del país prevalecerá sobre el interés individual que siempre resiste el pago de impuestos. No es concebible, en efecto, que de todas partes del país se exija la apertura de nuevas escuelas, servidas por maestros competentes; se pida la construcción de locales, de caminos y de puentes, de acueductos y pozos artesianos; se soliciten auxilios para establecer y sostener plantas eléctricas y hospitales, y para construir cementerios, iglesias y parques de recreo; y que sin embargo de eso haya distritos como el de Olá que sólo arroja en los Catastros un gravamen sobre inmuebles de B/.69.59 al año.

Relacionadas con el impuesto sobre inmuebles hay numerosas cuestiones que pueden y deben ser consideradas cuando se trata de implantar un sistema tributario verdaderamente justo, o corregir algunos males que se revelan cuando una comunidad asciende en sus condiciones industriales y económicas.

El derecho de propiedad es digno de respeto y merece como todos los demás derechos constitucionales una protección completa y efectiva; pero es indudable que el dominio sobre la tierra y sobre los agentes naturales que ella contiene goza de un poder reproductivo excepcional, mayor que cualquiera forma de capital económico y así se ve cómo aumenta el valor de la tierra y de los inmuebles en general sin que el propietario haya aumentando en nada su inversión, con solo que la sociedad haya crecido en número, y que hayan nacido y florecido industrias en que otros, y no los propietarios, trabajan. Esa mayor riqueza, esa plusvalía que le cae del cielo al propietario, se le debe a la sociedad en que éste actúa, y no a un esfuerzo individual digno de encomio. Todas las tierras de Bella Vista, por ejemplo, me fueron ofrecidas a mí en venta el año de 1897 por el General Buenaventura Correoso por la suma de seis mil pesos plata colombiana, y posteriormente, en 1899, las de Perry's

Hill en donde se halla hoy el Circo de toros, ¡por mil seiscientos pesos! Hoy, en cualquiera de esas propiedades, la tierra se vende por metro cuadrado y las referidas sumas no alcanzarían para comprar en ellas un solar de veinticinco metros de frente por cuarenta de fondo. Las tierras de las Sabanas, usadas hasta hace pocos años para mantener ganados en soltura (cada res necesita una hectárea de tierra en esa forma), carecían de valor comercial digno de mención y hoy se vende a precios apenas creíbles, pudiendo citarse casos de hectáreas vendidas a dos mil quinientos balboas. ¿Han hecho algo los dueños de esas tierras para que los valores de ellas hayan crecido en proporción tan asombrosa? ¿Le han agregado ellos algo a la tierra con su esfuerzo personal o con su dinero? No, el crecimiento del valor ha sido causado por la transformación económica y social que el país ha experimentado y sobre todo por el aumento de la población con motivo del Canal y por la construcción reciente de caminos con fondos del Tesoro Público. Es decir, con los dineros obtenidos de todos los impuestos colectados en el país, la Nación ha construido caminos excelentes que han transformado propiedades de un valor casi nulo en propiedades de un valor nunca soñado antes por sus dueños. Este fenómeno no es nuevo en el mundo y tiene en las ciencias económicas el nombre de **incremento no ganado** (unearned increment).

Bien examinado el punto se ve claramente que como resultado del uso de los impuestos públicos se crean valores provechosos sólo para los propietarios, y basta la mera enunciación del hecho para que nuestra conciencia admita que en el fondo hay una gran injusticia. La justicia está en que quienes quieren calles y caminos para que sus propiedades territoriales urbanas o rurales ganen en valor, contribuyan directamente con una parte del costo en proporción a los beneficios que han de recibir.

El impuesto sobre inmuebles debe también ser graduado teniendo en cuenta la extensión de las propiedades. El propietario de cincuenta mil hectáreas de tierras incultas debe pagar una rata de impuesto más alta que el propietario de cincuenta hectáreas cultivadas, y para ello el medio debe ser establecer un impuesto progresivo en relación con el área de los terrenos.

4o. IMPUESTO SOBRE LAS HERENCIAS

Las leyes relativas al gravamen sobre la transmisión de bienes por herencia deben ser totalmente revisadas. En su forma deficiente actual, pagan el impuesto sin obstáculo las herencias pequeñas o sean las que por el monto reducido del gravamen no ofrecen ali- ciente para la resistencia o para la evasión; las grandes fortunas

encuentran siempre abogados que no consideran inmoral ni ilícito el empleo de subterfugios legales y de simulaciones patentes para defraudar al Fisco, y así ha sucedido en casos recientes muy notorios. La transmisión de herencias estimadas en millones se ha efectuado sin pagar el impuesto sino sobre unos pocos miles de balboas, porque hubiera sido demasiado visible y verdaderamente absurdo que los finados aparecieran, como dijo un célebre poeta, sin una piedra en que posar la sien.

La nueva ley que se dicte debe ser clara en sus preceptos, justa en sus gravámenes, severa en sus sanciones; debe tener efecto retroactivo en los casos de dolos y simulaciones para defraudar al Fisco y conceder acción popular para comprobar en juicio los fraudes cometidos, teniendo derecho el que haga uso de esta concesión por lo menos al treinta por ciento de las sumas que el Tesoro Público reciba con motivo de sus gestiones.

El impuesto sobre las herencias existe en todos los países civilizados, y en algunos tiene caracteres de excesiva severidad. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, treinta y ocho Estados lo tienen establecido en formas variadísimas, y además existe hoy el impuesto federal decretado en 1916 y cobrado de conformidad con una escala que resumo aquí como dato interesante digno de ser considerado por las gentes que se quejan de nuestro actual gravamen y tratan de eludirlo.

El impuesto federal de los Estados Unidos, que se cobra además del impuesto de cada Estado, está sujeto a la siguiente escala:

Si la herencia no pasa de \$50.000.00, el gravamen es de uno por ciento.

Si pasa de \$50.000.00 y no excede de \$150.000.00, el gravamen es de uno por ciento sobre \$50.000.00 y de dos por ciento sobre el exceso.

Si pasa de \$150.000.00 y no excede de \$250.000.00, el gravamen se cobra así: uno por ciento sobre \$50.000.00; dos por ciento sobre \$100.000.00; tres por ciento sobre el resto.

Si la herencia pasa de \$250.000.00 y no excede de \$540.000.00 el impuesto es el siguiente: uno por ciento sobre \$50.000.00; dos por ciento sobre \$100.000.00; tres por ciento sobre \$200.000.00 y cuatro por ciento sobre el resto.

Cuando la herencia pasa de \$450.000.00 y no excede de \$750.000.00, el gravamen es el que ya se ha visto hasta aquella suma, es decir, la escala de uno, dos, tres y cuatro por ciento pero por el exceso sobre \$450.000.00 sube al seis por ciento.

Si la herencia pasa de \$750.000.00 y no llega a \$1.000.000.00, lo que excede de \$750.000.00 paga ocho por ciento.

El exceso sobre \$1.000.00.00 paga el diez por ciento; el exceso sobre \$1.500.000.00 paga doce por ciento; el exceso sobre \$2.000.000.00 paga catorce por ciento, y sigue aumentando hasta llegar al máximun o sea el veinticinco por ciento sobre la suma que exceda de \$10.000.000.00. Para poner de manifiesto la importancia y la magnitud del impuesto así graduado supongamos una herencia de dos millones de balboas o dollars y formemos el cuadro:

HERENCIA	RATA	IMPUESTO
\$ 50.000	1%	\$ 500
" 100.000	2%	" 2.000
" 100.000	3%	" 3.000
" 200.000	4%	" 8.000
" 300.000	6%	" 18.000
" 250.000	8%	" 20.000
" 500.000	10%	" 50.000
" 500.000	12%	" 60.000
<hr/>		
\$ 2.000.000	Totales	\$ 161.500

Yo no vengo a pedirlos gravámenes de esa magnitud, pero sí me parece equitativo que una fortuna de dos millones de balboas en Panamá, donde no se conoce todavía el impuesto sobre la renta, no pague por su transmisión un total menor de cincuenta mil balboas.

En cuanto a los medios y procedimientos usados para evadir el impuesto, la ley debe ser severa para calificarlos y castigarlos. Algunos de esos medios son tan infantiles y tan elementales que bastaría una previsión sencilla en la ley para impedirlos. El presunto causante de una herencia, deseando evadir el impuesto, vende sus bienes, por ejemplo, a una Compañía anónima cuyos únicos accionistas son sus herederos; el procedimiento no revela mucha sagacidad de parte de las lumbreras del foro que aconsejan la operación, pues si la venta de los bienes a una Compañía se realiza sin que ésta pague efectivamente el precio justo o sin que pague ninguno, la simulación es evidente; y si la venta es de buena fe y el valor justo es entregado al vendedor, en alguna parte debe tener éste el producto de la venta y ese producto cualquiera que sea el escondrijo en que se halle, es la herencia sobre la cual al fallecer el individuo debe cobrarse el impuesto. No es admisible que porque ocurra una venta desaparezca, evaporada, la riqueza en que se transformaron los bienes vendidos.

La ley federal de los Estados Unidos a que me he referido ya, declara delitos esos hechos y los castiga con multa de cinco mil dollars o prisión que no exceda de un año, o ambas penas a la vez, y en ciertos casos se agrega un recargo de cincuenta por ciento del impuesto que se trata de evadir.

Este impuesto produjo en el bienio de 1919 a 1921 la suma de B/.20.898.73 y en el año transcurrido del actual bienio B/.9.779.97.

Los demás impuestos establecidos y cobrados en el país durante el bienio último y el primer año del corriente, no requieren especial mención, y de sus productos encontrareis detalles en los cuadros anexos a esta Memoria.

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

Este arbitrio rentístico creado para atender a la beneficencia pública ha sido un gran alivio para el Tesoro y ha permitido dedicar a obras de otro orden las rentas y recursos que antes se empleaban en forma de subvenciones a hospitales, asilos, hospicios y todo género de actividades caritativas.

El producto de la Lotería se divide en dos partes: una que aparece en el Presupuesto de Rentas, calculada para bienio en B/.598.300.00 y contra la cual figura en el Presupuesto de Gastos una suma igual destinada al sostenimiento de hospitales y establecimientos de beneficencia; y otra que, unida a los ingresos del impuesto para la Lucha Anti-Tuberculosa, se está usando de conformidad con la Ley 6a. de 1920 en la construcción del Nuevo Hospital Santo Tomás. Esta última parte, como os he dicho anteriormente, se ha elevado en el año de 1o de Julio de 1921 a 30 de Junio de 1922 a B/.432.000.00.

No encuentro razón plausible para pensar siquiera en la conveniencia de suprimir este arbitrio fiscal. El país ha venido acostumbrándose en los últimos cuarenta años a esta exacción en que las personas incurren voluntaria y deliberadamente, y si se adoptara la supresión, ella sólo serviría para que todo el mundo comprara billetes de loterías extranjeras, de muy fácil traída al Istmo en cualquier momento.

El sistema establecido funciona con absoluta regularidad y todavía no ha habido ni la más leve queja sobre la corrección y la honradez de los encargados de administrar el negocio.

PESA DEL GANADO

En cumplimiento de la Ley 4a. de 1918, dictada a solicitud de los ganaderos del interior que venden sus ganados en Panamá y Colón, el Poder Ejecutivo resolvió construir un Corral y los edificios indispensables para la balanza oficial. Esto se hizo en el barrio de Bella Vista a un costo de B/.11.099,18 y el servicio fue inaugurado a fines de Febrero del presente año. Como podeis ver en el cuadro de las rentas, la pesa del ganado produjo en unos días de Febrero y en los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio la suma total de B/.2.790,15. Como el personal encargado del servicio cuesta mensualmente B/.245.00 la diferencia en favor del Fisco en los cuatro meses es de B/.1.810,15.

La referida ley dispone en su artículo 1o que se verifique el peso del ganado vivo que sea vendido para el consumo en las ciudades de Panamá y Colón, y en un párrafo del mismo artículo dice que esos ganados deben ser pesados dentro de las veinticuatro horas siguientes a su llegada a Panamá. Esta última disposición deja entender que el acto del peso debe verificarse en Panamá, aunque se trate de reses que vayan a ser consumidas en Colón, pero si ese es el pensamiento de la ley queda obscuro el propósito de ella; pues a Colón pueden llegar y llegan efectivamente ganados de consumo que no pasan por Panamá. Si el objeto de hacer obligatorio el peso del ganado es llevar una estadística exacta de la cantidad de reses consumidas en las dos ciudades con su peso bruto, ese objeto no se realiza sino estableciendo otra balanza en Colón.

El Poder Ejecutivo os consultará este punto de un modo concreto y especial en el curso de vuestras sesiones.

TIERRAS BALDIAS E INDULTADAS

La legislación vigente hoy sobre este importante ramo de la administración pública tiene su origen en la Ley 20 de 1913, preparada por mí como Secretario de Hacienda y Tesoro en 1912, para salir del caos de disposiciones deficientes y confusas que habían venido dictándose desde 1904.

El derecho de propiedad sobre la tierra no existía en Panamá sino en muy limitados casos, en los cuales el título emanaba de las autoridades coloniales españolas. Las tierras no apropiadas en aquella forma se dividían en dos grandes categorías: tierras baldías que habían pertenecido a Colombia como entidad soberana sobre el Istmo, y tierras indultadas, o sea compradas a la Corona de Espa-

ña por varios pueblos existentes en la época colonial para el uso y goce de sus moradores, que nunca fueron distribuidas entre los compradores primitivos, a pesar de haberlo dispuesto así el Rey de España en los mismos títulos de indulto.

Respecto a las tierras baldías rigió en Panamá la legislación colombiana hasta la fecha de la separación. Desde 1881 el Poder Ejecutivo de Colombia había suspendido la adjudicación de tierras en el Istmo, y aquella medida, adoptada sin establecer excepción ninguna en favor de los cultivadores y pobladores del suelo, fue una de las causas graves que paralizaron el desarrollo económico del país durante los últimos años del siglo XIX.

Las tierras indultadas se hallaban en una condición peculiar poco alentadora para las gentes de trabajo y de empresa. Dichas tierras, comprendidas desde la Punta de Chame hasta Punta Burica, y desde el mar hasta la Cordillera, habían sido compradas por los moradores de las antiguas ciudades de Natá, Los Santos y Santiago, y pagadas por ellos individualmente en razón de las porciones que cada uno ocupaba con sus huertas, estancias, trapiches, salinas, hatos y otros géneros de hacienda (así dicen los títulos); pero no efectuada al tiempo de la compra la distribución que era de rigor, y desaparecidos en el transcurso de casi dos siglos hasta los vestigios de las primitivas posesiones; fundados dentro de las áreas compradas muchísimos pueblos nuevos que tienen hoy el carácter de Distritos con sus respectivos Consejos y autoridades municipales, la reglamentación del uso y la distribución del dominio de dichas tierras vino a convertirse en un grave problema, insoluble sin la intervención de una autoridad más alta que las mismas municipalidades. Las Asambleas del antiguo Departamento, y siguiendo su ejemplo, la Convención Nacional, quisieron crear una condición intermediaria entre el derecho de propiedad y el uso precario de dichas tierras, y la última entidad mencionada estableció la concesión del derecho de posesión usufructuaria mediante el pago de un impuesto progresivo que comenzaba en dos pesos por cada hectárea, si el terreno no excedía de diez hectáreas, y seguía aumentando hasta alcanzar a veinticinco pesos por hectárea cuando el terreno excedía de cien hectáreas (Ley 70 de 1904). Tal derecho no era el de dominio. Era un mero usufructo sujeto a condiciones resolutorias implícitas en el título y sujeto además, a las veleidades de los legisladores que podían en cualquier momento suprimirlo o cambiar las condiciones del derecho concedido, o imponer nuevos y más onerosos pagos para conservarlo; y eso equivalía a continuar en la inseguridad y en la incertidumbre que habían sido rémoras a nuestro progreso agrícola durante centenares de años.

Era preciso cambiar de raíz el sistema, fundar la propiedad plena reconociendo como dueños a los usufructuarios; expedirles a éstos títulos definitivos e inatacables de su derecho de dominio, mediante el pago de un precio nominal que le diera al acto un carácter contractual perpetuo y no revocable conforme a la Constitución; y en esa necesidad y en ese propósito se inspiró la Ley 20 de 1913.

Para darle mayor amplitud al plan se permitió también la compra de tierras por personas que no fueran usufructuarias, es decir, se consagró el principio de la venta de tierras incultas y desocupadas a quienes las solicitaran hasta una extensión máxima de mil hectáreas.

Como puede verse en la referida ley y en las disposiciones ejecutivas que la complementaron, la idea dominante en el plan fue la de constituir la propiedad territorial otorgándola a los ocupantes actuales, y dividir grandes extensiones entre el mayor número de habitantes, cultivadores y pobladores, dándole a cada jefe de familia diez hectáreas de tierra, o cinco si el solicitante no era jefe de familia.

Por la ignorancia de los favorecidos con esas disposiciones y por negligencia de las Comisiones de Tierras creadas en 1913, para darle forma práctica fácil a las concesiones otorgadas, aquella ley fundamental no produjo los efectos inmediatos que eran de esperarse. En cambio, muchos especuladores despiertos vieron la oportunidad de comprar terrenos al precio establecido para las personas a quienes el legislador quiso favorecer, y se apresuraron a acaparar considerables extensiones que mantienen incultas en la esperanza de venderlas a otros especuladores extranjeros. Este es un mal que exige pronto correctivo.

El Código Fiscal y la Ley 63 de 1917, contienen todas las disposiciones importantes que rigen sobre tierras, calcadas sobre la Ley 20 tantas veces mencionada, y aunque en ellas están consignadas todas las provisiones fundamentales deseables, es preciso complementarlas con algunas restricciones y cambios que puedo sintetizar así:

1o. La venta de tierras a individuos que no sean ocupantes con cultivos o con ganados, no se debe hacer nunca por una extensión mayor de doscientas hectáreas.

2o—Los lotes de tierras incultas que se soliciten en la forma indicada en el párrafo anterior, deberán ser valuados por un experto al servicio del Gobierno. La tarifa fija de valor por hectárea quedará suprimida en estos casos.

3o.—Seguirá subsistiendo el precio actual por hectárea de las tierras ocupadas por cultivadores pero sólo sobre las cultivadas en forma productiva, no sobre las que estén sin cultivos, sin cercas y convertidas en rastrojos. Los Agrimensores deberán expresar estas circunstancias en los planos y en las exposiciones o descripciones que hagan del terreno, so pena de cancelación de sus diplomas y permisos y de sufrir la pena de seis meses de prisión.

4o.—El Poder Ejecutivo deberá quedar facultado: a) Para suspender toda solicitud de compra de tierras siempre que a su juicio, después de investigado el caso, sea preferible que el globo solicitado se divida en lotes de diez hectáreas para adjudicarlo gratuitamente a pobladores y cultivadores, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 63 de 1917; b) para proceder administrativamente a señalar y demarcar globos de tierras baldías o indultadas de cualesquiera extensión y para dividirlos en lotes de diez hectáreas debidamente numerados, con el fin de adjudicarlos gratuitamente a los jefes de familia panameños que los soliciten, adoptando en sustancia los Decretos números 47 de 26 de Julio y 50 de 9 de Agosto del presente año, dictados para adjudicar tierras en esa forma en las reservas nacionales del Lago de Gatún.

5o.—Cuando se decrete por el Poder Ejecutivo y se confirme por la Asamblea Nacional la inadjudicabilidad de un globo de tierra debe declararse en el mismo acto cuál es el motivo de tal declaratoria, y si ella fuere decretada fundándose en la conveniencia de los pequeños cultivadores y de los pobladores, debe expresarse que la inadjudicabilidad no perjudica a éstos, quienes sí pueden obtener el terreno solicitándolo en porciones de diez hectáreas o de cinco hectáreas, según el caso.

6o.—El Poder Ejecutivo debe quedar ampliamente autorizado para establecer sobre las tierras baldías o indultadas que hayan sido adjudicadas y que estén incultas, cierto tiempo después de la venta, un impuesto adicional al de inmuebles en vigor.

Este impuesto adicional deberá extenderse a todas las tierras incultas de particulares, cualquiera que sea el origen del título.

En cuanto a la administración, adjudicación gratuita y venta de las tierras, sólo me resta decir que mucho en el ramo depende del modo como las leyes son aplicadas y de la integridad de los empleados respectivos. Con empleados indolentes o venales y con agrimensores infieles a su mandato, nada bueno puede hacerse, y toda ley, por excelente que sea en sí misma, se presta a fraudes, a injusticias y hasta a patentes iniquidades.

Desde vuestra última reunión ordinaria, el Poder Ejecutivo ha dictado varios Decretos declarando inadjudicables, de conformidad con la ley, ciertas porciones de tierras indultadas. Dichos Decretos os serán sometidos por separado.

También se han dictado los Decretos números 47 de 26 de Julio y 50 de 9 de Agosto del presente año, por los cuales se ha permitido hacer adjudicaciones especiales en el globo de 20.000 hectáreas de tierra reservado para ciertos fines a las orillas del Lago de Gatún. Con motivo de hallarse varios cultivadores de buena fe ocupando porciones de un lote de mil hectáreas adjudicado anteriormente, el Gobierno se vio en el deber de facilitarles la adquisición de terrenos equivalentes para trasladar sus cultivos y ensancharlos, y al mismo tiempo pensó que era conveniente estimular la agricultura y la cría de animales de corral en otras tierras del Lago, ofreciéndoles a los jefes de familia panameños que los solicitasen como agricultores, lotes de diez hectáreas debidamente medidos y numerados ya para hacer fácil, rápida y sin costo para ellos la adjudicación y la entrega.

Ese plan está realizándose ya. Del globo de tierra de 4.200 hectáreas declarado adjudicable por el Decreto número 120 de 1918 en la reserva del Lago de Gatún quedaban todavía sin adjudicar 812 hectáreas; pero las adjudicaciones ya realizadas dejaban ese residuo sin acceso al Lago y por consiguiente casi inútil para los fines contemplados, y pareció más acertado separar un lote de mayor extensión a la orilla del Lago que unido al resto del anterior formara un área divisible en lotes de diez hectáreas. A esa idea responde el Decreto número 50, por el cual se declara adjudicable un lote de 2.840 hectáreas.

El Poder Ejecutivo se propone ensayar este sistema de adjudicación de tierras a los jefes de familia, contando con la inteligente cooperación del actual Gobernador de la Provincia de Colón; y si, como lo espera, se alcanza buen éxito, lo extenderá gradualmente a las demás Provincias, hasta que no haya en toda la extensión del Istmo un solo jefe de familia agricultor que no posea la tierra necesaria para sus labores.

LEGISLACION SOBRE PETROLEO

Aunque no hay seguridad de ningún género de la existencia de petróleo en el país en cantidades suficientes para determinar una explotación comercial provechosa, a Panamá, lo mismo que a todos los países del mundo, han llegado individuos y compañías dispuestos a hacer costosas exploraciones en la esperanza de encontrar

depósitos de aceite y de carburos gaseosos de hidrógeno aprovechables en la industria moderna.

Muchas leyes se han dictado desde 1909 para acá, que revelan nuestra inexperiencia en este delicado asunto. La primera ley fue la 30 de 1909, por la cual se permitió adquirir los depósitos de petróleo en la misma forma en que se adquieren las minas, esto es, por medio del denuncia y de la adjudicación de un área limitada del suelo, que comprende los derechos al subsuelo. Las pertenencias de esas minas no podían exceder de diez kilómetros cuadrados o sea un rectángulo de dos kilómetros de altura por cinco kilómetros de base, pudiendo adjudicarse también pertenencias de nueve kilómetros cuadrados (3 k. x 3 k.).

La Ley 24 de 1913, sobre conservación de riquezas naturales, dispuso que la explotación de las fuentes de petróleo se hiciera en virtud de contrato especial celebrado con el Poder Ejecutivo hasta por cuarenta años, mediante condiciones claramente establecidas en la ley. No se limitó la extensión de las áreas que podían ser objeto de estos contratos y se reconoció el derecho adquirido por las personas que habían denunciado fuentes de petróleo de conformidad con la Ley 30 de 1909.

Vinieron después las Leyes 6a. y 38 de 1915, en las cuales se introdujeron disposiciones fundamentales erróneas al lado de una reglamentación muy acertada referente a cosas secundarias y a cuestiones de mero detalle. Así, por ejemplo, las concesiones que la Ley 6a. ofrecía a los contratistas para exploraciones y explotaciones, en materia de impuestos de importación y de exportación y de facilidades para obtener la expropiación de terrenos necesarios para todos los fines de la empresa, son indudablemente favores especiales apreciables; ¿pero qué valor práctico podían tener todas esas concesiones si con un solo artículo fundamental la misma ley las hacía inútiles y hasta ridículas? En efecto, el parágrafo 2o del artículo 4o de dicha ley dice así:

“La extensión superficial de terreno a que se refiera un permiso de exploraciones, en ningún caso excederá de diez hectáreas”.

Con esa disposición imperativa en vigencia qué valor podían tener las concesiones de impuestos, los permisos para tender tuberías y para expropiar las tierras necesarias para cada empresa? ¿Qué importancia podía alcanzar una exploración de petróleo restringida a diez hectáreas? Y decirle al dueño de un permiso para explorar diez hectáreas que se le concedía el derecho de tender tuberías y de expropiar tierras, dentro de las diez hectáreas, naturalmente, era una ridiculez impropia de gentes serias.

La Ley 38 de 1915, no tuvo por objeto principal reglamentar las exploraciones y explotaciones sino establecer los derechos del Estado, los de los propietarios de tierras y los de los exploradores y explotadores en los casos de tierras petrolíferas pertenecientes a particulares. Esta ley consagró ciertos principios nuevos relativos a la prelación de los propietarios de un terreno para celebrar con el Gobierno el contrato de explotación de una fuente de petróleo hallada en su terreno, siempre que le diera al descubridor la décima parte del producto líquido; le dio prelación en segundo lugar al descubridor para obtener el contrato de explotación, dándole al propietario la quinta parte del producto líquido y estableció en favor de terceros el derecho a celebrar el contrato, dándole al propietario la quinta parte y al descubridor la décima.

El Código Fiscal en sus artículos 267 a 286, legisló por completo sobre este asunto; pero incurrió en los mismos errores de la Ley 6a. de 1915, pues al mismo tiempo que es pródigo en exenciones de impuestos y en facilidades de expropiación, limitaba a veinticinco hectáreas los permisos de exploración; señalaba como máximo de una pertenencia de explotación un rectángulo de mil metros de base por cuatrocientos de altura y fijaba el tiempo del contrato en diez años prorrogables por otros diez. Según esta ley, los exploradores debían pagar un impuesto de un balboa por cada hectárea.

Como fácilmente se comprende, leyes semejantes no podían servirle de base a ninguna compañía seria e importante para emprender en la República las costosas exploraciones necesarias con el fin de establecer si en nuestro territorio hay o no petróleo, y seguramente por eso la Asamblea Nacional dictó la Ley 54 de 1917, por la cual se facultó al Poder Ejecutivo para celebrar contratos de exploración sobre cualquiera extensión de tierras baldías e indultadas y contratos de explotación hasta por veinte años prorrogables por otros veinte.

El Poder Ejecutivo, pocos días después de dictada esa ley, celebró con el señor Lincoln G. Valentine un contrato poco meditado y hasta mal redactado, en el cual se le concedió a dicho señor el derecho de hacer exploraciones en toda la extensión del territorio nacional, comprendida entre la línea de la costa de ambos mares y una paralela a ésta a quince millas de distancia.

Por contrato adicional se le hizo al mismo señor Valentine una concesión igual sobre todas las islas y aguas territoriales de la República.

Esos contratos revelan que el Gobierno panameño, por falta de estudio o tal vez por creer que en el Istmo no hay petróleo y que

por consiguiente toda la concesión hecha a Valentine carecía en el fondo de valor positivo, se fue de la política anterior de las restricciones extremas en cuanto a la extensión de las áreas de exploración y de explotación, a la política extrema contraria de concederle virtualmente a un solo individuo toda la extensión del país.

Los contratos referidos han sido hasta ahora motivos de continuas y agrias controversias, fundadas en la magnitud de las concesiones otorgadas, pero más que todo, ocasionadas por la forma inadecuada de los contratos mismos. Son contratos en los cuales no hay una sola estipulación que obligue al concesionario a hacer o ejecutar algo específico, compelido por una sanción más o menos severa; son contratos de una vaguedad y de una imprecisión tales, en todo lo referente a obligaciones del contratista, que pueden considerarse como contratos unilaterales cuyo cumplimiento depende de la buena fe y de la honorabilidad de quienes hoy poseen los derechos del señor Valentine.

El Poder Ejecutivo ha considerado de su deber corregir las imprevisiones y los vacíos de que adolecen los contratos referidos, y aunque ha reconocido y reconoce la validez del contrato principal o sea el número 27 de 1917, se halla hoy en negociaciones con la Sinclair Panama Oil Corporation, para celebrar un convenio adicional que aclare las obligaciones recíprocas de las partes, y le permita libremente a la empresa dedicarse con confianza y con interés a la perforación de pozos y a la explotación de ellos si es verdad que existe petróleo en Panamá.

Una vez terminada esta larga controversia podrá saberse cuáles son las porciones del territorio nacional que la Compañía concesionaria deja libres para otros exploradores, y conveniente es que estéis preparados para considerar en qué sentido deben ser reformadas las leyes existentes, a fin de estimular las investigaciones científicas y prácticas sobre petróleo sin imponer condiciones de extrema severidad ni permitir por otra parte que las concesiones signifiquen el poder de no hacer exploraciones y de impedir indefinidamente que otros puedan hacerlas.

Me propongo presentaros un proyecto de ley sobre estas bases:

1a.—Que las áreas de exploración ya sea en tierras o en aguas nacionales no sean mayores de cinco mil hectáreas;

2a.—Que para permitir las exploraciones se celebre un contrato en el cual sea condición precisa fijar el término del permiso;

3a.—Que se estipulen en el Contrato de exploración las condiciones detalladas de la explotación, las causales de caducidad o de prórrogas y la relación que debe existir entre el área explorada y el área explotada por el interesado;

4a.—Que sea condición de todo contrato para explorar y explotar fuentes de petróleo, que el área dada en exploración se divida en rectángulos de 250 hectáreas para distribuir éstos alternativamente entre el explorador y la Nación, de modo que en un globo de 5.000 hectáreas, por ejemplo, le correspondan al explorador diez rectángulos de 250 hectáreas y a la Nación otros diez;

5a.—Que el Poder Ejecutivo quede facultado para celebrar contratos especiales de explotación de las porciones exploradas que le correspondan según el punto anterior;

6a.—Que queden claramente establecidas las relaciones entre la Nación y los dueños de propiedades particulares, y que se determine inequívocamente en la ley la fecha desde la cual toda adjudicación de tierras baldías o indultadas ha llevado y lleva la reserva de los derechos del subsuelo en favor de la Nación.

BANCO NACIONAL

Esta institución de crédito, fundada con capital de la Nación, ha venido aumentando paulatinamente su prestigio durante los últimos años y hoy podemos decir con orgullo que inspira absoluta confianza a cuantos tienen negocios con ella.

Al cumplirse el término del contrato celebrado con la International Banking Corporation para servir de depositaria de los fondos públicos y pagadora de los gastos nacionales, el Gobierno juzgó llegado el momento de darle a nuestro Banco Nacional una prueba de la confianza que le inspiraba su manejo, y decidió que pasaran a él los fondos del Tesoro, con las funciones, ventajas y provechos que tuvo la otra institución. Esto no significaba en forma alguna que el Gobierno no estuviera satisfecho del manejo de la International Banking Corporation, pues muy al contrario, esta institución había desempeñado sus delicadas funciones con acuciosidad, prontitud, orden y honradez dignas del más alto encomio; pero teniendo la Nación un Banco propio era natural que prefiriera a éste por obvias razones de decoro. Se celebró el contrato el día 16 de Mayo de 1921; los fondos del Tesoro comenzaron a ser percibidos por el Banco el día 1o de Julio y hasta hoy no ha ocurrido en el servicio el más leve motivo de censura. Un cheque girado por el Gobierno contra el Banco Nacional circula como dinero efectivo en todo el

país, lo mismo que el de otro banco cualquiera y tal vez con mayor confianza, porque la quiebra de la Panama Banking Company ha dado lugar a prevenciones y a temores no experimentados antes.

Hoy la situación del Banco Nacional es muy halagadora. Los depósitos siguen aumentando día por día y el volumen de las operaciones se ensancha proporcionalmente. La institución conserva en sus cajas en efectivo la reserva legal de sus depósitos a la orden, y más bien se observa que en ocasiones, por excesivo celo de sus administradores, mantienen una reserva excesiva.

Desde que el Banco fue facultado por la ley para acumular sus utilidades, con excepción del 4 y medio por 100 del capital que debía ingresar al Tesoro Público, sus recursos totales (capital y provechos acumulados) han subido a la suma de B/.1.056.304,84. Naturalmente, a medida que los recursos crecen, las ganancias acumuladas son mayores y la progresión del aumento es mayor también.

Hay algo que ha servido para darle al Banco mayor prestigio, y es su actitud de severidad imparcial para el examen de todos los negocios u operaciones que se le presentan, sean quienes fueren los proponentes. Desde el momento en que dejan de tener influencia las recomendaciones políticas o personales, y sólo se tienen en cuenta las condiciones, las garantías y las ventajas de las negociaciones en sí mismas, las gentes sensatas comprenden que el Banco es una entidad seria a la cual se le pueden confiar sus intereses. Debemos empeñarnos en que así siga siendo para que llegue pronto el día en que a nadie en este país se le ocurra pensar que sus intereses están mejor resguardados en un banco con nombre extranjero que en el propio Banco de la Nación.

La labor de restauración moral ha sido larga y difícil; pero ella ha sido tan completa y tan benéfica que es de dudarse que los errores lastimosos de otros tiempos puedan repetirse jamás. Ahora, la labor es de desarrollo, y me atrevo a esperar que con la cooperación del Gobierno en sus diversas ramas, será satisfactoria y fructífera.

El Banco necesita ensanchar sus operaciones comerciales, establecer relaciones que una vez normalizados los negocios en Europa le permitan hacer transacciones de cambio para servirle a nuestro comercio de importación y de exportación; necesita simplificar los trámites legales establecidos para ciertas operaciones, y sobre todo, separar en forma visible la sección hipotecaria prevista en la ley, para evitar que los recursos con que el Banco atiende a sus ne-

gocios comerciales se inmovilicen indefinidamente en inversiones hipotecarias.

Las relaciones del Banco con el Estado han sido motivo de examen y discusión por la prensa, y sobre tan importante asunto encontrareis entre los anexos la opinión del Poder Ejecutivo, expresada a solicitud del señor Domingo H. Turner.

Para que no haya dudas respecto de la responsabilidad de la Nación por las operaciones del Banco, bueno sería que el punto quedara establecido en la ley de un modo claro y perentorio.

Una de las cuestiones bancarias a las cuales he dedicado especial estudio por muchos años, es el de la emisión de Cédulas hipotecarias para facilitar el uso del crédito fundado en la propiedad inmueble, sin que por eso quede estancado el capital invertido, como acontece en las hipotecas ordinarias.

La ley 7a. de 1917, reglamentó la emisión de Cédulas por medio de la organización de Bancos Hipotecarios, y la 38 del mismo año dispuso que el Banco Nacional pudiera hacer uso de la misma facultad concedida a aquéllos. Hasta hoy ningún Banco se ha organizado de conformidad con la Ley 7a, ni el Nacional ha hecho uso de la facultad de emitir Cédulas. Como nuestro Banco tiene una Sección Hipotecaria, que según el estado de la institución el día 31 de Julio último, arrojaba una inversión en hipotecas de B/1.063.523,77, es claro que existe una base importante para la primera emisión de Cédulas.

Lo esencial para que esta operación bancaria pueda producir buenos resultados es conseguir mercado para las Cédulas, y esto no será difícil si la Asamblea Nacional, en una ley complementaria de las acabadas de citar, dispone lo siguiente:

1o.—Que las Cédulas Hipotecarias que el Banco Nacional emita estén garantizadas tanto en el valor que expresa como en sus intereses, no sólo con el capital de la institución y con todas las hipotecas a favor de ésta, sino también por la Nación misma con todas sus rentas y recursos;

2o.—Que las Cédulas hipotecarias del Banco Nacional sean de uso obligatorio en todos los depósitos de dinero que las autoridades exijan en calidad de fianzas judiciales o administrativas;

3o.—Que el Secretario de Hacienda y Tesoro quede plenamente autorizado para disponer que se invierta en Cédulas hipotecarias la parte del capital de seis millones de dollars, colocado en hipotecas en Nueva York, que a su juicio pueda ser invertida en dichos documentos con mejor provecho para el Fisco y para el país; y

4o.—Que los fondos en efectivo pertenecientes a sucesiones, herencias yacentes y menores se inviertan en Cédulas hipotecarias.

Con disposiciones legislativas de esa naturaleza el Banco Nacional podrá ofrecer en el país y en el exterior un documento atractivo para todos los que tienen sumas grandes o pequeñas sin empleo, y podrá hacerse, seis meses después de dictada la ley, la primera emisión por una suma de B/.600.000.00 o sea menos del 60 por 100 de las hipotecas que el Banco tiene hoy constituidas a su favor.

Organizado ese ramo del Banco, ya podrá éste principiar a hacer colocaciones de dinero a largos plazos para impulsar la agricultura y las demás industrias derivadas o conexas con ella, y se impondrá enseguida la necesidad de otras emisiones de Cédulas tan pronto como se hayan colocado en hipotecas los productos de la primera y de las demás que sucesivamente se vayan haciendo.

El Gerente del Banco, señor don José Agustín Arango os rendirá directamente el informe que la ley dispone sobre la marcha de la Institución durante los dos últimos años y en ese documento hallaréis los datos numéricos precisos que no incluyo en esta Memoria para no incurrir en inútiles repeticiones. Sea ésta la ocasión de manifestaros una vez más, públicamente, la satisfacción del Gobierno por la manera como el señor Arango ha venido desempeñando sus delicadas funciones, y por el éxito alcanzado en la labor de darle al Banco por su irreprochable manejo, el prestigio merecido de que hoy disfruta.

MONEDA NACIONAL

El único informe que puedo daros respecto de nuestra moneda nacional acuñada en 1904, es que ha desaparecido por completo de la circulación. El alza extraordinaria que en 1917 tuvo el precio de la plata en los mercados del mundo determinó la exportación clandestina de nuestra moneda acuñada, y cuando se tomaron medidas para impedirla, era ya tarde. Hoy no existen en todo el Istmo ni cien mil balboas de aquella moneda; y de esta suma, más de la mitad se halla en poder de los Bancos locales. Interrogado por mí uno de los Gerentes de dichas instituciones sobre la razón que había para que nuestra moneda de plata no fuera puesta en circulación, me contestó que varias veces había intentado él hacerlo dándola en pago de cheques contra su Banco y siempre los cobradores habían rehusado recibirla, manifestando que los billetes de bancos americanos eran más cómodos.

El resultado de esa actitud de los mismos panameños que en ocasiones expresan públicamente su sorpresa de que el país carezca de moneda nacional, es que hoy no circulan, desde un confín al otro del territorio, sino billetes de bancos de los Estados Unidos, algunos de ellos desconocidos en el país, billetes de la Junta de Reserva Federal, monedas de plata de los Estados Unidos del valor de un dollar, cincuenta, veinticinco y diez centavos, monedas de níquel de cinco centavos y monedas de cobre de un centavo.

Tal situación es completamente anómala desde el punto de vista de nuestras leyes escritas. El Código Fiscal, reproduciendo en ésto lo que dispuso la Ley 84 de 1904, establece que el dollar de oro de los Estados Unidos de América y sus múltiplos serán de curso legal en la República al igual que nuestra moneda de plata, pero no le da ese carácter a las monedas de plata, de níquel o de cobre, como tampoco a los billetes bancarios extranjeros, cualquiera que sea su procedencia. En el convenio monetario celebrado en Washington el 20 de Junio de 1904, entre los representantes panameños y el entonces Secretario de Guerra Honorable William H. Taft, se aceptó el mismo principio que no ha sido alterado por ningún arreglo posterior.

Pero aún hay más. El artículo 331 del Código Fiscal prohíbe la introducción al país de monedas de plata y de níquel que no sean emitidas dentro de los límites fijados en la ley, y si eso es imperativo aun tratándose de las monedas de plata y de níquel panameñas, con razón mucho mayor debe serlo respecto de monedas de otros países.

Nos encontramos, pues, en una situación extra-legal que exige un pronto reajuste. Es claro que el pretender por medio de actos gubernamentales ponerle vallas al curso fatal de las leyes económicas es un pueril delirio, pero también es inadmisibile que continúe sin sanción legal un estado de cosas ocasionado a conflictos civiles en las Cortes de Justicia.

El hecho de usar nosotros en Panamá todos los diversos instrumentos de cambio y todas las monedas de los Estados Unidos de América, lejos de ser un perjuicio es una gran ventaja para el comercio, para la industria y para el pueblo panameño. Tenemos, merced a esas circunstancias, un cambio estable como no lo tiene hoy ningún otro país del mundo, pues el dollar es actualmente la moneda dominante en todas las transacciones comerciales; pero reconociendo el hecho, debemos legalizarlo y complementar nuestro Convenio monetario con los Estados Unidos a efecto de establecer quiénes responden, en qué forma y hasta qué límites de los billetes

que hoy circulan aquí, emitidos por Bancos desconocidos, sin ninguna agencia en Panamá.

En cuanto a nuestra propia moneda fraccionaria de plata y de níquel debemos adoptar una política definida. ¿Conviene tenerla para satisfacer el sentimiento nacional de poseer un medio circulante propio con nuestro propio escudo? Me parece que sí; pero acuñar moneda cada veinte años no es una medida satisfactoria. Es preciso hacer acuñación, en cantidades moderadas, cada dos años por lo menos, sobre todo de las denominaciones más pequeñas, o sean las de veinticinco y diez centésimos de balboas, de conformidad con la ley 62 de 1917. Estas monedas pequeñas, unidas a las de níquel de cinco y dos y medio centésimos de balboas, también previstas en la citada ley, son las más empleadas para las transacciones pequeñas en los pueblos del interior del país, y las que más se deterioran por el constante uso. Acuñar, pues, a juicio del Poder Ejecutivo, hasta medio millón de balboas en monedas fraccionarias de plata y de níquel cada dos años, sería un paso juicioso. Comenzando en este año o en el próximo, podría hacerse otra acuñación en 1925, y después de esa fecha podría comenzarse a retirar las monedas ya gastadas para reacuñarlas sin gran costo.

Para realizar esta idea, es necesario modificar nuestro Convenio monetario con los Estados Unidos. Durante mi último viaje a aquel país en 1921, en misión especial, traté este asunto con el Secretario de Estado y con el Jefe de la Sección Latina, quienes le pasaron mi propuesta a un experto en cuestiones monetarias. La respuesta de éste fue favorable al plan, pero le pareció que la Ley 62 necesita ser adicionada en ciertos respectos, y mi regreso a Panamá me impidió terminar las negociaciones.

El experto referido, entre otras cosas, observó que disponiendo la nueva ley monetaria nuestra que la relación de la moneda de plata panameña con la de oro fuera de 16—1, cuando la anterior establecía la de 32-1, la diferencia entre el valor intrínseco del metal y el valor de la moneda serían muy considerables, y que por eso era preciso aumentar el depósito convenido para garantizar la paridad de dicha moneda. Esta observación es muy razonable y será tenida en cuenta por el Gobierno al considerar el nuevo arreglo.

Además de las monedas de plata de los Estados Unidos que circulan en Panamá sin restricción alguna, el principal medio circulante hoy, como ya os he informado y como vosotros sabéis por experiencia, son los billetes emitidos por los Bancos Nacionales de los Estados Unidos, por los Bancos de Reserva Federal, por

la Junta de Reserva Federal y los Certificados de plata emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos.

Ninguna persona medianamente conocedora de la solidez de los Bancos de Reserva Federal y de la calidad de los Certificados de oro y de plata que emita la Tesorería de los Estados Unidos de América, puede hacerle objeción a billetes emitidos por esas entidades, pero hay muchos otros Bancos Nacionales, así llamados por haberse organizado y funcionar con sujeción a las leyes federales de aquel país, cuyas condiciones financieras no son conocidas aquí y cuyos billetes nadie está obligado a cambiar por oro en Panamá. Si esos bancos tienen el privilegio de *facto* de hacer circular sus billetes entre nosotros, ¿por qué no ha de tener nuestro Banco Nacional la facultad de emitir también billetes, siempre que se establezcan restricciones severas para hacer que tales billetes merezcan una confianza absoluta, aparte de las condiciones usuales de cambio a su presentación y de recibo en pago de contribuciones e impuestos? Esta faz de nuestras finanzas merece un atento estudio y consulta franca con comerciantes y banqueros.

DEUDA PUBLICA

La Nación ha atendido con absoluta puntualidad al pago de los intereses de su deuda externa y a la amortización anual convenida en los respectivos contratos.

La deuda externa, como sabéis, se reduce a los empréstitos contratados en 1914 y 1915, así:

El primero por el cual se autorizaba y convenía en una emisión de bonos por un total de tres millones de dollars, a la rata de cinco por ciento de interés, amortizables en treinta años y garantizados en principal e intereses con la anualidad del Canal. De este empréstito, destinado a la construcción y equipo de ferrocarriles, sólo se han emitido bonos por un total de \$2.250.000.00, y el producto fue usado en la construcción del Ferrocarril de Chiriquí.

El segundo empréstito, contratado en 1915, fue por la suma de B/.1.200.000.00, a la rata de 5 por 100 anual, amortizable en nueve instalamentos, contados desde 1917 y garantizados con el producto de los seis millones de dollars pertenecientes a la Nación e invertidos en hipotecas en la ciudad de New York.

El saldo de dichos empréstitos es hoy el siguiente:

Empréstito de 1914	B/. 1.726.000,00
Empréstito de 1915	B/. 550.000,00

La amortización del primero se efectúa con las sumas destinadas al efecto de la anualidad del Canal, aplicadas por los fideicomisarios en primer lugar al pago de intereses y el resto a la redención del número de bonos que puedan ser retirados forzosa o voluntariamente.

La amortización del segundo empréstito se hace pagando \$130.000.00 por año, más los intereses, pero el último año, o sea el de 1925, el pago será de \$160.000.00.

La deuda interna existente hasta 1921 y de la cual teneis conocimiento por informes de mis predecesores, ha continuado amortizándose en la forma prescrita en leyes vigentes y en contratos o convenios celebrados con los acreedores. La más considerable de esas deudas es la originada de las obras de relleno del lugar en que después se ha levantado la población de Almirante, en la Provincia de Bocas del Toro, obras que fueron emprendidas a un enorme costo sin beneficio visible para la Nación y antes bien en perjuicio de la capital de aquella Provincia.

Con motivo del conflicto armado con Costa Rica , y en vista de la necesidad de obtener elementos de guerra para nuestras tropas de voluntarios en vía de organización, el Poder Ejecutivo solicitó de vosotros, reunidos en sesiones extraordinarias, la autorización indispensable para emitir un empréstito de B/500.000.00, y sin vacilación dictasteis la Ley 1a. de 1921, en la cual dispusisteis una emisión de bonos por la suma solicitada, que ganaran el interés de ocho por ciento, y fueran amortizables en diez años con la garantía de los productos de la renta de licores.

Para colaborar con el Gobierno en todo lo relativo a la adquisición de recursos para aquella emergencia, se creó una Comisión consultiva de Hacienda, compuesta de los señores Ricardo Arias, A.T. Ruan, Ernesto T. Lefevre, Raúl Espinosa y José Agustín Arango, comisión que prestó con el mayor celo y entusiasmo patriótico los servicios que se le asignaron, e intervino con actividad e inteligencia dignas de la gratitud del país en la colocación rápida de los bonos, por medio de los Bancos locales. Abierta en éstos la suscripción popular del empréstito, no hubo panameño que no concurriera a ella con su óbolo y las ofertas excedieron en pocos días la cantidad autorizada.

Terminado el conflicto y liquidadas las cuentas más importantes, el Poder Ejecutivo se convenció de que no llegaría a necesitarse toda la suma del empréstito y resolvió dedicar una parte de ella a la compra de los mismos bonos emitidos. De ese modo redimió la suma de B/47.250.00, y el empréstito quedó, por consiguiente, reducido a B/452.750.00.

Los bonos de este empréstito se denominan Bonos de la Defensa Nacional y tanto por el alto interés que devengan como por el crédito de que la República goza, son muy solicitados y los Bancos locales tienen siempre órdenes de compra de capitalistas residentes aquí y en el extranjero por sumas de consideración.

El uso de las sumas recibidas con motivo de esta operación financiera le correspondió al Secretario de Gobierno y Justicia y a la Junta de Defensa Nacional, encargados de todo lo referente a operaciones militares y a gastos relacionados con éstas.

Según informe del Sub-Agente Fiscal, la mayor parte de las cuentas fueron oportunamente examinadas por la Junta de Defensa Nacional, aprobadas por ella, y definitivamente fenecidas por el Agente Fiscal; pero hay algunas cuentas no aprobadas todavía por haberse disuelto la Junta y por estar los documentos en poder del Vicepresidente de aquélla, señor Ramón Arias Jr. Esta parte se refiere a la gestión del señor Coronel Rafael Neira A., como Intendente Militar, y aunque este íntegro servidor público ha pedido repetidas veces que tales cuentas sean severamente examinadas, ellas no lo han sido por la razón ya dicha de estar los documentos en poder de un miembro de la Junta, que no los ha entregado todavía a la Secretaria de Hacienda y Tesoro. Por la demora en el examen se le han hecho cargos públicos a los responsables de las cuentas, pero el Poder Ejecutivo tiene el convencimiento más firme de que el manejo de los fondos confiados al Intendente Militar y a sus agentes de confianza, fue irreproachable desde el punto de vista de su honorabilidad y de su interés patriótico.

El Poder Ejecutivo insistirá en que tales cuentas con sus comprobantes sean examinadas antes de que terminen vuestras sesiones.

Sobre el estado general de nuestra deuda externa e interna hallaréis un cuadro anexo que presenta todos los datos en forma clara y concisa.

En el estado de la deuda, no encontrareís, sin embargo, ciertos cargos especiales que se cubren con fondos también especiales y que no figuran en los Presupuestos ordinarios. Tales son las deudas contraídas por la Junta Fiscalizadora del Nuevo Hospital Santo Tomás, con motivo de los trabajos de construcción de los edificios de éste y de la compra de terrenos, las cuales se van pagando con los beneficios de la Lotería Nacional de Beneficencia y el producto del impuesto para la Lucha Anti-Tuberculosa.

Para daros una idea de la magnitud de los gastos realizados hasta el 30 de Junio último, y de la deuda actual, os suministro los datos siguientes:

Sumas disponibles y su procedencia.

Lucha antituberculosa	B/. 473.881,72
Lotería Nacional de Beneficencia	B/. 762.000.00
Un préstamo del Banco Nacional	B/. 150.000.00
Reintegro	552,00

Total B/. 1.396.434,22

De las cuales se habían invertido hasta el 30

de Junio B/. 1.376.416,95

Las deudas existentes el 31 de Julio y en
curso de pago son:

Al Banco Nacional B/. 145.222,45

A otros acreedores por suministros, trabajos

y servicios B/. 151.292,38

Total B/. 296.514,83

FISCALIZACION MUNICIPAL

El señor Presidente de la República en el Mensaje que os ha dirigido en cumplimiento de un deber constitucional, ha expuesto francamente el móvil patriótico que le guió al asumir la función de intervenir en el manejo interno de los Municipios, con el fin de que se administraran con cordura sus intereses y de que se dedicaran sus rentas a actividades y obras benéficas para la comunidad.

Nuestros municipios, con raras excepciones, han carecido de administración eficiente, y muchos no tienen ninguna. El atraso económico en que se hallan, la escasez de la población con que cuentan, la falta de iniciativa para el trabajo, tal vez ocasionada por las pésimas condiciones sanitarias de casi todo el territorio, hacen del mayor número de nuestras comunidades bautizadas con el pomposo nombre de Distritos, unas entidades inactivas, decadentes, quejumbrosas y tristes, que han perdido la fe y están a punto de perder hasta la esperanza. En esas comunidades de vida social embrionaria, el espíritu público es casi nulo; prevalece el parasitismo que es hermano del gamonalismo en sus formas más crudas y de ahí resulta que el manejo de los municipios es cuestión de familia o de un grupo reducido, menos ignorante que el resto de la masa popular. Una administración de ese género, libre para disponer lo que deseen sin contrapeso, sin freno y sin sanción, muy pronto olvida las restricciones de la moralidad y hace predominar su interés egoísta sobre el interés comunal.

El remedio fundamental de esos males se halla en la difusión de la cultura y en el crecimiento de la población y de los intereses económicos; pero ese remedio es de resultados lentos y su influencia se mide por décadas de años. Nosotros necesitamos un remedio rápido, que principie siquiera por cortar los síntomas, mientras el otro obra lentamente para extirpar la causa. Ese remedio es la inspección de las Municipalidades en su funcionamiento y en el uso de sus rentas para poder pedir la aplicación de las leyes penales en casos de delincuencia.

A estas medidas se han opuesto muchos municipios apoyándose en el principio constitucional de la autonomía de que ellos gozan según el artículo 130 de la Constitución. La cuestión se origina del mal uso de una hermosa palabra. Si la palabra **autonomía**, usada en la Constitución pudiera tener en la ley el valor que tiene en la lengua, Panamá habría descubierto la fórmula del desgobierno perfecto, pues cada municipalidad estaría libre de la sujeción a las leyes nacionales y podría con completa independencia legislar en todos sentidos con sólo limitar a la extensión del Municipio, el imperio de sus disposiciones. Creación de rentas, creación de empleos, contratos, concesiones, todo podría hacerlo; pero la verdad es que tal no fue el pensamiento de la Convención Nacional como lo demuestra el artículo 131 de la misma Carta, que lleva en sí restricciones muy importantes.

Y después de eso, todas las leyes sobre régimen municipal dictadas por las Asambleas no son sino leyes restrictivas y destructoras de lo que podía llamarse **autonomía municipal**, dándole a la frase la extensión que hoy se le da por los enemigos de la fiscalización.

El caso más original es que si el Gobierno aceptara el principio de la autonomía en la forma en que lo presentan y lo sostienen los opositores de la fiscalización, los mismos Municipios serían los primeros en protestar con energía y tesón, pues aquella actitud significaría la abstención absoluta de la Nación de intervenir en muchas funciones de la vida municipal que constituyen un capítulo muy apreciable de los presupuestos nacionales. Las Alcaldías, las Corregidurías, las Escuelas urbanas y rurales, los Agentes de Policía, la construcción, mantenimiento y reparación de edificios públicos y de caminos, los Cuerpos de Bomberos en donde estén establecidos con organización permanente, los hospitales y los establecimientos de beneficencia, todo eso correría a cargo de los Municipios autónomos y ellos tendrían que pagar tales servicios y obras con sus propias rentas, o suspender unos y otras.

Estas observaciones conducen a evidentes absurdos y demuestran que la frase: "Los Municipios son autónomos en su régimen

interior", usada en la Constitución, tiene entre nosotros un significado convencional, limitado a lo que el Poder Legislativo considere como justa y práctica división de poderes, facultades y funciones entre la Nación y los Municipios.

Ahora bien, lo que el Poder Ejecutivo ha deseado y desea es el orden, la decencia y la integridad en la administración de los Municipios. ¿Hay en esto alguna ofensa? ¿Es que los Municipios quieren que en ellos prevalezcan y perduren el desorden y el desgüeño, la falta de sistema y la falta de integridad? No es concebible semejante actitud.

Sobre este asunto, motivo de ardientes discusiones por la prensa durante el año pasado, se han dictado varios decretos que hallaréis por su orden entre los anexos de esta Memoria, y el que está vigente expresa en sus consideraciones y en su parte dispositiva el verdadero espíritu de la fiscalización.

Los Auditores viajeros creados por el Decreto van a los Municipios con instrucciones de sus jefes, averiguan la organización del Concejo, toman nota de las rentas y gastos municipales, instruyen a los Concejales y a los Tesoreros sobre el modo de preparar los Presupuestos, de colectar las rentas, de hacer los pagos y de rendir y aprobar las cuentas, y actúan como consejeros encargados de instruir y de establecer principios de orden y de método en los procedimientos. Si en sus visitas encuentran algo delictuoso, su deber es informar el hecho para que el Secretario de Hacienda disponga la investigación criminal correspondiente.

Este plan de fiscalización se halla ahora en práctica y no hay motivo alguno que justifique su alteración.

De desearse sería el establecer por ley una clasificación de los Municipios que permitiera aplicarles, según su categoría, diversas medidas de fiscalización, pero nuestra Constitución no distingue entre Municipios y falta saber si la Asamblea Nacional tiene voluntad de establecer tal distinción.

Si en alguna forma estas cuestiones se le presentan a la Asamblea, yo desearía ser expresamente citado para tener el honor de manifestaros más detalladamente mis ideas.

NUESTRAS CONDICIONES ECONOMICAS

Al hablaros en la primera parte de este informe de las causas del descenso experimentado en nuestras rentas desde 1921 para acá, os he expresado mi opinión de que, además de las expuestas allí con algún detenimiento, existía otra causa más general y más

profunda, a la cual me referiría después especialmente. Se trata del bajo nivel de nuestra capacidad económica, y al hablarlos sobre el asunto no lo hago para comunicaros con solemnidad ningún descubrimiento mío, sino para presentaros en forma comprensible lo que todo el mundo está pensando, viendo y sintiendo hoy en el país.

A primera vista parecerá extraño que en una Memoria de este género se incluyan consideraciones y reflexiones sobre el aspecto económico de nuestra vida nacional, pero lo cierto es que todo plan fiscal juicioso y justo, necesariamente tiene que fundarse sobre la productividad económica del país y por consiguiente es muy propio y hasta puedo decir, indispensable, que se ilustren las cuestiones económicas para poder tratar con acierto los problemas fiscales. Es una observación elemental que puede darse el caso de un país económicamente pobre con una hacienda pública relativamente rica y el caso contrario de un país económicamente rico con una hacienda pública exhausta. La diferencia se halla en la justicia o en la injusticia de los tributos y en su reparto racional y equitativo. Un Gobierno cuya única mira sea realizar el bienestar de los asociados por medio de leyes y de actos protectores de los derechos, de las actividades y de las aspiraciones de éstos, y promover el desarrollo y el progreso del país a fin de que aquel bienestar aumente, se difunda, se perpetúe y beneficie a las generaciones futuras y a los hombres de otras razas y otros pueblos que vengan en busca de asilo o de fortuna, debe preocuparse hondamente por resolver con sabiduría los problemas fiscales y económicos.

Ninguna época de la historia humana ha revelado mejor que la presente la influencia irresistible y el poder formidable de las cuestiones económicas; y dirigiendo la vista hacia atrás, hacia los tiempos más remotos, se nos presenta con claridad hiriente el hecho de que en la formación, la preponderancia y la caída de los imperios han tenido mayor importancia los fenómenos económicos que las cuestiones políticas o religiosas, consideradas hasta ahora como más decisivas y avasalladoras.

Durante más de tres siglos, por ejemplo, existió en Europa el Imperio Austro-Húngaro, compuesto de razas diversas y de diversas nacionalidades. Arrastradas éstas por el pensamiento de la nacionalidad política como base esencial de progreso y de bienestar, contribuyeron con su acción combinada a la muy reciente disolución del Imperio. Los pequeños Estados surgidos de aquella desintegración viven hoy trabajosamente porque el disuelto Imperio era un todo económico armónico y se observa ya en esos pueblos, a pesar de sus prejuicios raciales, la tendencia irresistible y franca a com-

binarse de nuevo, por lo menos económicamente, para poder subsistir.

Esto nos evidencia que un pueblo políticamente independiente puede ser un pueblo profundamente infeliz si carece del elemento esencial de su independencia económica.

Ahora bien, para tener vida económica independiente, que sea base de un bienestar en armonía con su propia libertad, un país debe producir, es decir, es imperativo que sus hijos se dediquen a crear riquezas suficientes para satisfacer las necesidades de la existencia y algo más que les sirva, por medio del comercio con otros pueblos, para acumular capitales usables en una producción mayor.

Aplicando a Panamá estos principios elementales, es de rigor que al considerar su situación económica comencemos por investigar si su producción es satisfactoria, y en caso de no serlo cuáles son las causas del mal.

Panamá tiene dentro de su territorio de 32.000 millas cuadradas una población de 420.000 habitantes. Si separamos de esa cifra 100.000 habitantes poco más o menos que viven en las ciudades de Panamá y Colón, en un medio económico artificial distinto del resto del país, quedan 320.000 esparcidos en unas pocas ciudades y en un número mayor de pueblecillos, aldeas y caseríos. ¿A qué se dedican esos 320.000 habitantes? ¿Qué es lo que producen, qué es lo que venden, qué es lo que compran y qué es lo que acumulan?

Para responder a tales preguntas es indispensable hacer a la ligera un examen del medio en que esos habitantes se encuentran y de los recursos que la naturaleza les ofrece. En primer lugar tenemos el territorio. Grandes extensiones del país en la vertiente del Pacífico se componen de llanuras regadas por numerosos ríos y adaptables por eso a la cría de ganados, para lo cual han venido sirviendo desde los tiempos de la Colonia; y después, tierra de labor de calidades muy variadas en los valles de los ríos y en las faldas o declives de las montañas. Las relaciones históricas de los tiempos de la conquista y de la Colonia afirman la existencia de metales preciosos en Panamá pero ninguna mina existe hoy en explotación, y mientras no se establezca el hecho positivamente, el decir que poseemos minas de algo, es aventurado. El clima del Istmo es un factor adverso a toda producción, pues la humedad y el calor de las secciones más habitadas agotan las energías del hombre y reducen el producto de su esfuerzo diario. Las selvas de algunas porciones del territorio contienen maderas variables de construcción y de tinte, y otros artículos de gran demanda en los mercados extranjeros, pero todas las explotaciones de ese género se hacen en

pequeña escala, porque no se encuentran grandes extensiones ocupadas por una sola clase de árboles, ni en donde pueda recolectarse un solo producto en cantidades que justifiquen la especialización y permanencia de la industria.

Nuestras tierras de labor son buenas para toda clase de cultivos, desde los que crecen al favor del calor tropical hasta los que necesitan el frescor de las alturas.

Los mares panameños son ricos en peces de todo género, y bien conocidos son, además, el Carey y las perlas que se pescan en sus aguas.

De la sucinta relación que antecede se desprende que Panamá no es un país pobre en recursos naturales. Estos se encuentran en demasía al alcance de nuestras manos, y sin embargo, nuestra producción económica es insignificante comparada con la que debería existir. El factor deficiente no es, pues, la naturaleza, es el factor humano que no se mueve por falta de impulso, que no crea por causas fisiológicas o psicológicas inherentes a su propio ser.

La casi totalidad de los habitantes del país en las secciones a que me he referido especialmente, se dedican a dos principales actividades: son ganaderos o son agricultores, aunque hay muchos que combinan las dos industrias. El ganadero, por lo general, se ocupa de cuando en cuando en ver sus ganados; son éstos los que trabajan, mientras el dueño pasa la mayor parte de su vida en la indolencia. El agricultor lo es siempre en pequeñísima escala: siembra para la alimentación de su familia y algo más que obtenga en exceso, no por designio, sino por accidente, le sirve para comprar algunas ropas de poco valor. Si el producto no le alcanza para esto último, se queda semi-desnudo en su choza esperando que la próxima cosecha sea mejor, o gira sobre el porvenir tomando las ropas a crédito en alguna tienda del lugar más cercano.

El agricultor panameño tiene energías efímeras y es inconstante: descuaaja la selva en pocos días y descansa hasta que llegue el día de las quemas; quema el monte en un día y espera la proximidad de las lluvias; siembra su pequeña finca en unas horas y espera el día de la limpia del terreno; y luego descansa hasta los días de la cosecha. Si se contaran y estimaran los días de espera de un labriego como días de trabajo, perdidos, el valor de su cosecha sería casi nulo y tal vez pura pérdida.

Medida y avaluada como debe serlo la producción económica obtenida de la ganadería y de la agricultura, puede llegarse a datos que demuestran nuestro extraordinario atraso. Calculando en trescientos mil las cabezas de ganado vacuno existentes en el país, y en

un quince por ciento el producto anual de esos ganados, tendremos que la producción bruta de la industria ganadera es de cuarenta y cinco mil reses. Si estimamos cada una de éstas a un precio medio de veinte dollars, el resultado final y positivo de la industria, desde el punto de vista del hacendado, es de novecientos mil dollars por año!

En cambio, tenemos que trescientas mil reses de cría ocupan por lo menos trescientas mil hectáreas de las tierras más cercanas a los centros poblados del país, y eso sólo basta para limitar de un modo visible y perjudicial el área cultivable. Si de esas trescientas mil hectáreas se dedicaran cien mil solamente al cultivo del maíz, escogiendo buenas semillas y usando instrumentos modernos de agricultura, podría obtenerse una cosecha nunca menor de treinta quintales por hectárea. Vendido el maíz a un dollar y medio el quintal, el producto alcanzaría a cuatro millones y medio de dollars, es decir, cinco veces el valor de los ganados producidos por las trescientas mil hectáreas. Y en esta comparación no hemos tenido en cuenta que el cultivo y cosecha del maíz es cuestión de cuatro meses, y que con irrigación adecuada pueden obtenerse tres cosechas en el año, mientras que el ganado tiene sólo una producción por año.

Las cifras usadas en esta comparación no son exageradas, a menos que haya quien niegue que en Panamá puede producirse maíz. El Estado de Indiana ha llegado a cultivar en un año hasta cinco millones de acres o sean dos millones de hectáreas poco más o menos y el producto, que en una cosecha no pasó de cuarenta y tres quintales por hectáreas, fue considerado como mediocre. En Kentucky, con motivo de un concurso entre jóvenes escolares para mejorar los sistemas de cultivo, uno de ellos obtuvo en un acre de tierra algo más de ochenta quintales, o sea como doscientos quintales por hectárea. Si al maíz agregamos el arroz, los frijoles y el algodón, productos absolutamente esenciales para la vida humana y que encuentran por eso fácil salida en los mercados del país o del exterior, ya puede comprenderse que es un grave error económico seguir considerando como buen negocio para un país el destinar a la vida de cada res vacuna una hectárea de tierra que dedicada a la agricultura intensiva podría mantener a cuarenta y cuatro miembros de la especie humana.

Ha habido, pues, en Panamá, una lucha silenciosa y trágica entre el ganadero y el agricultor, y la ley ha terciado en el conflicto para colmar de favores al primero y dejar al segundo en la inseguridad y el abandono. Dos hechos demuestran la verdad de este aserto. Es el primero, la desmedida protección concedida a los

ganaderos con un impuesto prohibitivo sobre la importación de ganados, protección cuyo único resultado ha sido hasta ahora, la carne cara para el consumidor y el cerrarle el mercado de la Zona del Canal a los ganados del país; es el segundo, el principio en vigor hasta hace poco, de que los ganados anden sueltos y que sean los agricultores los obligados a mantener sus cultivos protegidos por cercas sólidas y costosas.

Esas circunstancias han contribuido poderosamente a que los pueblos del interior permanezcan en el estado de atraso en que se encuentran, pues la industria dominante en ellos, la ganadería, es el tipo de las industrias rudimentales, la industria de las primeras etapas del progreso humano, la industria de la inacción, del aislamiento y de la vida quieta, muelle y apacible.

Esa quietud ha creado en nuestros labriegos una segunda naturaleza. Se han acostumbrado a vivir en un mundo en donde no se oye sino el mugir del ganado y como esta industria predispone al hombre a vivir fuera de la sociedad, las necesidades que son el impulso de la actividad económica no existen. Un poco de maíz, de arroz y de sal, algunos plátanos, un vestido de manta sucia, un sombrero de palma y un machete, son las grandes necesidades de nuestros labriegos. Su poder de producción real de seguro no alcanza a sesenta balboas por año, y su poder de compra es por consiguiente, virtualmente nulo.

Si el país desea salir de esa condición primitiva, tiene que cambiar de rumbo. La experiencia de su crisis actual, ocasionada por la súbita baja del valor de los ganados y por la paralización de los negocios conexados con la ganadería, revela elocuentemente que hemos andado por sendas extraviadas. Hasta las mismas leyes protectoras han resultado dañosas, pues ellas contribuyeron a inflar artificialmente el valor de los ganados y la realidad de las cosas ha tornado en aleatorio lo que antes parecía una seguridad perfecta, hasta el punto de que hoy todo el mundo se arrepiente de haber tenido sus capitales invertidos en ganados.

El rumbo que debe seguirse es el de fomentar, promover, favorecer y apoyar decididamente a la agricultura por medio de un vasto plan de disposiciones legislativas y administrativas adecuadas, entre las cuales pueden figurar las siguientes:

1a.—Realizar el pensamiento del legislador de distribuir las tierras baldías e indultadas entre los jefes de familia panameña y los inmigrantes agricultores que vengan al país, dándoles las diez hectáreas ofrecidas por la ley sin costo alguno en los términos mencionados ya en esta Memoria;

2a.—Disponer que los ganaderos tengan todos sus ganados encerrados y hacerlos responsables de los daños que éstos causen en las fincas agrícolas sin excepción de ningún género;

3a.—Establecer y mantener un sistema de irrigación adecuado en las regiones en donde sea necesario para beneficio de los agricultores y aprovechar la fuerza hidráulica donde fuere posible;

4a.—Estimular el cultivo del arroz, del maíz, de los frijoles, de las papas y de otros productos alimenticios, sea haciendo el Estado una promesa solemne de compra que le permita al labriego esperar una compensación justa; sea estableciendo cultivos en grande escala como una enseñanza práctica de indudable beneficio para el país;

5a.—Establecer un impuesto de introducción sobre los productos extranjeros enumerados en el punto anterior, que sea suficiente para igualarlos a los productos nativos en el mercado nacional, más un margen equitativo de provecho para el cultivador, debiendo quedar facultado el Poder Ejecutivo para rebajar el impuesto o aumentarlo según las circunstancias;

6a.—Facilitarle a los agricultores el uso del crédito para sus labores agrícolas y la recolección y movimiento de sus cosechas, por medio de asociaciones locales en conexión con el Banco Nacional.

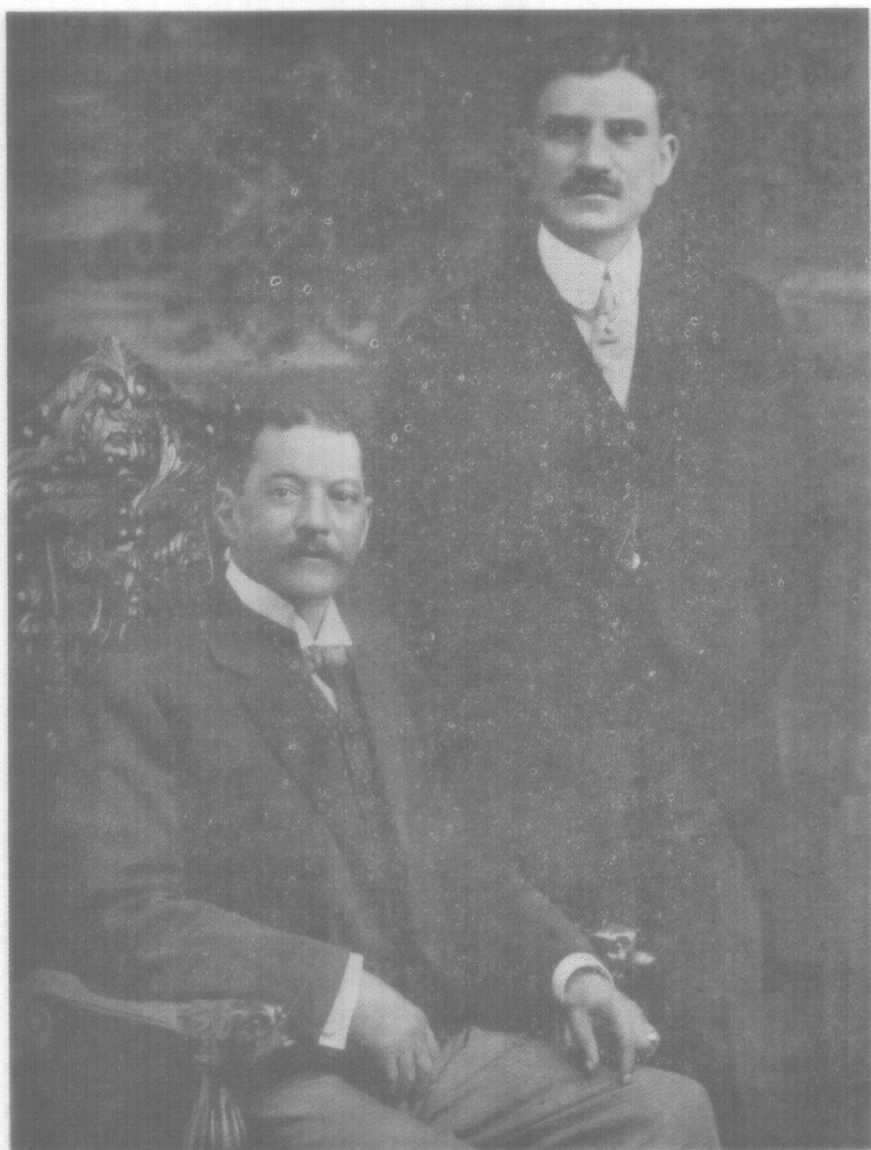
Al mismo tiempo que se ponen en práctica estas medidas, es de rigor continuar la salvadora obra de la construcción de los caminos nacionales, emprender con empeño el saneamiento del mayor número posible de poblaciones del interior, a efecto de que se formen núcleos sociales importantes, sanos y atractivos en los cuáles tanto el nacional como el extranjero inmigrante encuentren vida cómoda, grata y sin peligros, con la consecuencia económica inevitable de crearse nuevas necesidades que determinen un poder mayor de producción y de compra.

Y entonces habremos salido de la vida pastoril sin horizontes en que hemos venido existiendo por siglos, para comenzar un verdadero avance en la vía del progreso; nuestro poder económico ascenderá en progresión geométrica, y los recursos fiscales crecerán también, proporcionalmente, para permitirnos llevar hasta los rincones más remotos del país el influjo propulsor de la cultura y el bienestar social en todas sus formas.

Excusad, Honorables Diputados, que me haya extendido en la parte final de este informe, y termino expresándoos mi confianza en la sabiduría de vuestras deliberaciones y decisiones.

Panamá, 1o de Septiembre de 1922.

Honorables Diputados.



Doctores Carlos Antonio Mendoza (1856-1916), sentado y Eusebio Antonio Morales (1865-1929), de pie. Fotografía tomada en Washington, D.C. en 1913.



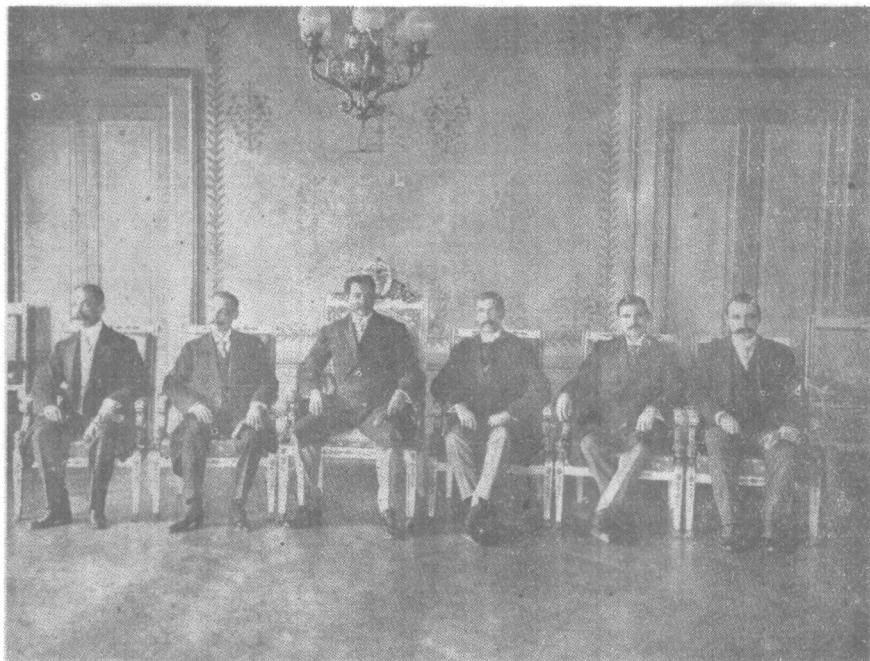
Fotografía tomada el 1° de Marzo de 1910, después de la toma de posesión del Dr. Carlos Antonio Mendoza del cargo de Presidente de la República. De derecha a izquierda: Dr. Eusebio A. Morales, Dr. Carlos A. Mendoza, Dr. Ramón M. Valdés, General Leonidas Pretelt, Coronel Antonio Alberto Valdés, y en el fondo don Constantino Arosemena, en momentos en que salen de la Corte Suprema de Justicia (hoy edificio de las Notarías) hacia el Palacio Presidencial.



En el entierro del Presidente titular de la República, don José Domingo de Obaldía (2 de Marzo de 1910).

En la primera fila, de izquierda a derecha: don Samuel Lewis, Secretario de Relaciones; Doctor Carlos A. Mendoza, Presidente entrante, y doctor Ramón B. Valdés, Secretario de Gobierno y Justicia.

Segunda fila: don José E. Lefevre, Secretario de Fomento; doctor Eusebio A. Morales, Secretario de Instrucción Pública y don Juan Navarro Díaz, Sub-Secretario de Hacienda.



Gabinete del Presidente Dr. Mendoza. Fotografía tomada el 24 de Septiembre de 1910.

De derecha a izquierda: don Ramón F. Acevedo (1865-1931), Secretario de Hacienda y Tesoro; Doctor Ramón M. Valdés (1867-1918), Secretario de Gobierno y Justicia; Dr. Carlos A. Mendoza (1856-1916), Presidente de la República; don Samuel Lewis (1871-1939), Secretario de Relaciones Exteriores; Doctor Eusebio A. Morales (1865-1929), Secretario de Instrucción Pública, y don José Edgardo Lefevre (1881), Secretario de Fomento.



EUSEBIO ANTONIO MORALES

*Carta del Dr. Morales
al poeta Miró
sobre el poema "Patria"**

LEGACION DE PANAMA — Washington, junio 22 de 1915.

Sr. D. Ricardo Miró,
Panamá

Estimado amigo:

Esta carta cuyo objeto es enviarle a Ud. una tardía felicitación le causará sorpresa, y por lo mismo requiere un preámbulo. Cuando joven, llevado por el temperamento contemplativo, yo escribí versos. Después, en presencia de las realidades de la vida, me dediqué a estudios en los cuales predomina la razón, poniendo a un lado el campo del sentimiento, y llegué hasta el extremo de no leer sino los versos de los grandes poetas. Así se explica cómo yo no he leído nada de Ud. en los años pasados.

Cuando estuve de Secretario de I.P. oí recitar a una alumna de la Normal una composición que me pareció muy buena titulada Patria, pero no averigué quién era el autor. Ayer recibí el periódico Industrias y Arte publicado por la Escuela de Artes y Oficios, y con positiva sorpresa descubrí que la composición que tanto me había impresionado en la Normal era de Ud. La he leído, la he releído a mis hijas varias veces y no he podido reprimir el impulso de manifestarle a Ud. que esa pequeña composición es suficiente para darle fama imperecedera a cualquier poeta. Ud. ha condensado en pocas líneas un poema inmenso de sentimiento que existe inédito en todas las almas nobles y que sin embargo, nunca ha tenido, en mi concepto, una expresión más digna y más elocuente. Reciba por eso mi entusiasta aplauso.

Créame su amigo afmo.,

EUSEBIO A. MORALES

* Esta carta fue dada a conocer por Rodrigo Miró en 1965.

ENRIQUETA MORALES

Mi recuerdo de Eusebio A. Morales

I

...Mi padre era un ser que disfrutaba cada instante de la vida. Era un hombre de intereses múltiples. Yo recuerdo por ejemplo, que era muy aficionado a los juegos de gallos, aunque rechazaba las apuestas, y con frecuencia iba los Lunes a la Gallera, para presenciar las competencias.

Sus amigos se sorprendían que tuviese tanto interés en ellos y conociese tantos detalles, hasta preveer en innumerables ocasiones quiénes serían los ganadores.

Los fines de semana, invariablemente viajaba hacia la Isla de Taboga con alguno de mis hermanos, y nada le gustaba tanto como nadar en la playa, pues era un nadador estupendo.

Le encantaba la música típica panameña, y algunas veces hacía que mi hermana Josefina tocara el piano, mientras Helena cantaba; cuando llegaban los carnavales se alegraba muchísimo y se mezclaba entre los desfiles; estaba pendiente de cada día, y conocía como una autoridad todo lo concerniente a los vestidos, bailes, música y carrozas.

Una de las cosas en que más se entretenía en su tiempo libre era en el ajedrez, y así como celebraba con indisimulado regocijo sus triunfos, se sentía muy deprimido cuando perdía; sus mayores disgustos los expresaba cuando no podía ganarle a un contrario.

Recuerdo que una vez en nuestra casa jugó con el Dr. Belisario Porras, y mi padre le observaba al señor presidente:

— Tú no eres contrario para enfrentarme—

Belisario Porras celebraba mucho el encuentro en el que Morales le había ganado, y lo repetía siempre sonriendo.

Otras de sus aficiones eran las tertulias y el cine. Al salir de sus clases de Derecho, que disfrutaba intensamente, como el actor que participa en una obra de teatro, se reunía con sus alumnos en la Plaza de la Catedral o algunas veces iba caminando con ellos en grupo por lo largo de la Avenida Central; ellos le escuchaban atentamente, pero nada le proporcionaba mayor regocijo que enfrentar a alguno de ellos, que con inteligencia criticara sus puntos de vista.

Le fascinaba el cine, pero como era un perfeccionista, al salir de la obra comentaba todos los errores de la cinta o de los actores.

Era un hombre que le interesaba todo en la vida, y estaba enterado de todas las noticias, sobre todo de las internacionales.

Cuando vivíamos en Washington quería saber todas las noticias de la Guerra Europea, y de la Política Norteamericana; su secretario José Edgardo Lefevre, era el encargado de buscar los periódicos, de cazar las noticias informales, y luego mi padre le exigía a Joe que le diera sus puntos de vista, haciéndole múltiples preguntas, como quien enfrenta un examen.

Eusebio A. Morales era un hombre exageradamente puntual, y si se adelantaba a la cita, esperaba hasta que fuera la hora exacta; era un hombre muy organizado para todo, para todo tenía una liturgia calculada, un orden, una hora, era un hombre elegante, limpio, cortés, que no disimulaba su superioridad sin pregonarla.

Al vestir era cuidadoso hasta el extremo, tenía finas colonias; por su porte, su manera de vestir, sus movimientos, se imponía dondequiera que estuviese; no se desprendía del bastón, que era todo un símbolo para él, y de ellos tenía una colección.

Yo recuerdo, que en una ocasión le recomendaron al joven Aníbal Ríos para que fuese a trabajar con él en el despacho de Hacienda y Tesoro. Aníbal era un hombre sagaz, hábil, eficiente, pero tenía un defecto, era muy impuntual, cosa que irritaba a mi padre; un día envió mi padre por Aníbal Ríos repetidamente pero no había llegado al despacho, y al parecer llegó como a las diez de la mañana.

Al entrevistarle Morales dijo a Aníbal Ríos:

—Aníbal, ¿como estás...? He notado que te acuestas muy tarde,

por eso yo creo que no debes venir a trabajar más, así puedes disfrutar de todas las horas de sueño que te apetezcan.

Aníbal Ríos pidió disculpas a mi padre y desde ese día era siempre el primero en el despacho.

Mi padre repetía a sus hijos y a subalternos que lo más importante para alcanzar el éxito era cumplir la responsabilidad que se nos encomendaba, y por ello exigía siempre el cumplimiento del deber.

Pero él era un hombre que tenía un momento para todo y también tenía horas para la soledad, para la lectura y para la música de los Grandes Maestros; se encerraba en su cuarto, se recostaba en su hamaca y ahí era otro personaje, completamente impenetrable.

Eusebio A. Morales no era hombre de muchos amigos, pero los adolescentes le buscaban para escucharlo con atención, él tenía predilección por ellos. Sus amigos eran como su familia, y entre ellos recuerdo la intimidad que lo unía a Belisario Porras, a Carlos Mendoza y a Ramón Maximiliano Valdés.

Ramón Valdés fue su socio en una firma de abogados por largo tiempo.

En el año de 1916 recién venido de Washington, mi padre fue uno de los defensores de la candidatura de Valdés.

Mi padre solo tuvo una sola secretaria en su vida, Hortensia Remón, quien frecuentemente desayunaba en la casa, porque desde las siete de la mañana, ya estaba dando mi padre las primeras instrucciones del día.

Mi madre tenía enorme cariño por Hortensia, y creo que no hacía muchas distinciones entre ella y mis hermanas.

Morales dictaba sus escritos, pero luego que Hortensia se los devolvía, mi padre los corregía por muchos días a mano, era siempre un perfeccionista del lenguaje, muy preocupado hasta por la musicalidad de la lengua....

Una vez tuvo mi padre un duelo, creo que fue por el año de 1910 y los padrinos fueron David Del Valle Henríquez y Ramón M. Valdés.

Julio Arjona escribió algo en la prensa que disgustó enormemente a mi padre, y entonces lo desafió a duelo, y éste tuvo lugar en lo alto de las bóvedas, era un duelo a primera sangre.

Mi padre había tomado clases de florete y al tener lugar el duelo, hirió a Julio Arjona en una mano; luego hicieron las pases.

En dos ocasiones observé a mi padre en un estado de incontrolable tristeza, cuando murió Eusebio, mi hermano, y cuando falleció Carlos Antonio Mendoza.

En ambas ocasiones estaba mi padre de Embajador en Washington; cuando murió Chebito, lloró como un niño por largos meses, él tenía grandes esperanzas en su hijo....

Con relación a la muerte de Carlos Antonio Mendoza, oí contar en la casa una anécdota y no sé qué veracidad tenga.

El día que murió Mendoza, mi padre, Embajador en Washington salió con mi madre a una recepción oficial; en su ausencia, una persona vino a visitarlo.

La dama encargada de nuestro cuidado salió a la puerta y se encontró con un hombre como de sesenta años, elegantemente vestido, que inquiría por el Dr. Morales....

No está, respondió la dama, y es muy difícil que regrese antes de la madrugada.

—Es una lástima, respondió el visitante, porque mañana yo no puedo regresar.

El visitante se ausentó sin identificarse.

Al día siguiente, ya en el desayuno, la señora dio noticias a Morales de la visita que había venido en la noche y al describirlo en todos sus detalles, mi madre dijo:

—EUSEBIO, ese es el Dr. Mendoza que ha venido a visitarte (El Dr. Mendoza tenía a su hijo a nuestro cuidado, y éste realizaba estudios en los Estados Unidos).

Mientras conversaban en la mesa, mi padre recibió un Cable de la ciudad de Panamá en el cual se le avisaba la inesperada muerte de Carlos Mendoza; nervioso, alterado, mi padre volvió a llamar a la mucama para preguntarle por el visitante de la noche anterior, ella volvió a describirlo, y entonces fue mi padre quien muy impresionado afirmó:

—...Mendoza vino a despedirse de mí....

Dos anécdotas tengo presentes del Dr. Belisario Porras y mi padre, en una ocasión en que estando indispuesta Doña Alicia, a pesar de ser yo una señorita, el Presidente me mandó a buscar para que yo lo acompañara como la primera dama.

Mi padre, Eusebio A. Morales, estaba orgulloso de mí y me repetía en secreto:

Enriquetita qué bien estás haciendo tu papel...

En otra ocasión, mi padre, en su calidad de Ministro de Hacienda tuvo una fuerte discusión con el Presidente Porras. Mi padre y Belisario Porras discutían constantemente, ellos discutían mucho, pero finalmente uno de los dos cedía, tal era el increíble cariño y estado de identificación que había entre ambos.

La reunión de ese día había sido en la mañana, y al llegar al mediodía mi padre a la casa le dijo a Enriqueta mi madre:

—...Queta he renunciado, no puedo continuar en el gabinete...

Era el año de 1922, lo recuerdo perfectamente; mi madre no dijo nada pero observamos en su rostro que estaba contrariada, pero ella siempre prefería que mi padre tomase sus propias decisiones.

En la tarde, cuando cenábamos, alguien tocó a la puerta, mi madre se puso de pies y fue a abrir la puerta y para su sorpresa era el propio Presidente de la República, que sin compañía había venido hasta nuestra casa.

Yo vi lágrimas en los ojos del Dr. Belisario Porras, se acercó hasta la cabecera de la mesa donde estaba mi padre, y entonces Eusebio A. Morales se puso de pies, se abrazaron como dos hermanos.

—...Eusebio, tú tenías razón.... Tú no renuncias. Sin ti no hay gabinete....

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES

**EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 150 FRACCIONES DIVIDIDO
EN CINCO SERIES DE 30 FRACCIONES CADA UNA
DENOMINADAS A, B, C, D y E**

PREMIOS MAYORES

	Fracción	Billete Entero	Total de Premios
1 Premio Mayor, Series A, B, C, D y E	B/.1,000.00	B/.150,000.00	B/.150,000.00
1 Segundo Premio, Series A, B, C, D y E	300.00	45,000.00	45,000.00
1 Tercer Premio, Series A, B, C, D y E	150.00	22,500.00	22,500.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D y E	10.00	1,500.00	27,000.00
9 Premios, Series A, B, C, D y E	50.00	7,500.00	67,500.00
90 Premios, Series A, B, C, D y E	3.00	450.00	40,500.00
900 Premios, Series A, B, C, D y E	1.00	150.00	135,000.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D y E	2.50	375.00	6,750.00
9 Premios, Series A, B, C, D y E	5.00	750.00	6,750.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D y E	2.00	300.00	5,400.00
9 Premios, Series A, B, C, D y E	3.00	450.00	4,050.00
<u>1,074</u>	T O T A L . . .		<u><u>B/.510,450.00</u></u>

Precio de un Billete Entero B/. 82.50
 Precio de una Fracción 0.55
 Valor de la Emisión 825,000.00

**NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS DOMINGOS DE ENERO DE 1979**

SORTEOS	No.	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
ENERO, 7	3124	5221	0590	2176
ENERO, 14	3125	9343	1662	5708
ENERO, 21	3126	1894	9397	4790
ENERO, 28	3127	7804	2361	9859

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 90 FRACCIONES, DIVIDIDO
EN 6 SERIES DE 15 FRACCIONES CADA UNA
DENOMINADAS A, B, C, D, E, y F

PREMIOS MAYORES

	Fracción	Cada Serie	Total de Premios
1 Premio Mayor, Series A, B, C, D, E y F	B/.1,000.00	B/.15,000.00	B/. 90,000.00
1 Segundo Premio, Series A, B, C, D, E y F	300.00	4,500.00	27,000.00
1 Tercer Premio, Series A, B, C, D, E y F	150.00	2,250.00	13,500.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E y F	10.00	150.00	16,200.00
9 Premios, Series A, B, C, D, E y F	50.00	750.00	40,500.00
90 Premios, Series A, B, C, D, E y F	3.00	45.00	24,300.00
900 Premios, Series A, B, C, D, E y F	1.00	15.00	81,000.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E y F	2.50	37.50	4,050.00
9 Premios, Series A, B, C, D, E y F	5.00	75.00	4,050.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E y F	2.00	30.00	3,240.00
9 Premios, Series A, B, C, D, E y F	3.00	45.00	2,430.00
<u>1,074 PREMIOS</u>	<u>TOTAL...</u>		<u>B/.306,270.00</u>

Precio de un Billeto Entero B/.49.50
 Precio de Una Fracción 0.55
 Valor de la Emisión 495,000.00

**NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS MIERCOLES DE ENERO DE 1979**

SORTEOS	No.	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
ENERO, 3	635	8979	3350	5964
ENERO, 10	636	7389	9598	9587
ENERO, 17	637	3171	6261	1184
ENERO, 24	638	7517	8729	0595
ENERO, 31	639	2094	8443	6726

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO N^o. 3136
DEL 1^o DE ABRIL DE 1979
EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 15 FRACCIONES
A B/.1.10 CADA FRACCION

PREMIOS MAYORES

	<u>FRACCION</u>	<u>BILLETE ENTERO</u>	<u>TOTAL DE PREMIOS</u>
1 PREMIO MAYOR	B/.10,000.00	B/.150,000.00	B/.150,000.00
1 SEGUNDO PREMIO	4,000.00	60,000.00	60,000.00
1 TERCER PREMIO	1,500.00	22,500.00	22,500.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

	<u>FRACCION</u>	<u>BILLETE ENTERO</u>	<u>TOTAL DE PREMIOS</u>
9 Premios-Cuatro Primeras Cifras	500.00	7,500.00	67,500.00
9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras	500.00	7,500.00	67,500.00
90 Premios-Tres Primeras Cifras	50.00	750.00	67,500.00
90 Premios-Tres Ultimas Cifras	50.00	750.00	67,500.00
900 Premios-Dos Primeras Cifras	2.00	30.00	27,000.00
900 Premios-Dos Ultimas Cifras	2.00	30.00	27,000.00
9,000 Premios-Ultima Cifra	1.10	16.50	148,500.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

	<u>FRACCION</u>	<u>BILLETE ENTERO</u>	<u>TOTAL DE PREMIOS</u>
9 Premios-Cuatro Primeras Cifras	300.00	4,500.00	40,500.00
9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras	300.00	4,500.00	40,500.00
90 Premios-Tres Primeras Cifras	15.00	225.00	20,250.00
90 Premios-Tres Ultimas Cifras	15.00	225.00	20,250.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

	<u>FRACCION</u>	<u>BILLETE ENTERO</u>	<u>TOTAL DE PREMIOS</u>
9 Premios-Cuatro Primeras Cifras	200.00	3,000.00	27,000.00
9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras	200.00	3,000.00	27,000.00
90 Premios-Tres Primeras Cifras	10.00	150.00	13,500.00
90 Premios-Tres Ultimas Cifras	10.00	150.00	13,500.00
<u>11,397</u>	<u>TOTAL</u>		<u>B/.907,500.00</u>

Emisión 100,000 Billetes
Valor de la Emisión B/.1,650,000.00
El Billeto consta de cinco (5) cifras
Precio de un Billeto Entero B/.16.50